

JUAN BENEYTO PÉREZ

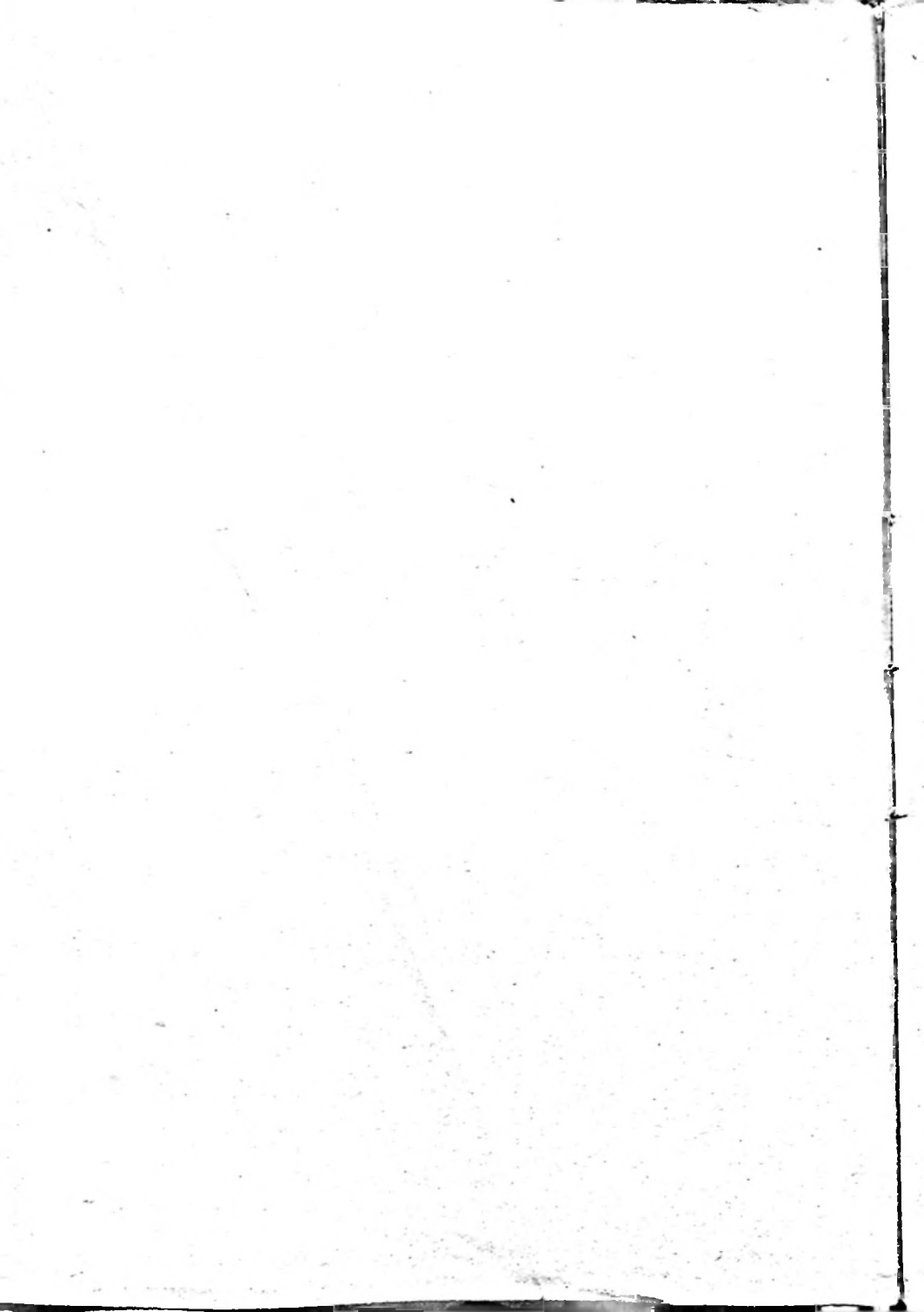
El nuevo Estado Español

EL RÉGIMEN NACIONAL
SINDICALISTA ANTE
LA TRADICION Y LOS
SISTEMAS TOTALITARIOS

PRÓLOGO DEL MINISTRO ITALIANO ARRIGO SOLMI

BIBLIOTECA NUEVA

SEGUNDA EDICIÓN



JUAN BENEYTO PÉREZ

· DR. EN DERECHO POR LA UNIV. DE BOLOGNA, PREMIO VICTOR MANUEL

«GASTDOZENT» EN LA DE MUNICH

EL NUEVO ESTADO ESPAÑOL

**EL RÉGIMEN NACIONAL - SINDICALISTA
ANTE LA TRADICION Y LOS SISTEMAS
TOTALITARIOS**

PRÓLOGO DE

ARRIGO SOLMI

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD, MINISTRO DE JUSTICIA DEL GOBIERNO

DE ITALIA

SEGUNDA EDICION

BIBLIOTECA NUEVA

CÁDIZ · MADRID

1939 · AÑO DE LA VICTORIA

ESTABLECIMIENTOS CERÓN Y LIBRERÍA CERVANTES, S. L.—CADIZ

Las páginas que siguen tienden a situar el Nuevo Estado español en el lugar debido, como reflejo de la Tradición Nacional y de la presencia vigente en el Derecho Público contemporáneo.

El Régimen Nationalsindicalista no es artificial ni caprichoso. Es el resultado de una misión histórica. Las palabras del Caudillo, en la ocasión solemne del 18 de Julio de 1938, complementan lo que ya se decía en el preámbulo al Decreto 255: "queremos un Estado donde la pura tradición y sustancia de aquel pasado ideal español, se encuadre en las formas nuevas, vigorosas y heroicas que las juventudes de hoy y de mañana aportan en este amanecer Imperial de nuestro pueblo."

Dos elementos representan, por consiguiente, en el relato que estas páginas inician, papel más importante: la organización histórica española y la contemporánea del nuevo estilo europeo. De ésta no se hace un aprovechamiento agotador, habiéndose preferido recoger las líneas generales de los dos Estados destacados más característicamente—el Fascista y el Nationalsocialista—, y aludir a Portugal y Turquía por las razones que respectivamente dan la cordial vecindad y parentesco, y la análoga Guerra Liberadora.



PROLOGO

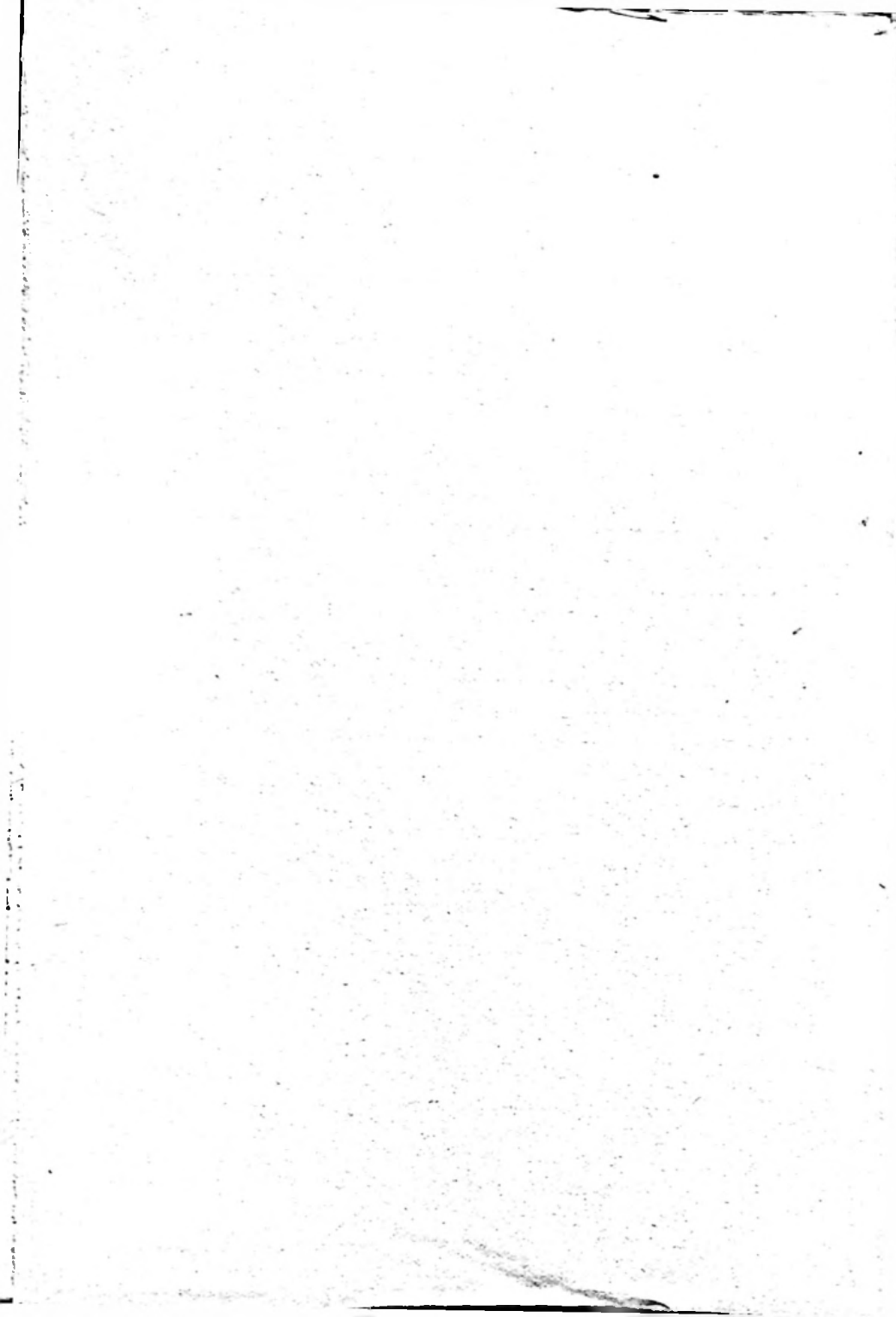
El estudio de las bases del nuevo Estado que ha surgido en la España purificada por la trágica guerra civil, presenta, no solamente para ella, un gran interés histórico y científico. Trátase de uno de los mayores acontecimientos de la historia de los últimos años, siendo altamente significativo que se presente súbitamente, por más que no por pura imitación, sobre las líneas del Estado totalitario creado hace veinte años por Mussolini.

El profesor Juan Beneyto Pérez, profundo y diligente estudioso de la historia del derecho, doctorado por la Universidad de Bolonia y conocedor de la literatura política y jurídica de la nueva Italia, se encuentra en las más favorables condiciones para estudiar este acontecimiento y explicar la génesis y las formas del nuevo Estado nacional.

Precisamente por ésto su obra, aunque sea breve y sintética, será leída con provecho y meditada con pasión por todos aquellos que no han permanecido amarrados a las estructuras políticas pretéritas, ya ahora en plena disolución, y miran con confianza las formas del Estado nuevo, destinado a dar a los pueblos unidad orgánica, certidumbre de vida y justicia.

El campo es vasto y el Autor no ha hecho más que señalar los perfiles. Con todo, su trabajo adquiere una gran significación no solo porque en él se sienten y aprecian las razones históricas que han alejado a España del viejo Estado democrático, que había conducido a esta nación al borde del precipicio, sino también porque expone, con método comparado, la historia paralela de los otros Estados similares—Italia, Alemania, Portugal, Turquía—y aporta, por lo tanto, una contribución eficaz a la investigación científica sobre la formación y la estructura del Estado Nuevo.

Sin duda alguna, la España de los últimos veinte



PROLOGO

El estudio de las bases del nuevo Estado que ha surgido en la España purificada por la trágica guerra civil, presenta, no solamente para ella, un gran interés histórico y científico. Trátase de uno de los mayores acontecimientos de la historia de los últimos años, siendo altamente significativo que se presente súbitamente, por más que no por pura imitación, sobre las líneas del Estado totalitario creado hace veinte años por Mussolini.

El profesor Juan Beneyto Pérez, profundo y diligente estudioso de la historia del derecho, doctorado por la Universidad de Bolonia y conocedor de la literatura política y jurídica de la nueva Italia, se encuentra en las más favorables condiciones para estudiar este acontecimiento y explicar la génesis y las formas del nuevo Estado nacional.

Precisamente por ésto su obra, aunque sea breve y sintética, será leída con provecho y meditada con pasión por todos aquellos que no han permanecido amarrados a las estructuras políticas pretéritas, ya ahora en plena disolución, y miran con confianza las formas del Estado nuevo, destinado a dar a los pueblos unidad orgánica, certidumbre de vida y justicia.

El campo es vasto y el Autor no ha hecho más que señalar los perfiles. Con todo, su trabajo adquiere una gran significación no solo porque en él se sienten y aprecian las razones históricas que han alejado a España del viejo Estado democrático, que había conducido a esta nación al borde del precipicio, sino también porque expone, con método comparado, la historia paralela de los otros Estados similares—Italia, Alemania, Portugal, Turquía—y aporta, por lo tanto, una contribución eficaz a la investigación científica sobre la formación y la estructura del Estado Nuevo.

Sin duda alguna, la España de los últimos veinte

años quedará como ejemplo típico de los más graves daños a que ha conducido el Estado democrático y del mayor ímpetu dado a la llama purificadora de la que surge el edificio del nuevo Estado, como decidida expresión de la conciencia del pueblo. Ausente de la terrible guerra mundial de 1914-18, presenciola oscilante entre una monarquía orientada hacia los aliados y una opinión popular simpatizante con Alemania, llegando a conseguir, gracias a la neutralidad, un bienestar económico que provocó una singular situación de euforia política en su literatura y su vida social. Sus escritores, sus políticos y sus ciudadanos abrazaron un ideal de democracia utilitaria, de optimismo general y de justicia trascendental que pareció el sumo de la sabiduría política y de la justicia social, y que fué sin embargo el veneno destructor que corroía los nervios de la nación preparándola lentamente a la recepción de las doctrinas disolventes del bolchevismo.

España despertó, aunque por breve paréntesis, con la guerra de Marruecos. El esfuerzo de Primo de Rivera no fué comprendido, a pesar de que se inspiraba en el ejemplo italiano, que ya entonces, con la Marcha sobre Roma y por el genio de Mussolini, había dado a Europa una advertencia solemne. Con consentimiento cada vez de mayor amplitud, España volvió por los viejos caminos de la ilusión y de la abstracción, mientras en el terreno de lo concreto las fuerzas oscuras del ateísmo, la masonería y el bolchevismo preparaban lentamente la disolución y la ruina.

El Estado democrático lleva en sí mismo, según ya parece claro ahora, el germen de la disolución. Atribuyendo aparentemente los derechos de soberanía a cada uno y a todos,—lo que significa más bien a nadie—abre las puertas a las injusticias de los poderosos y a la anarquía de las masas. El parlamentarismo, lejos de ser un freno, constituye, en ciertos momentos, el campo en que actúan libremente, sin el menor control, aquellos egois-

mos de los poderosos y aquellas demagógicas fácilmente desbocadas.

Con los acontecimientos de abril y junio de 1931 cayó España en la emboscada de las Constituyentes, con las ilusiones del parlamentarismo y de la libertad que la condujeron, en forma casi inconsciente, a su propia disolución. La tiranía de los hipócritas tuvo campo libre y triunfaron los apetitos de los peores. La división de los partidos políticos disolvió a España en un estado anárquico que le hizo conocer las muestras renovadas de la más terrible barbarie.

Fueron suficientes pocos años para echar abajo una obra de siglos. La que había sido poderosa nación, la que difundió en el Nuevo Mundo la civilización cristiana, la que con sus artistas, sus pensadores y sus santos había llegado a construir la civilización cristiana, la que con sus artistas, sus pensadores y sus santos había llegado a construir la civilización más maravillosa, se encontraba convertida, sin conocimiento consciente, en botín de los hipócritas y los malvados que la llevaban hacia el bolchevismo.

Pero el verano de 1936, rompiendo los velos de la ilusión, mostró de un golpe a la nación española como incorporada a la demagogía y a la anarquía de una parte, y señaló por otra, el momento del renacimiento.

Aquella impresión exterior era el producto artificioso de voluntades extrañas, apoyadas por el ilusionismo español. Se trataba de una falsa España, de una España extranjera que no tenía nada de cuanto llevaban de bueno los siglos de la gloria y del fecundo trabajo. Tratábase de una España dibujada por la demagogía afrancesada y el egoismo ruso. La verdadera España se había recogido en torno a la pequeña llama que avivó José Antonio Primo de Rivera con su discurso del 29 de octubre de 1933, y esa pequeña llama transformóse en el verano de 1936 en incendio purificador, que debía conducir hacia el Estado Nuevo a través de pruebas sangrientas y trágicas.

El Estado Nuevo ha surgido y muestra ya su perfil inconfundible, su estructura sólida y su porvenir seguro. Italia tiene el mérito de haber ayudado a este nuevo Estado con el ejemplo de su construcción política y con la sangre de sus legionarios. España ha demostrado que bien lo merecía y prontamente tendrá su unidad nacional interna y su misión en el mundo.

En tanto que el Estado democrático es el Estado de las injusticias y de la anarquía porque, a través de la ilusión del electoralismo y del parlamentarismo, consiente que el egoísmo de los poderosos y de los malvados desboque sus propias insidias, y abre el camino a las corrientes demagógicas animadas por los peores instintos y exentas de todo control, el Estado totalitario, por su parte, creado por el genio de Mussolini, es el Estado que se apoya en el pueblo y garantiza a éste la justicia, la libertad y el trabajo. En realidad, el Estado totalitario, cuya primera realización ha encontrado vida en Italia con las leyes constitucionales de 1925, con la Carta del Lavoro de 1927 y con la ley del Gran Consejo en 1928, es el Estado popular por excelencia, regulado por un Partido único de gobierno, capaz de impedir todos los egoísmos de los poderosos y todos los movimientos desatentados de los partidos. Fundado sobre las tradiciones históricas del pasado, armonizadas con las exigencias económicas de nuestra época, se propone educar al pueblo con el trabajo y garantizarle el bienestar con la justicia. Representa un progreso gigantesco en el camino de la historia humana y asegura a los pueblos el porvenir y la justa paz.

Así ha sido concebido también por las leyes españolas de 1938. Así ha quedado escrito en el Fuero del Trabajo. Así lo expresa la sangre de los combatientes que crean el derecho y el porvenir de la nueva España.

Arrigo Solmi.

Roma, año XVII.

PRIMERA PARTE

CRISIS DEL ESTADO Y NUEVA LEGALIDAD

Barthelemy, La crise de la democratie contemporaine (Paris, 1931); *F. Battaglia*, Le carte dei diritti (Florenzia, 1934); *G. F. Belforte*, La guerra civile in Spagna (Milán 1938); *Ch. Benoist*, Le crise de l'Etat moderne (Paris, 1936); *L. Cabral de Moncada*, O dever da hora presente (Coimbra, 1937); *E. R. Curtius*, Deutsche Geist im Gefahr (Colonia, 1931); *G. Del Vecchio*, Crisis del Derecho y Crisis del Estado (Madrid, 1935)-El Estado Nuevo y sus Bases Juridicas (Valladolid, 1939); *Franco*, Palabras del Caudillo (2.^a ed. 1939); *S. Panunzio*, Stato nazionale e Sindacati (Milán, 1924)-Teoria generale dello Stato fascista (Padúa, 1937); *Ranelletti*, I sindacati e lo Stato (Politica, 1920); *Rocco*, Crisi dello Stato e Sindacati (Politica, 1921); *E. Vegas Latapié*, Romanticismo y Democracia (Valadolid 1938); *Hitler*, Discurso 20 febrero 1938 (Ed. esp. Salamanca, 1938); *Huizinga*, Im Schalten von Morgen (Leipzig, 1935); *Aurelio Joaniquet*, Calvo Sotelo (Santander, 1939); *Ledesma Ramos*, Discurso a las Juventudes de España (Servicio Nacional de Propaganda, 1938); *Manoilescu*, El Partido Unico (Zaragoza, 1938); *Maranini*, Classe e Stato nella Rivoluzione francese (Perusa, 1935); *M. Moreno Mocholi*, El proceso del Régimen Liberal Demócrata (Cádiz, 1938); *Mussolini*, Scritti e Discorsi (Milán, 1934); *José Antonio Primo de Rivera*, Discursos (Obras completas. Tomo I. 1938); *Paretto*, Trasformazione dello Stato (Riv. di Milano, 1920); *A. Rocco*, Trasformazione dello Stato (Roma, 1926); *J. L. Santaló*, Introducció a la política del Imperio Nuevo (Valladolid, 1938); *M. Scheler*, El héroe (Rev. de Occ., 1933); *C. Schmitt*, Staatsgefüge und Zusammenbruch des Zweiten Reiches (Hamburg, 1934); *A. Solmi*, La crisi dello Stato (Civiltà fascista, 1937)—Origen y formas del Estado Nuevo (Valladolid, 1939); *Zangara*, Die Krise des modernen Staates und ihre Lösung im fascistischen Staate (Europäische Revue, 1932).

CAPITULO PRIMERO

CIVILIZACION, ESTADO Y ORDEN NUEVO

1. Crisis de la Civilización y del Estado.

Está cambiando la Civilización del mundo. Se forma no sólo un Nuevo Estado, sino un Orden Nuevo. Se va hacia un nuevo tipo de hombre. Mussolini ha afirmado que el Fascismo es un modo de vida. "Modo de ser", dijo José Antonio que era el Nationalsindicalismo. Orden Nuevo, por consiguiente, "partiendo del hombre". ("La construcción de un Orden Nuevo la tenemos que empezar por el hombre", dijo en su discurso del 19 de Mayo.) Como hoy existen de modo inconfundible los hombres del Renacimiento y los de la Latinidad, deben existir—según las aludidas afirmaciones mussolinianas—los del Fascismo. "Sólo creando un modo de vida, esto es, un modo de vivir, podremos figurar en las páginas de la Historia" (Mussolini, 22 de Junio 1925).

En el Renacimiento como en la Latinidad, se forjaron nuevos tipos peculiares del hombre y de la civilización. El tipo románico se transformó a través de la Edad Media y el renacentista murió en el siglo XVIII. Goethe pudo decir a este respecto que a raíz de la batalla de Jena nacieron una era y un mundo nuevos.

Nos ha tocado la suerte de vivir una de las grandes crisis de la Historia. Desde que Roma se deshizo y la romanidad se convirtió en romance y el Imperio en región, ha habido, según Huizinga, dos crisis con caracteres terribles: la transición

de la Edad Media a la Moderna con el Renacimiento y la Reforma, y el paso del antiguo régimen del siglo XVIII al régimen demoliberal del siglo XIX, vadeando la Revolución francesa. Si consideramos, como quiere Huizinga, "el sismógrafo de la Historia", esos dos movimientos se presentan con tanta violencia como el que actualmente registramos.

A fines del siglo XV y durante el XVI, el horizonte espiritual del hombre europeo se ensancha de modo considerable. Hay que recordar los descubrimientos marítimos y las conquistas científicas, la emancipación de la conciencia religiosa, la pasión humanista y el capitalismo, que ya es virulento apenas incipiente—en Italia, en los Países Bajos, en España, incluso—. Surgen así un tipo de hombre y un tipo de civilización distintos y contrastantes con los de la Edad Media. El hombre pasa a ser centro del mundo y medida de los valores todos. En cuanto a la violencia del cambio, recordemos las guerras de religión. Erasmo y Vives, son testigos excepcionales. Del gran humanista valenciano es símbolo en este punto su "De concordia et discordia humano genere".

Al decaer el siglo XVIII el espectáculo es análogo. Niéganse los fundamentos metafísicos del Poder y la base del Estado y de la Sociedad. La ola revolucionaria derriba los tronos europeos. La soberanía individual y popular, se erige como única fuente de todas las categorías. El materialismo se impone poderoso. Surgen la técnica y se impulsa el desarrollo económico industrialista, que es la culminación del capitalismo.

¿La crisis actual es más grave? Cabral de Moncada, tras aludir a los conceptos antes mencionados, sostiene que sí. Por lo pronto, dice, el sentimiento de que la civilización estaba en peligro, aparece ahora con mayor amplitud. En 1500, el pueblo carecía de cultura. En 1800, el pueblo podía agarrarse a dos fuertes pilares: la Religión y

la Patria. (Es expresivo que en la contienda actual estas dos ideas hayan intervenido decisivamente.) Por otro lado, la negación de principios no fué entonces tan vigorosa. Hoy hay que contar con el materialismo histórico y la lucha de clases. Solamente se vence a la crisis donde se imponen un espiritualismo y un patriotismo que anulen tales tendencias. Para los hombres del Renacimiento, el problema era menos angustioso porque creían en la posible vuelta al pasado, simple y simplona reacción que hoy sabemos que no cura, sino que encona la herida. En el siglo XIX se pensaba en soluciones de razón y de ciencia, que han sido descartadas. Hoy falta esa fe y hay que operar gracias a un nuevo impulso. Por eso el triunfo arranca de países donde la tradición es una mística.

En estas crisis, el orden derrumbado incluye las estructuras destacadas. En el Renacimiento se deshizo el régimen feudal. Las ideas romanistas dan vida, de un lado, al César; de otro, a los Gremios y a los Municipios, a los grupos corporativos que se enzarzan contra la constitución nobiliaria. En la Revolución Francesa, el derrumbamiento no fué tan inmediato. La administración de Francia, construída por la Monarquía, se mantiene; pero se hace avanzar un sistema que había de transformar, esencialmente, al Estado.

Este enlace de Estado y Civilización, en el momento de la crisis—cuna y mortaja—, no pasó desapercibido a los que querían cambiar el Orden. Toda una extensa literatura juega con la idea del hundimiento del Estado. Unos le quieren hacer inútil (Jules Simon), otros le piden que se abstenga de gobernar (Mc. Culloch). Humbolt desea, como Estado ejemplar, un Estado ocioso. El contraste entre Estado e Individuo, alienta a los individualistas del liberalismo y el anarquismo (Nietzsche, Bakunin, Stuart Mill). Spencer llega a sintetizar toda su filosofía en la lucha del hombre

contra el Estado. El avance es expresivo y a Kropotkin le parece tan seguro, que anuncia la desaparición del Estado para fines del siglo XIX.

Algunos de estos opositores decían verdad y muchos llevaban razón. El Estado que conocían era el del liberalismo clásico y éste "nacido de la necesidad de reaccionar contra el absolutismo, ha terminado su función histórica en el momento en que el Estado se ha convertido en la conciencia y la voluntad mismas del pueblo" (Mussolini). La idea del Estado se presenta como algo decadente e inútil, que cuando funciona va en contra de la Comunidad y sirve un interés de grupo. La crisis de la idea corre al par que la crisis real. Agotada su tarea histórica, el Estado liberal da la razón a los anarquistas. Su disolución si no para fines del siglo XIX, sí que podía señalarse en este siglo XX. Si no desapareció antes, fué porque la Guerra Europea suspendió ese proceso al admitir en su armisticio la construcción de nuevos Estados con patrón liberal y al dar cabida en sus Constituciones a la democracia amorfa que una vez más imponía Norteamérica.

2. Causas de la crisis.

El Estado Nuevo supera al absolutista y al liberal. Al primero, porque se constituye en ente asociativo con participación de masas. Al segundo, porque frente al agnosticismo impone la creencia: es un Estado que obra en cumplimiento de un fin que sirve a la Verdad. El Estado absolutista y lo que los tratadistas han llamado "Estado de policía", estaba superado por el liberal, que se tildaba de "Estado de derecho", como si en términos jurídicos sólo aquél Estado fuese posible, pero ni la pleitesía de los juristas pudo impedir el desarrollo de sus gérmenes destructores. El Estado liberal llevaba dentro su muerte.

Así nos lo demuestra el examen de las causas de la crisis. Las hay sociales, morales y económicas, según ha notado Solmi; una razón jurídica y una exigencia política las apoyan.

Si entramos a examinar las causas sociales, las advertimos como vigorosas apenas consideramos que aquél Estado, si bien formulaba principios de igualdad entre ciudadanos, etc., era un Estado clasista. Como Estado de clase, nació en Francia, según plenamente demostraron en su día Marx y Labriola. Se trata, sencillamente, del "Estado burgués", nacido para servir los intereses de la clase media. Recordemos que el industrial urbano y la propiedad rústica constituían el medio de existencia de una amplia categoría ciudadana que en la época monárquica había quedado fuera de la esfera política. Maranini nos ha dado en su documentado ensayo una aplastante exposición del problema. Tengamos en cuenta este episodio revelador: en 1791 se reúnen en París los carpinteros y piden participar en el Poder, invocando los principios de igualdad y libertad. Inmediatamente los patronos invocan ante el Gobierno el "orden público", y rechazan la coalición obrera en virtud de ese principio luminoso que oculta la petición de una "paz burguesa". Desde aquel momento y gracias a la ley Chapelier, que abolió los gremios, la clase obrera queda expulsada de la política. De allí arranca la oposición entre el proletariado y el Estado liberal burgués. Y desde entonces surge el terrible dilema en que ha de moverse siempre dicho tipo de Estado, oscilante entre la libertad, entendida al modo liberal, y el orden, considerado como paz favorable a la burguesía. La gran tragedia, comenta Solmi, es que cuando ese Estado quiere volver sobre sus principios no puede hacerlo, por maldición de su origen, sin apelar a su destrucción, y no se puede salvar sin que reniegue de sus principios, vién-

dose obligado a optar entre la dictadura del proletariado (Rusia) o la guerra civil (España).

Si advertimos lo que sucede en el terreno económico, la impotencia del Estado liberal se ofrece esplendorosa. La economía propia del Estado liberal está apoyada en la libre concurrencia y queda derrocada apenas surgen las concentraciones industriales (monopolios, trusts, cartells) para apoyar a los patronos, y las coaliciones proletarias para servir a los trabajadores. Nacen así dos poderosas corrientes: la plutocracia y el obrerismo. Una y otra tienen apoyos extranjeros.

‘El tema fué ya abordado por V. Pareto en su gravedad alucinadora. Esta estriba en que el Estado liberal ha de ignorar tales plutocracias, dejándolas desprovistas de control, de modo que trabajen en el Estado contra el Estado mismo; apoyan las luchas políticas, subvencionan propagandas, tienen prensa. Por otro lado, las organizaciones obreras no son menos potentes y disciplinadas que las que sirven al capitalismo; el ejemplo de las “Trade Unions” inglesas es elocuente. El Estado liberal se vé también sujeto a un dilema en el terreno económico: tiene que bandear de aquí para allá. Si Inglaterra es el único país que resiste estos embates, bien puede decirse que constituye la excepción, y ciertamente una excepción perfectamente lógica, porque los intereses imperiales comunes y los grandes recursos financieros, allí son elementos que en ningún otro caso pueden aparecer.

En el aspecto moral, hay una razón profunda para la crisis: la ausencia de todo principio ético que ilumine y dirija. Recordemos que el Estado liberal nace renegando de toda religión y ajeno a todo vínculo del espíritu. Hasta la pintoresca y blasfematoria Diosa Razón fué abandonada al tercer día. No había solución posible. Bien lo supo advertir Mazzini, quien quiso imponer junto a la exaltación de la libertad política, la creación de

fuertes unidades nacionales con el principio de Dios y Pueblo. Pero el gran político italiano no consiguió dominar, y en cuanto al nacional-liberalismo, su fracaso hubo de precipitarse apenas cumplió la tarea unificadora.

Por otra parte, hay que considerar las razones jurídicas y las exigencias políticas de esta crisis.

El profesor Del Vecchio la ha visto como crisis jurídica, derivada de la coexistencia de ordenamientos jurídicos discordantes en un mismo medio histórico. Encuentra como ejemplo reciente y característico, el dado por el desarrollo de las organizaciones sindicales con tendencia antiestatal. Claro que esta crisis tiene fácil remedio: la atracción del nuevo centro de determinaciones a la órbita del Estado mismo. Precisamente Hevar la contraria a la Revolución Francesa, que afirmó el ordenamiento estatal sobre el corporativo, y de cara a la Revolución Rusa, que ha dejado que lo sindical sobrepasase a lo estatal: con la visión clara de Mussolini, que incluyó en la órbita del Estado y sometió a éste las actividades de tipo sindical. Recordemos la fórmula del discurso de Milán: "O vosotros introducis el pueblo en la ciudadela del Estado, que él defenderá, o quedará fuera y terminará asaltándola".

Y ya que hablamos de Mussolini, refirámonos al modo cómo concibe la crisis del Estado liberal. Lo hizo en 1922, desde las páginas de "Gerarchia". La fórmula inicial que figuraba en los puntos programáticos del Fascismo (Estado es "la encarnación jurídica de la Nación"), le pareció exacta solo parcialmente. El Estado es más —dijo—: constituye "un sistema de jerarquías". De ahí que la decadencia de las jerarquías signifique la decadencia de los Estados; cuando la jerarquía militar pierde sus virtudes, y la jerarquía administrativa devora el erario sin escrúpulos, y la jerarquía política vive al día, incapaz de perseguir objetivos lejanos y de someter las ma-

sas al cumplimiento de tales objetivos, entonces el Estado se encuentra ante el dilema de disolverse, en choque contra otro Estado, o "sustituir, a través de la revolución, las jerarquías decadentes o insuficientes". Por esta tarea se justifican los diversos Alzamientos Nacionales.

Rocco pintó la Italia de 1922, haciendo en el Senado, el 19 de Diciembre de 1925, un discurso lleno de enseñanzas. No era distinta la desautorización del Estado en la Alemania anterior al 30 de Enero, o en la España del 16 de Julio. La democracia liberal se ha mostrado incapaz de dar solución a los problemas que tenía planteados el Estado. Como nota Solmi, aquel régimen no conduce sino a la dictadura del proletariado o a la guerra civil. Solmi aludía a España. Y es indudable que ningún ejemplo tan elocuente como el nuestro. La República de 1931 concretaba, en su Constitución y en sus leyes, el mayor número de postulados liberaldemocráticos, pero no pudo mantener el orden—que es siempre, en el régimen liberal, el orden burgués—y se encontró ante este dilema: o mantener el orden burgués y luchar contra las corrientes proletarias o unirse a éstas y convertirse en Estado vasallo de la Unión Soviética Rusa.

Las causas, según hemos visto, no son como de las que pueden resolverse con remedios milagrosos. Los que tal piden "están desorientados", ha dicho el Duce. "Se va hacia formas nuevas de civilización, tanto en la política como en la economía". "Creamos una nueva síntesis—afirmó Mussolini en Milán, el día 1 de Noviembre de 1936—, la verdadera civilización del trabajo". Frente a la división de clases, la Patria; frente a la explotación de unos o de otros, la Justicia. Todos productores y defensores. Ningún haragán con vida política.

3. Tendencias esenciales del Estado Nuevo.

No hay esquemas dogmáticos definitivos. En los capítulos que siguen a esta introducción se señalan las notas comunes, las claves de los arcos, los pentágramas. La política no es una ciencia. Recordemos el hundimiento de ese "Estado de derecho" que se antojaba eterno y permanente, modelado al servicio de la razón y tras largas vigili-
as de filósofos. No es posible negar el Espí-
ritu. La mística vuelve a ser doctrina. Y si es importante la estructura estatal, son esenciales la idea y la fe. Ya José Antonio supo lanzarse, va-
lerosamente, contra quienes creían que una nueva Constitución podría resolver nuestra crisis. "Nos-
otros—dijo—no satisfacemos nuestras aspiracio-
nes, configurando de otra manera el Estado. Lo que queremos es devolver a España un optimis-
mo, una fe en sí misma, una línea clara y enér-
gica, de vida común". Y Franco, el Caudillo vic-
torioso, ha vertido esas mismas ideas de unidad
y de mística: "A un Estado neutro y sin ideales,
le sustituye el misional y totalitario que orienta
al pueblo, señalándole el camino, por el que le
conduce, sin vacilaciones ni retrocesos."

La estructura del Estado pasa a ser término secundario, y en ese sentido la Falange afirma en uno de sus puntos que el Estado es "un ins-
trumento". Importa la idea rectora, el credo que enseñamos y cumplimos. Piedra fundamental es la Justicia, de la que antaño se habló tanto y se aplicó tan poco. Por eso fracasa el siglo XIX. Ni el patriotismo ni la religiosidad fueron suficien-
tes, ya que los pueblos, si eran capaces de morir por Dios y por la Patria, no supieron vivir sola-
mente por los ideales.

Ya no pueden defenderse parcialidades ni por-
ciones. "Nosotros integramos estos dos cosas: la Patria y la Justicia social, y resueltamente, sobre

esos dos principios incommovibles, queremos hacer nuestra revolución" (José Antonio). Ledesma, que no llegó a ver el esplendor del Imperio reconocido, escribía que la eficacia fascista, en cuanto a colaboración proletaria, le parecía superior a la de la democracia burguesa. Así el Estado va conformándose, no para grupos al servicio de formas parciales, sino para la totalidad. Unidad y totalidad son los principios esenciales. Gracias a lo nacional, conjugado con lo justo, se llega a dar perfil al Estado nuevo. Del viejo, como ha dicho Franco en solemne ocasión (18 Julio 1938), "sólo habrán de salvarse sus valores, sus fuentes de energía y sus virtudes de raza".

El mismo Caudillo ha expresado con frase vigorosa en ese citado discurso la necesidad de este Nuevo Estado. "Nuestro régimen no es ni un capricho ni una fórmula artificiosa de organización, es una necesidad histórica indispensable a la propia existencia de la Patria". Y ha añadido como relatando sus fines: "Hay que soldar al pueblo dividido por los partidos; hay que unir medio siglo de separaciones; hay que borrar los prejuicios de la lucha de clases; hay que hacer una justicia; hay que educar un pueblo y separar a nuestras juventudes de resabios liberales..."

El Nuevo Estado es una organización poderosa de tipo asociativo y autoritario, que se enfrenta con el Parlamento y el sufragio atómico y pluripartidista. Exaltando lo nacional, exalta la unidad, y por la unidad la Jefatura, que había sido anulada por el Parlamento. El Partido Unico es la base de esta actitud y concreta el vago concepto de Pueblo en una posición perfectamente tradicional de comunidad que actúa unida y en orden. Unidad, totalidad, autoridad. Autoridad vigorosa, no sólo frente a los atacantes, sino atacando. No se olvide que aunque la Constitución no sea lo fundamental, se trata siempre de restablecer la propia idea del Estado y fijar así el estilo del Gobierno.

no. Sólo con un Estado soberano "que esté sobre todos y pueda estar contra todos", caben el régimen y el orden nuevos. Sólo un Estado poderoso asegura la continuidad de la nación. Y únicamente en una nación así exteriorizada, el individuo puede ejercitar sus derechos y sentirse verdaderamente dotado de esa dignidad y de la libertad que, según la doctrina de la Falange, constituyen depósito sagrado e intangible.

Hay de tal forma en todos estos regímenes que representan lo social y lo nacional, la tradición y la presencia, en cada uno de sus países respectivos, puntos de contacto, por lo menos, tan claros como los que había entre los Estados liberales. Y es curioso que quienes vieron que sus Constituciones fueron copiadas de un modelo napoleónico o de una minuta wilsoniana, se lancen ahora contra los Estados Nuevos acusándoles de imitación.

Ataturk supo responder gráficamente: "Nosotros sólo nos parecemos a nosotros". Hitler y Mussolini han subrayado sus peculiaridades. Franco lo ha reconocido con respecto a España en declaraciones publicadas en "Candide", en Agosto de 1938. Y José Antonio fulminó su réplica encuadrando el problema en estas frases precisas: "Nos dicen que somos imitadores porque este movimiento nuestro, este movimiento de vuelta hacia las entrañas genuinas de España, es un movimiento que se ha producido antes en otros sitios... Pero porque Italia y Alemania se hayan vuelto hacia sí mismas y se hayan encontrado enteramente a sí mismas, ¿diremos que las imita España al buscarse a sí misma?"

Mussolini ha declarado que el Estado fascista "tiene una conciencia y una voluntad". Y ha añadido: "No es sólo el guardián de la seguridad interior y exterior, sino también el guardián y el transmisor del espíritu del pueblo, tal como se ha formado en el curso de los siglos en la lengua,

en las costumbres y en la fe. El Estado no es solamente el presente, sino también el pasado y sobre todo el porvenir". ¿No puede insistirse en esa misma tesis, con matiz distinto, si Hitler habla de Estado "racista" y Franco de Estado "misional"? ¿Fué acaso cosa diversa aquel glorioso Estado de la Inquisición española, ese Estado que era un auténtico "Estado-Iglesia", sugeridor de tesis a Dostoiewski?

El Estado fascista es, dice Panunzio, un "Estado eclesiástico"; eclesiástico, entiéndase, por asociativo, por apoyarse en la asociación. No es un sólo esquema administrativo. Tiene obras educativas y culturales, y acoge la representación de todo lo espiritual que barría el liberalismo. Como tal Estado aparece unido al Partido Unico Nacional, y es así "totalitario", en el sentido dinámico y filosófico, por cuanto proviene de una Revolución y su génesis ha de ser totalitaria y dictatorial, y teniendo en cuenta que la idea política a realizar es única e indivisible, no permite transacción y encuentra solamente en la totalidad su medio activo. Pero lo muestra, además, en sentido estático y político al resultar necesario que el Partido portador de la idea revolucionaria se asiente en el Estado "como en su corazón".

Se viene así a la consecuencia de que de este modo se suprime el concepto de Estado-caparazón o superestructura; vieja dualidad explotada por el marxismo y por el anarquismo, que dió vida a la tesis del Estado obra de grupo e instrumento de opresión.

Se suprime también la profesionalización en la defensa del orden. El Orden Nuevo no es el orden burgués ni el orden proletario, sino el Orden Nacional, cuya defensa interesa a todos. El ciudadano vuelve a ser, como en nuestros fueros municipales, el milite, el miliciano del Partido que sirve con sus brazos y su cerebro al País, pero

que defiende al Régimen con la espada, antes de que haya de llamarse su reemplazo.

Hay por doquier, "política contra las políticas", "partidos contra los partidos", según dijo Ledesma, expresando el mismo concepto de Curtius: "nacionalismo contra los partidos", "nación contra demolición". Y a consecuencia de esta tendencia unitaria, se anula la lucha de clases, no porque se impida, sino porque ya no tiene razón de ser, por gracia de un Caudillo, que ha sabido representar como símbolo humano a la Nación entera; lo que con el liberalismo no era posible, ya que, como notaba Max Scheler, para acabar con la lucha de clases, hacen falta estadistas "que no sean conductores de economía"; esto es, que se muestren dispuestos a dar no sólo la Patria, sino también el Pan y la Justicia.

El Estado Nuevo no es absolutismo, porque el Pueblo no es objeto, sino miembro, fuerza viva y contenido de la Nación. Tampoco tiene afinidad con la Dictadura, sobrepasado el momento inicial de instauración del Régimen. La dictadura no es forma de Estado, sino sistema de excepción dentro de la casuística liberal (Poincaré, Brunning, Roosevelt), en tanto que el Estado Nuevo es, como dice Huber, un sistema normal.

Los problemas del Estado en nuestro tiempo solamente los resuelve este tipo de Estado que restaura y refuerza el poder de mando, instaura un ordenamiento laboral y funda al Régimen sobre una vasta asociación. Autoridad, Trabajo y Partido, son de este modo los fundamentos que han servido a Panunzio para expresar su teoría general del Estado Fascista. Unidad de mando, interés común (servicio) y comunidad nacional, son las razones españolas.

Bibliografía española: *Fernández Cuesta*, Discursos a la Falange (Barcelona, 1939); *P. Getino*, Justicia y carácter de la guerra nacional española (Ciencia tomista, 1937); *R. Ledesma*, Discurso a las Juventudes (Barcelona, 1939); *Le Fur*, La guerre d'Espagne et le droit (Paris, 1937); *Menéndez Reigada*, La guerra nacional ante la moral y el derecho (Ciencia tomista, 1936); *Moreno Mocholi*, El fracaso del régimen liberal demócrata (Cádiz, 1938); *García Oviedo*, Las directivas del Estado Nuevo (Sevilla, 1937); *José A. Primo de Rivera*, Discursos; *Yanguas*, Beligerancia, No intervención y Reconocimiento (Salamanca, 1938); *Onésimo Redondo*, El Estado Nacional (1938); *Academia de Ciencias Morales y Políticas*, El Movimiento Nacional ante el Derecho y la Justicia (Santander, 1938); *Ignacio Serrano*, Problemas de vigencia del Fuero del Trabajo, (Ciencia tomista, 1938).

Sobre Italia: *Biscaretti di Ruffia*, Alcune osservazioni sul concetto politico e sul concetto giuridico della dittadura (Padua, 1937); *Costamagna*, Diritto publico fascista (Milán, 1934); *Curzio*, Dalle fazioni al Partito; *Chiarelli*, Il Partito nello Stato fascista; *Chimenti*, Diritto costituzionale italiano (Turin, 1939); *Fantini*, Lo Stato (1931); *Feroci*, Istituzioni di diritto pubblico secondo la vigente legislazione fascista (1934); *Gentili*, L'essenza del fascismo (Civiltà fascista, 1928)-Origini e dottrina del fascismo (Roma, 1929); *von Beckerath*, Wesen und Werden des fascistischen Staates (Berlin, 1927); *Meloni*, Tecnica giuridica e sistematica delle riforme del Regime (1932); *Perticone*, La concezione speculativa dell'attività giuridica (Roma, 1936); *Panunzio*, Teoría generale dello Stato fascista (1937).

Sobre Alemania: *Gerber*, Staatsrechtliche Grundlinien des neuen Reiches (1933); *E. R. Huben*, Von Sinn der Verfassung (1935)-Verfassung (1937); *Koellreuter*, Von Sinn und Wesen der nationalen Revolution (1933)-Deutsches Verfassungsrecht (1935); *E. Forsthoff*, Des totale Staat (1934); *Schmitt*, Die Diktatur (1928)—Staat, Bewegung, Volk (1934); *Grüger*, Die Verfassung der nationalsozialistische Revolution (1934).

Sobre Turquía: *E. Schopen*, Die neue Türkei (1938); *Sukru Kaya*, Discours (Angora, 1938).

Sobre Turquía: *E. Schopen*, Die neue Türkei (1938); *Sukru Kaya*, Discours (Angora, 1938).

CAPITULO SEGUNDO

LA INSTAURACION REVOLUCIONARIA

4. El alzamiento y la Revolución.

El caso español—hemos aludido ya a este tema—es una prueba de que la democracia liberal no tiene más salida lógica que la dictadura del proletariado o la guerra civil. En nuestro ejemplo de Alzamiento Nacional, ha debido probar sus armas bien templadas la teoría de la instauración de un nuevo Estado. Esta se ha hecho girar en torno al problema de la legitimidad del Alzamiento mismo. Y nuestros escritores se han fijado en que los rojos no podían hablar de Gobierno ni de Cortes porque tales órganos no existían, ya que el Gobierno no había nacido de la ley ni el Congreso se formó sin amañes, ni valía la inmunidad parlamentaria, etc. Pero tal construcción tiene un sentido constitucionalista de formalísimo trasnochado. Por eso a los mismos que la esgrimen les parece insuficiente y buscan la legitimización del Alzamiento en las razones con que argumentaban los antiguos teólogos. El profesor Yanguas aplica los títulos 3.º y 5.º de entre los que justifican para Victoria la lucha contra los indios. El 3.º es la defensa de los indios convertidos. Aquí, la defensa de los católicos ultrajados. El 5.º, la lucha contra la tiranía o las leyes inhumanas. Aquí la oposición a los sacrificios de víctimas inocentes y de hombres inculpables. Esta misma argumentación es utilizada por los Padres Getino y Menéndez Reigada, quienes se fijan especial-

mente en los crímenes perpetrados por los rojos. Análoga viene a ser, aunque varíe su génesis, la tesis de Le Fur, al expresar los requisitos que justifican el Alzamiento: agotamiento de los medios legales, probabilidades de éxito y proporción justa entre el desorden y los medios empleados para remediarlo. Se trata aquí, sin embargo, siempre, de una justificación de tipo negativo que únicamente vale para legitimar el acto del Alzamiento, pero que no puede aprovecharse con rigor lógico para apoyar su sentido positivo. Parece como si se convalidase el esfuerzo con el fin de "restaurar el Orden", pero no se dan bases de justificación a la aplicación del Orden Nuevo. Y esta es idea que no sólo la doctrina, sino la legislación del Movimiento Nacional han considerado.

La ley de 5 de Abril de 1938, relativa al Estatuto catalán, declara en su exposición de motivos: "El Alzamiento Nacional significó, en el orden político, la ruptura con todas las instituciones que implicasen negación de los valores que se intentaba restaurar". Por eso el Estatuto de Cataluña "dejó de tener validez, en el orden jurídico español, desde el día 17 de Julio de 1937" y de ahí que no sea precisa ninguna declaración en tal sentido. La ley del 5 de abril, se limita a sacar consecuencia prácticas de aquella abrogación. Lo dice así y no podría decirlo de otro modo, porque un nuevo espíritu, el del 18 de Julio, invade toda la construcción constitucional y anula "ipso jure" cuanto contradice.

En las normas programáticas del Estado, lo único que se mantiene de lo constitucional anterior al 18 de Julio, son las disposiciones de tendencia social. Así el Punto 15 declara en su párrafo segundo: "Mientras se llega a la nueva estructura total, mantendremos e intensificaremos todas las ventajas proporcionadas al obrero por las vigentes leyes sociales", y en efecto, se afirmó

el vigor de las Bases y contratos anteriores al 16 de febrero de 1936.

De ahí que el Orden Nuevo, es decir, la Revolución Nacional, venga a ser, en única instancia, la legitimización del Alzamiento. Volver al régimen anterior con la paz burguesa de que se encontró vacío en su última etapa significaría rebajar el Alzamiento a una rebelión restauradora y el Movimiento a un pronunciamiento.

Para los Nacionalesindicalistas es la tarea lo que justifica la acción. Cuando José Antonio vió claudicar al Poder que dominó la sublevación de Asturias roja (Octubre, 1934), nos venía a expresar esa idea diciendo: "lo que detiene su brazo, para hacer justicia tras de una revolución cruenta, es la consciencia de su falta de justificación interior, de la falta de una misión interior". La Falange ha expuesto la figura del Alzamiento como decisiva para insertar en España la Revolución pendiente. El Secretario general del Partido, Fernández Cuesta, ha reseñado, en su discurso del III Año Triunfal, las oportunidades que se presentaron a España y el fraude que hubo en cada una de ellas, y refiriéndose al 18 de Julio, declara que "ahora sí que no se escapa la coyuntura ni se defraudará a los españoles". Porque ahora—añade—existen cuatro cosas: un Ejército, un Partido, una Doctrina y una Caudillo. Desde el momento en que el Caudillo elevó a norma del Estado los 26 puntos del Programa de la Falange, estos son la fuente de la nueva legalidad de nuestro sistema constituyente. Y en la Doctrina está—no se olvide, ni se prodigue demasiado porque se corre el peligro de convertir la tesis en tópico inoperante—un punto, el 26, que, coronando como colofón la teoría del nuevo derecho, expone la Revolución Nacional como método para la implantación del Orden Nuevo que pregona.

Si buscamos antecedentes en los precursores.

ahí está el enérgico de Ledesma: la ausencia de unanimidades en el espíritu de nuestro pueblo —viene a decir—, justifica la Revolución Nacional, que va a imponerlas o a crearlas. Hay que dotar a España de garantías de perduración, y, ante todo, darle la unidad—que es lo que hizo posible nuestro poderio—, la moral nacional y el sentido de las masas. El pueblo ya no debe quedar en el “doble triste papel” de derrotado y de desertor; sólo con el pueblo podrá engrandecerse, demográficamente, España, y adquirir la fortaleza militar debida. En la tesis de Ledesma, la tarea justifica también la acción. Para hacer todo eso el que conquista el derecho a conseguir la perdurabilidad de España, tiene el de dar soluciones voluntarias, expresando y cumpliendo cuanto declare con firme voluntad.

Parece, pues, que la concepción ortodoxa del Alzamiento español está relacionada con la doctrina de la instauración revolucionaria del Orden Nuevo, que lleva la justificación “in se”, precisamente por este enlace entre la acción y la tarca. Tal tipo de instauración constituye, como nota Panunzio, una categoría propia frente a las distinciones superadas de instauraciones “de facto” o “de jure”, y “en cuanto revolución, es precisamente jurídica”. Téngase en cuenta que en sí misma la Revolución es un ordenamiento jurídico originario y soberano (la tarea), viniendo a presentarse como “otro Estado”, como “un Estado en formación que se encuentra, respecto al Estado constituido, punto de mira y atacado por la Revolución, en una relación propia y verdadera, de tipo jurídico y formal bélico”.

5. La Dictadura y la legalidad.

También tuvo ese mismo valor la insurrección fascista, puesto que la estructura militar y estra-

tégica de la Marcha sobre Roma, apareció obligada al advertirse cerrados los demás caminos, y ante el convencimiento de que los regímenes no se sustituyen, sino que se derriban. La novedad histórica de la Revolución fascista consiste en que élla lleva la conciencia de la Revolución en el Pastido, dando cauces, así, a toda la obra pertinente. La teoría de la Revolución se construye con bases militares, y la instauración revolucionaria lleva un marcado carácter bélico.

La instauración se mantiene en un primer momento por la Dictadura, pero ésta es—como ha sabido subrayar Panunzio—una dictadura especial. la “dictadura revolucionaria”, que no puede confundirse con lo que algunos han llamado dictadura militar. (Toda dictadura muestra este carácter en cuanto la dictadura es, por definición, la máxima concentración del Poder). La Dictadura que sigue a un Alzamiento, si quiere tener una justificación, ha de ser revolucionaria. Esta supone la teoría subjetiva del conocimiento del espíritu del Estado y de la historia. Precisamente por eso, las Revoluciones nacionales arrancan de una densa labor ideológica, y por eso en España, “para evitar jornadas de fracaso”, apenas se columbra el jonsismo, nace JONS, revista doctrinal, orientadora.

Afirmados esos conceptos, se crea el de la soberanía revolucionaria. La revolución es una persona jurídica titular de una idea, como el Estado; es—insistamos—un Estado “in fieri”. De ahí el alto papel del Partido en la obra revolucionaria. El Partido es el ente que personifica la idea revolucionaria, la subjetivización de la revolución. Por lo que en el Partido encontramos dos momentos: el insurreccional y el dictatorial. La insurrección es la conquista violenta y la toma de posesión del Poder público; terminada ésta, viene la Dictadura como uso pleno y absoluto ejercicio de

aquel Poder. De ahí que si el Movimiento español tiene un contenido, como se ha declarado y promulgado, es un error hablar de Movimiento refiriéndose al 18 de Julio, que es solamente Alzamiento, la insurrección revolucionaria.

Y de esa Dictadura arranca todo el problema de la legalidad. La Dictadura revolucionaria que va a instaurar un Régimen nuevo—el Nacional-sindicalista, el Fascista, el Nacionalsocialista, el Kemalista—, no es un Poder constituido, sino constituyente, y actúa como tal hasta que se establece el nuevo ordenamiento jurídico. Esa es la que podríamos llamar Revolución externa inmediata. Se cierra en Alemania, el 14 de Julio, con las leyes fundamentales; en Italia, cuando se da la ley de 1928, sobre el Gran Consejo, que sitúa en el Régimen las instituciones del Partido; en Turquía, con las leyes constitucionales de 1937. (Téngase en cuenta, para puntualizar el concepto, más tarde ampliado, que los Estados de Partido Unico vienen a sostener la Revolución permanente frente a la soviética Revolución continua; es decir, son enemigos del estancamiento. No hay una estructura definitiva ni una forma dispuesta a eternizarse). La Dictadura es así una etapa: la forma técnica de instaurar la nueva legalidad, hasta el momento en que nace el Régimen, que lleva dentro los gérmenes de su vida jurídica y sigue normas.

La instauración revolucionaria, por exigencia de los hechos, es totalitarista. Al representar la idea revolucionaria, no puede admitir dispersiones substanciales. Las ideas no revolucionarias permiten la transigencia y la transacción; las revolucionarias correrían de ese modo peligro de muerte. Ya lo preveyó admirablemente Mazzini en sus "Instrucciones a los afiliados de la Joven Italia", y entre nosotros, tanto Ramiro Ledesma, como Onésimo Redondo, puntualizaron la urgen-

cia de la unificación y el sólo sentido posible de la misma: la que se consigue sin tener que acudir a los comunes denominadores. El tono exacto lo ha sabido dar Mussolini, con la declaración del 22 de Junio de 1925: "Todo el Poder a todo el Fascismo".

La instauración revolucionaria del Estado es presupuesto de la fijación del Orden Nuevo. Sin élla, la Dictadura caduca y el Régimen decae. Hay que contar con el Partido, Estado en formación que da vida al Régimen. Por eso la instauración revolucionaria ejemplar es realizada siempre por el Partido revolucionario. ¿Con qué etapas?

6. Los ejemplos de Italia, Turquía y Portugal.

Examinemos el caso de Italia. Está en primer término el Alzamiento del 28 de Octubre de 1922, con la Proclama de los Cuadrumviro, que implica la ruptura del ordenamiento jurídico, hecha excepción de la Monarquía (de acuerdo con el discurso de Udine) y del Ejército (según declaración expresa de la Proclama). Inmediatamente se crean los órganos revolucionarios: la Milicia, los Sindicatos y el Gran Consejo. Finalmente llega, con la ley de 9 de Diciembre de 1928, la legalización formal de cuanto se ha instaurado. Desde entonces la Revolución constituye la premisa de todo el nuevo ordenamiento jurídico. Precisamente la ley de Diciembre de 1928, nos da la prueba de la ruptura del orden anterior, pero la forma como ha sido realizada esa ruptura, deja pensar a algunos en términos de poca firmeza sobre la solución de continuidad habida (Maraviglia llega a negarla).

El problema aparece con mayor claridad en Turquía, donde fué derribado el Califato y proclamada la República con la elección del Gazi

Mustafá Kemal a la Presidencia, el 29 de Octubre de 1923. Esta etapa se cierra el 5 de Febrero de 1937, en que la Gran Asamblea Nacional vota las modificaciones al Estatuto orgánico de 1924, incorporando a éste los seis principios del Partido afirmando, con motivo de los desórdenes de 30 de Noviembre de 1925, que las revoluciones deben descansar sobre fundamentos sangrientos, como haciendo ver el sentido de violencia que ha dirigido la instauración revolucionaria kemalista. Y por si había alguna duda sobre la ruptura con el pasado, el Secretario General del Partido, Ministro Sukru Kava, en su discurso del 5 de Febrero de 1937, expresó, con las frases que siguen, la idea ejemplar de la Revolución pendiente: "Camaradas, nuestra Revolución no ha nacido espontáneamente ni, según os he dicho, por necesidades de la historia. Se ha derramado mucha sangre por élla, y han debido resistirse muchos sufrimientos. Los turcos han sufrido durante siglos, esperando esta Revolución, hasta el día en que, por fin, el gran Genio de Ataturk ha unido su propio poder y su propia energía a las de la nación".

El caso de Portugal es también claro, en cuanto al hecho del Alzamiento, iniciado en Coimbra el 27 de Mayo de 1926. Después de diversos vaivenes, ha encontrado cauce en las reformas constitucionales que cristalizan en la Constitución de 1933 y el Estatuto del Trabajo Nacional. Salazar ha venido a expresar ideas semejantes a las que aquí exponemos, en su discurso del 28 de Mayo de 1932. Allí declaró "que no podía ser pensamiento inicial del 28 de Mayo y en todo caso sería contrario a los deberes del Ejército y a su prestigio, reducir el problema portugués a un cambio de Gobierno, sino que se pretendía obtener el establecimiento de condiciones políticas, administrativas, económicas, sociales y culturales, sus-

ceptibles de garantizar, mediante una verdadera revolución, el renacimiento de la Nación portuguesa. Bajo esta auténtica interpretación, el Ejército no ha de hacer política, no está obligado a mantener determinados gobiernos, sino que debe ser hasta el fin, garantía y prenda de la Revolución Nacional". Y todavía insiste en el discurso del 23 de Noviembre de aquel mismo año, recordando una famosa y decisiva intervención anterior: "El 28 de Agosto de 1930, cuando era aún un poco indecisa y confusa nuestra marcha y se pensaba restringir la acción dictatorial a resolver los problemas más urgentes de la Administración Pública, sostuve en la Sala del Risco, que para salvar, consolidar y garantizar su obra administrativa, la Dictadura tenía que proponerse una finalidad política".

7. La instauración del nacionalsocialismo.

Carácter especial muestra la instauración en la Alemania nacionalsocialista. Allí no ha habido Alzamiento, aunque el 30 de Enero sea principio de la Revolución. La instauración alemana arrancó legalmente del Régimen weimariano. Para Schmitt esta legalidad es consecuencia de la disciplina y el sentido alemán del orden, y significa solamente una propiedad determinada con relación a un sistema superado. Sería jurídicamente falso y constituiría políticamente un acto de sabotaje—dice—deducir de esta especie de legalidad un valor ulterior de ideas jurídicas, instituciones o normas ahora superadas. Y añade: "el buen derecho de la revolución alemana no se funda sobre el hecho de que algunas docenas de diputados se encontrasen dispuestas a cubrir con su aprobación el quince por ciento de diferencia

que había entre la mayoría corriente y la de los dos tercios". Lo que vive—termina Schmitt—no se puede legitimar con lo que ha muerto, y la fuerza no necesita la debilidad para legitimarse.

8. La vigencia de la legalidad superada.

Este caso alemán plantea, en términos generales, la cuestión del valor de las Constituciones anteriores. En Italia, aun cuando la Constitución no ha sido derogada, se estima en buen derecho que la de 1848 es sólo una parte de la actual. En Portugal y Turquía, se ha declarado terminantemente lo nuevo, aunque en el ejemplo lusitano haya tardado más de un lustro.

Entre nosotros el Alzamiento como ruptura lo declaran textos legales, tales como el ya referido de 5 de abril, relativo a la abrogación del Estatuto catalán. La instauración revolucionaria consiste en la inserción de los 26 Puntos en la estructura y la política del Estado.

Es indudable que en España nadie se ha imaginado que tuviera valor la Constitución de 1931. Y eso que han sido muchos los que, al justificar el Alzamiento por el abandono de la legalidad, apoyan con tal tesis la legalidad anterior. El 18 de Julio significa el hundimiento de cuanto lleva consigo el Estado liberal, no sólo el Frente Popular, sino también el de la República burguesa radicalcedista, e incluso en la hipótesis del Estado pedido por Acción Popular. Es todo un sistema que se derrumba y frente al cual se levanta una Constitución nacional, no por no escrita menos vigorosa. Tenemos el decreto del cambio de la bandera, como ocurrió también en Alemania, y la Ley de la Jefatura del Estado, como en Alemania

sucedió, que son los dos totalmente inconcebibles en el anterior régimen. Como ha dicho Gerber, con respecto a Alemania, la Constitución de Weimar ha muerto y vive como nueva la Constitución de Potsdam. También entre nosotros pueden afirmarse análogos conceptos: Burgos, frente a Madrid. Y si hubiera alguna duda a este respecto, ahí está el Punto 2 de la Falange, norma programática del nuevo Estado: "La Constitución vigente, en cuanto incita a las disgregaciones, atenta contra la unidad de destino de España. Por eso exigimos su anulación fulminante". ¿Qué significa esto si no que desde el momento en que el Estado acepta tales declaraciones anula "ipso iure" la Constitución de 1931? De modo que si el 18 de Julio no hubiera supuesto el hundimiento de la Constitución de 1931, ésta no podría sobrevivir al 19 de Abril, en virtud del texto mismo del Decreto 255.

Huber ha notado que la vigencia de una Constitución depende de la conformación del pueblo de acuerdo con determinados principios jurídicos que lo estructuran en organización política cerrada. Tal rango ha sido perdido por la Constitución de Weimar, merced a la instauración del Nacionalsocialismo. No puede decirse que una Constitución esté en vigor más que en tanto se mantengan sus raíces. Rotas éstas, la Constitución cae, aunque continúen vigentes los párrafos aislados de su texto. Esto es lo que ha sucedido con el Estatuto italiano de 1848 y lo que de modo explícito aparece en la legislación alemana. Esas raíces eran—en Alemania, en Italia y en España—democracia, liberalismo, parlamentarismo, pluripartidismo, federalismo, división de Poderes... Frente a tales principios levántase, con las respectivas Revoluciones, la unidad nacional, la totalidad estatal, el Partido único, la Jefatura jerarquizada... Este

nuevo sistema debe considerarse en vigor por el hecho mismo de la toma del Poder, el 30 de Enero, el 28 de Octubre o el 18 de Julio. Gracias a este nuevo espíritu, cuando Hitler dice que todo el poder arranca del Pueblo, dice algo esencialmente distinto de lo que afirma con esa misma frase una Constitución liberal.

Sobre España, bibliografía escasisima, J. G., La legalidad española bajo el Gobierno de Franco (FE, Marzo-Abril 1938); G. García Oviedo, Las directrices del Nuevo Estado (Sevilla 1937); A. J. Onieva, España despierta (Valladolid 1938); J. A. Ubierna, Ante la estructuración del Nuevo Estado (Salamanca, 1932); M. Sancho Izquierdo, Orientamento sociale del nuovo Stato nazionale spagnolo (Riv. int. Scienza sociale, 1937).

La bibliografía italiana es la más copiosa. Cf. principalmente Chiarelli, El concetto di regime nel Diritto publico (Arch. Giur. 1932); Ferraciú, La figura costituzionale del Gran Consiglio (Riv. dir. publ. 1929); Macedonio, Il Gran Consiglio del Fascismo organo della costituzione (Roma, 1934); Meloni, La legge sul Gran Consiglio (Foro Amministrativo, 1929); Mussolini, Discorso ante el Consejo Nacional de Corporaciones (1933); S. Panunzio, Teoria generale dello Stato fascista (Padua, 1937); Le leggi costituzionali del Regime (I Congreso giuridico, Roma 1932, vol. I); A. Ranelletti, Il Gran Consiglio del Fascismo é la forma di Governo dello stato italiano (Riv. dri. pubbl. 1929); Redano, La legge sul Gran Consiglio (Riv. inter. di filos. del dir. 1929); A. Rocco, La trasformazione dello Stato (Roma 1926); Santi Romano, Corso di diritto costituzionale (Padua, 1933); G. del Vecchio, Stato fascista e vecchio regime, Roma, 1933. (En el volumen español "El Estado Nuevo y sus bases jurídicas"); Zángara, Il Partito e lo Stato (Roma, 1937). En francés es muy útil, Hussard, Du Parti a l'Etat (1936). En español algunos datos en H. de Alvial, Manual del Fascismo (1937).

bases históricas, define al Régimen como "conjunto de las instituciones jurídicas coordinadas con el fin de realizar una determinada concepción política del Estado y de la Sociedad".

La definición dada por el derecho positivo italiano no dista de ésta. El primer proyecto de ley sobre el Gran Consejo recordaba en su exposición de motivos que del Alzamiento de Octubre de 1922 había salido "una nueva cimentación social, un tipo nuevo de Estado, aquello que comunmente suele llamarse un régimen". Régimen es, en ese sentido, la caracterización de la estructura social y estatal cuando ésta refleja una idea revolucionaria; lo que es verdad hasta el punto de que cuando esa idea decae, el régimen muere. (Ej.: el régimen liberal.) Por eso la frase del Duce, que alude al período de altísima tensión ideal, puede aplicarse a este concepto.

De tal forma, Régimen viene a ser Estado, si éste no se entiende en el sentido estrecho de estructura política o de complejo de la administración. El Régimen frente al Estado es el Estado en acto de producirse, esto es, el Estado nuevo, la organización que ha sabido absorber a las instituciones revolucionarias. El Estado español nacido del 18 de Julio es Régimen en cuanto realiza los principios de la Revolución Nacionalsindicalista y solamente así puede acoger con justicia el adjetivo obligado. Por eso, el concepto de Régimen en relación con el concepto de Estado tiene mayor amplitud, ya que admite instituciones estatales y extraestatales, cuantas sean propias de la Revolución, y solamente "in fieri" el Régimen se identifica con el Estado, pudiendo llegar a una fusión total cuando la puesta en práctica de los postulados revolucionarios encuentre el cauce abierto de la organización estatal misma.

No es otra la interpretación posible de nuestros textos. Una vez se alude en los Puntos de

Falange, norma política española, el régimen, y esa para significar el Estado nacionalsindicalista (Punto 11).

Al régimen corresponde una misión bautismal. Porque precisamente en la realización revolucionaria lo que más importa es el espíritu, no siempre hay que idear nuevas instituciones y construir órganos nuevos. Parte de la estructura anterior es útil, y ahí está el ejemplo de la Cámara italiana que durante cerca de deciséis años ha sido instrumento de la Revolución. Y es que un nuevo espíritu que los mueva e infunda otro sentido transforma y produce en los órganos del Régimen anterior una verdadera novación jurídica, que viene a ser también "sanatio in radice".

10. El derrumbamiento de la legalidad anterior al 18 de Julio.

Examinemos algunos tipos de desarrollo de Régimen. Y en primer lugar el nuestro, el de la España renacida por obra de Franco.

El 18 de Julio significa la ruptura con el Régimen liberal, pero las exigencias de la guerra no permitieron con la debida rapidez una afirmación estatal jurídica. Y esto es lógico porque la insurrección que instaura al nuevo Estado se prolonga en esta etapa dialéctica hasta el momento en que se fijan las bases del Régimen. Si los textos legales de 1938 pueden afirmar que el 18 de Julio significó el derrumbamiento de toda la estructura anterior, eso no lo declaraban ni lo podían declarar los textos que dió la Junta de Defensa o la Junta Técnica de 1936. Cambióse la bandera antes de que se llegara a negar el carácter republicano del Alzamiento, y cuando se trató de asegurar que la naturaleza del Alzamiento "no necesita de normas derogatorias" para anular la

legislación dictada en la zona roja, no se pensó en el conjunto de la legislación nacida de la Constitución de 1931, sino solamente en las disposiciones que "se generaron por órganos que, revestidos de una falsa apariencia legal, mantuvieron un ficticio funcionamiento puesto al servicio de la antipatria"; esto es, lo que se deroga de manera expresa, aunque se estime que tal derogación estaba implícita en la naturaleza del Alzamiento, es cuanto en la zona roja se dictó con posterioridad al 18 de Julio (Decreto de 1 Noviembre 1936, artículo 1.º) Con respecto a lo anterior a dicha fecha, no se anula ni deroga en conjunto, sino que se señala como tarea de la Comisión de Justicia de la Junta Técnica, la discriminación de tales disposiciones en forma análoga a como podría hacerse dentro de una legalidad republicana en la que un golpe de Estado estimase "contrarias a los altos intereses nacionales" ciertas disposiciones subsiguientes a la Constitución de 1931 (cf. Decreto cit. art. 2). En este ambiente, lo único trascendental para el Estado era la Guerra, y apenas se construyen otros órganos que aquellos que resultaban imprescindibles como asesores del Cuartel General

En consecuencia de ese Decreto ha venido la derogación de la ley de matrimonio civil (Ley 12 Marzo 1938) y la suspensión de la de divorcio (Decreto 2 Marzo 1938). Lo cual deja ver que ciertas leyes anteriores al 18 de Julio rigen en tanto no se derogan. Claro es que no se trata de leyes puramente constitucionales, sino en gran parte de tipo orgánico o procesal, porque las dudas sobre el vigor de la Constitución de 1931, han podido llegar hasta el Decreto de 29 Septiembre de 1936, no más allá, pues la creación de la figura del Jefe del Gobierno del Estado es incompatible con el régimen de 1931. Y en cuanto a lo social (que para los republicanos—y también para nos-

otros—tenía rango primerísimo hasta el punto de que la norma programática 15, en su segundo párrafo, mantiene su vigencia: “Mientras se llega a la nueva estructura total, mantendremos e intensificaremos todas las ventajas proporcionadas al obrero por las vigentes leyes sociales”), se habrá de entender en relación con el Fuero del Trabajo. Este deroga buena parte de lo anterior, y específicamente las leyes de huelgas (27 Abril 1909) y asociaciones (8 Abril 1932), aparte de lo relativo a Jurados Mixtos, que es derogado por la Ley de Magistratura del Trabajo.

Otro decreto—el de 24 Junio 1938, deslindando atribuciones de Gobernadores y Delegados de Orden Público—, se refiere a la ley republicana de 28 Julio 1933, y podrá pensarse—por el envío que hace ésta a la Constitución de 1931—en el vigor de este Estatuto constitucional tan funesto. Se trata, como ya hemos repetido, de uno de tantos ejemplos de vigencia textual de disposiciones desgajadas que, sin embargo, defraudarían la voluntad del legislador nacionalsindicalista, si no fuesen interpretadas dentro del espíritu de la Falange.

En cuanto a la estructura administrativa, ésta había quedado completamente destruida de hecho ese 18 de Julio, del que arranca la Liberación. Piénsese que todos los organismos estaban en Madrid y que la única estructura regional capaz de subrogarse técnicamente residía en Barcelona. En pleno campo, el General Queipo de Llano monta un Gabinete civil (cuya obra tiene en las recientes páginas del volumen “Cómo fué gobernada Andalucía”, el debido relieve) y Burgos ve instalarse en su histórica Casa del Cordón los primeros servicios de tipo nacional. La Junta de Defensa fué constituida el 24 de Julio para asumir “todos los poderes del Estado” y mostrarse como representación de País ante el extranjero. La Jun-

ta crea, frente a la "Gaceta", su "Boletín Oficial del Estado", y en él va insertando los decretos que aprueba. Los primeros desenvolvimientos burocráticos fueron los servicios de Hacienda y Asuntos Exteriores, que son simples asesorías que informan a la Junta (Orden de 30 Julio). A ellos se añade un Gabinete de Prensa (O. de 5 Agosto), que se denomina Oficina de Prensa y Propaganda y tenía como cometido cuantos servicios se relacionaban con la información y propaganda por medio de la imprenta, el fotograbado y similares y la radiotelefonía (O. de 24 Agosto). A fines de Agosto se crearon dos Comisiones, la de Justicia (O. de 27) y la de Industria y Comercio (O. de 29). En Septiembre se añadió la Dirección General de Comunicaciones (O. de 5 Septiembre 1936). El 1 de Octubre dióse ya un paso decisivo. Acababa de crearse la Jefatura del Estado y se instituyen la Junta Técnica, el Gobernador General del Estado, la Secretaría General del Jefe del Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

11. La primera piedra del nuevo Estado español.

"Razones de todo linaje—empieza diciendo el Decreto de 29 de Septiembre—señalan la alta conveniencia de concertar en un alto poder todos aquellos que han de conducir a la victoria final al establecimiento, consolidación y desarrollo del nuevo Estado". Se trata aquí ya de la primera piedra para la constitución del Régimen. Créase la Jefatura del Estado, disolviéndose la Junta de Defensa anterior, y se da a la institución recién nacida la personificación del principio fundamental de unidad de mando. El nuevo Jefe asume, como la Junta—y aquí hay que subrayar la tendencia concentradora—, "todos los poderes del

nuevo Estado" (art. 1). Estos poderes, que no son sólo los del Estado anterior, de tipo liberal y por consiguiente de poco poder, se ven aumentados aquí por el hecho de que la designación de Generalísimo recae en la misma persona del Jefe del Estado, quien lleva también el cargo de General en Jefe de los Ejércitos de operaciones (art. 2).

Montado ya el Estado sobre esta institución esencial que acoge su más expresiva representación, se acude al planteamiento de una estructura central mediante la ley de 1.º de Octubre. Hácese ya allí una llamada a la instauración de ciertas máximas. "La estructura del nuevo Estado español, dentro de los principios nacionalistas, reclama el establecimiento de aquellos órganos administrativos que, prescindiendo de un desarrollo burocrático innecesario, respondan a las características de autoridad, unidad, rapidez y austeridad" (Ley 1.º Octubre 1936, exposición de motivos). Seguidamente se crea una Junta Técnica, con secciones que corresponden a la competencia de los antiguos Ministerios (art. 1.º. Hacienda, Justicia, Industria, Comercio y Abastos, Agricultura y Trabajo Agrícola, Trabajo, Cultura y Enseñanza, y Obras Públicas y Comunicaciones). La Junta muestra un régimen de unidad, sumamente valioso, pues—según el art. 2.º—su Presidente es el único que resuelve, y para hacerlo recaba "la cooperación de técnicos que con carácter consultivo se nombrarán oportunamente". Los dictámenes serán sometidos al Jefe del Estado. El establecimiento de otros cargos y secretarías no tiene trascendencia desde el punto de vista constitucional: hay un Gobernador General, como antiguo ministro de la Gobernación (art. 3), un secretario de Relaciones Exteriores (art. 4) y un secretario general del Jefe del Estado (art. 5). Las funciones del Gobernador general son reguladas por Decre-

to de 5 Octubre, y el procedimiento a seguir en la Junta aparece reglamentado por el Decreto de 19 de Noviembre.

12. El Decreto 255 y la Constitución del Gobierno regular.

Son todo esto avances interesantes en la etapa de instauración del Régimen, pero ésta no se acomete de modo lógico hasta que con el Decreto 255 se establece el instituto jurídico del Partido Unico y se empieza a regular su funcionamiento. La designación del Consejo Nacional del Partido y sus primeras actuaciones marcan ya un desarrollo decisivo.

A los vagos "principios nacionalistas" aludidos por la ley de 1.º de Octubre, siguen los ya definidos principios fundamentales de los 26 Puntos de Falange, aceptados en el Decreto 255 como norma programática, a la que el Estado habrá de someterse, en tanto que, aconsejado por la realidad, no decida su revisión y mejora (cf. exposición de motivos del citado decreto). Lo demostró así largamente la política agraria y laboral, y aun ciertas disposiciones sobre repoblación, trabajo de la mujer, beneficencia, etc. De modo singular debe recogerse el ejemplo del Fuero del Trabajo que es, esencialmente, la aplicación de los Puntos 8 al 16, y que hasta en su modo de elaboración muestra el influjo del nuevo Régimen. Realmente el Régimen quedó basado sobre la clave fundamental del Decreto 255. La organización de la Administración Central y la designación de Gobierno (Enero-Febrero 1938), señalan la presencia del Régimen. El Fuero del Trabajo, inserto en el "Boletín Oficial del Estado", con fecha 9 Marzo 1938, fué "formulado por el Consejo Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las Jons, sobre una ponencia del Gobierno". La importancia del Fue-

ro es pareja a la que en Italia tiene su Carta, y en el modo de aplicación del mismo, puede señalarse un camino fecundo. Mientras el Fuero es consecuencia de las Normas programáticas, disposiciones fundamentales (sindicación, magistratura del trabajo, etc.) arrancan del Fuero. Se señala así un modo propio de legislar que revela un nuevo Régimen.

No hay posibilidad de equiparar el que rige en España desde 1938 con el de 1935, ni con el de 1936. Lo viene a declarar paladinamente un Decreto—el de 2 de Febrero de 1938—que acude a marcar en la historia heráldica la presencia del Régimen nacionalsindicalista. Su preámbulo dice que la Revolución nacional de 1936 ha instaurado “un nuevo Estado, radicalmente distinto en sus esencias de aquel al cual ha venido a sustituir”, y creyendo preciso que ese cambio “se refleje en los emblemas nacionales”, modifica el escudo de España e inserta en él dos nuevos elementos: el águila, “que desde Roma viene siendo símbolo de la idea imperial”, y el haz y el yugo de los Reyes Católicos, “cuya adopción como distintivo constituye uno de los grandes aciertos de nuestra Falange”; haz y yugo—afirma—que “debe figurar para indicar cuál ha de ser la tónica de nuevo Estado”.

El Régimen se afirma, pues, en España de modo decisivo a partir de la constitución del Gobierno. Claro que este Régimen se afirma solamente en tanto se adecua al modo de ser que caracteriza a la Falange, cuyos postulados fueron subrayados por el Caudillo mismo como guía a seguir, en su discurso del 1.º de Octubre de 1938, del cual es este expresivo párrafo: “Confirmando a la Falange Española Tradicionalista y de las Jons, mi decisión absoluta y mi palabra de llevar a su grandioso fin los postulados políticos que representa el anhelo histórico de que es encarnación y guarda”.

13. El régimen fascista.

El caso italiano muestra ciertas analogías con el nuestro. Desde el 28 de Octubre de 1922 al 9 de Diciembre de 1928, pásase por un período de instauración o implantación parcial que se corona en aquella última fecha, gracias a la organización constitucional dada al Gran Consejo, por más que ya la ley de 24 Diciembre 1925 venga a caracterizar un Régimen en sentido negativo, pues supone el término del sistema parlamentario. Precisamente con referencia a esta ley dice Panunzio que es ella "la que hace fascista al Estado italiano", condicionando la unidad del sistema jurídico y permitiendo dar el nombre de "régimen de Jefe de Gobierno" al régimen político de Italia. En esa obra de montar el Régimen hay que citar leyes sociales (sindicatos, consejo nacional de corporaciones, constitución y funcionamiento de estas, etcétera) y políticas (sobre el Jefe del Gobierno, la facultad de emanar normas jurídicas, el Gran Consejo, etc.). La Carta del Trabajo es "ley de leyes", como nuestro Fuero.

Los caracteres del Régimen fascista han sido reseñados por Santi Romano al resumir la obra de la Revolución de los Camisas negras. Vienen a ser: organización de las clases sociales, refuerzo del principio de autoridad, encuadramiento del Partido en el Estado, nuevas relaciones entre los ministros y el jefe del Gobierno, posición preeminente de poder ejecutivo, delimitación y disciplina de los derechos fundamentales e instauración de un nuevo sistema de relaciones con la Iglesia.

El Gran Consejo participa en el Estado, no sólo por su función consultiva, sino en razón de exigirse en ciertos casos su intervención para la elaboración de las leyes. El Régimen aparece así como expresando la Revolución victoriosa. Pero

no está totalmente incluido en el Estado desde un cierto punto de vista. Sin que lleguemos a la tesis de Hussard, para quien, merced a los influjos del "Estado de derecho", la organización política italiana se encuentra en un estadio entre la Revolución, encarnada por el Partido, y el Derecho, encarnado en el Estado, hay que tener en cuenta que el Régimen recoge socialmente una esfera de apoyos que no coincide con la propia del Estado. Si bien éste actúa sobre todos los ciudadanos y el Partido, alma del Régimen, sólo sobre sus miembros, existen mil asociaciones políticas, profesionales, asistenciales, educativas, culturales, etcétera, que han surgido y germinado del Partido, sin que sean éste, que es quien propiamente se enlaza al Estado. Como por otro lado hallanse instituciones que siendo Estado no son propiamente Régimen mientras éste no las bautiza y asocia (así las Cámaras, la Magistratura, el Consejo de Estado). Esto se eleva, como ha notado Panunzio, "gracias al carácter esencial del Fascismo, que es su sentido institucional". Como las escuadras de combate pasan a ser la Milicia y ésta la MVSN, los grupos de competentes, se transforman en Consejos técnicos y dan vida, al fin, al Gran Consejo; la Monarquía y el Ejército, únicos "puntos firmes" para el Fascismo el 28 de Octubre, ven alinearse a su lado, con carácter fascista, los antiguos organismos y estructuras cuya disolución no se creyó obligada. La Revolución asimila y transforma, convierte y bautiza. Así el Régimen es la aplicación de las normas programáticas, del espíritu, del ideal revolucionario, pero no es ni pretende ser estancamiento ni estatua de sal, porque precisamente la Revolución es permanente y el Partido movimiento. Un caso ejemplar es el que refleja la Asamblea quinquenal del Régimen. Reunida en los años VII, XII y XVII de la E. F. (1929, 1934 y 1939), aparecen en ella simul-

táneamente representantes del Partido y de las nuevas instituciones y jefes y funcionarios de instituciones anteriores al 28 Octubre. Por eso la explicación del fenómeno estriba en considerar, como hace Panunzio, a cada Estado históricamente como un Régimen, de modo que todas las instituciones de éste sean "eo ipso" instituciones del Estado y viceversa.

Esta función bautismal y asimiladora se llevó a cabo sobre la Cámara hasta su reciente disolución. La ley de 17 Mayo 1928, y los Decretos-leyes de 30 Septiembre 1928 y 27 Diciembre 1932, modificaron fundamentalmente los cimientos de la representación. La elección ha constado de tres actos: propuesta de las Confederaciones, designación por el Gran Consejo y aprobación por el Cuerpo electoral. Y en cuanto a su sentido fascista, la misma Cámara en la sesión del 12 Diciembre 1930, incorporó a su Reglamento una disposición según la cual los diputados que hubieran incurrido en sanciones disciplinarias de las que figuran en los Estatutos del Partido, no pueden participar en los trabajos parlamentarios ni gozan de exención ni honores. El Senado se ha mantenido según el esquema de la Constitución de 1848, con modificaciones solamente referentes al tema de la Jefatura del Gobierno. La nueva Cámara de los Fascios y de las Corporaciones, anunciada en 23 Marzo 1936 y decidida en Abril de 1938, funde el Consejo Nacional de las Corporaciones—verdadera tercera Cámara hasta este momento—con las organizaciones de tipo político.

El Gran Consejo ha sido, junto con la Milicia y los Sindicatos, la institución que ha reflejado en lo político, auténticamente, el régimen nuevo. Fué instaurado en Octubre de 1922 como "órgano supremo del Fascismo" para fijar las normas de este en todos los campos de la vida nacional. La ley de 9 Diciembre 1928 (complementada el 14

de Diciembre de 1929), hace pasar el Consejo a órgano constitucional del Estado, llevando a cabo así una acción complementaria, de la que realiza el Fascismo comunicando su savia a las instituciones anteriores. El Gran Consejo queda desde esa fecha como órgano estatal encargado de coordinar e integrar todas las actividades del Régimen surgido de la Revolución de 1922, y por eso es, como nota Santi Romano, quien ha de imprimir al Gobierno el carácter fascista.

14. La Revolución hitleriana.

En el ejemplo alemán encontramos también similitudes de procedimiento y tendencia. Hitler subrayó ya, en su discurso del 30 de Enero de 1937, el resultado de la parte de la Revolución alemana que había sido cumplida. La resumió así: 1. En Alemania hay solamente un soberano y éste es el pueblo alemán en su conjunto. 2. La voluntad de este pueblo encuentra expresión en el Partido, que es su propia organización política. 3. No puede hablarse más que de un sólo legislador, y 4. Sólo existe un Poder: el ejecutivo.

Toda esta obra constituye un Régimen, porque diferencia netamente los principios y las estructuras actuales de las nacidas de Weimar. Como ha notado Schmitt en las primeras palabras de su conocido estudio "Estado, Movimiento, Pueblo", el conjunto del derecho público alemán de nuestros días se sustenta sobre terreno propio. La Constitución de Weimar no podría ser la base de un Estado nacionalsocialista ni en su contenido material ni en su aspecto formal de vigor legal característico. El Régimen alemán muestra la coexistencia de cargos que suponen posibilidades jurídicas. Entre ellos se levanta con preeminencia que nadie puede ocultar la dirección política, constituyendo ley fundamental del nuevo

derecho público. Se ha acabado con el jefe que reina y no gobierna. Hitler es hoy no sólo de hecho, sino plenamente "de iure" jefe supremo y total. Su cargo de canciller no permite asimilarlo a los cancilleres anteriores, porque es Presidente y Caudillo al propio tiempo.

15. El Kemalismo.

Nuevo Régimen plenamente caracterizado es también el turco. Con sentido nacional profundo y vigor social notorio, se levanta contra toda corriente de derecha o izquierda. Atatürk ha dado a Turquía no sólo una Patria independiente, sino también una doctrina cuya aplicación supone un Régimen. El 29 de Octubre de 1923, se proclama la República y el 30 de Abril siguiente la nueva Constitución. Tres años más tarde se celebra el Congreso del Partido en Angora y Atatürk hace la declaración de las bases ideológicas propias del Partido revolucionario: republicanismo, nacionalismo, popularismo, estatismo, laicismo y revolucionarismo. Son seis flechas que marcan ritmo en la bandera del Movimiento. Para darse cuenta exacta de esta obra, hay que notar que el Estado precisó de nuevos organismos y apenas pudo ejercitar una misión bautismal, porque tuvo que suprimir los órganos anteriores. Derribóse el Califato, se cerraron las medresas, se disolvieron los tribunales confesionales, se anularon las sentencias de los fétuas, etc. Los nuevos elementos hubieron de instaurarse de modo sistemático: la República, las Casas de Cultura popular, etc.

Al defender el proyecto de ley que modificaba la Constitución de 1924, para incorporar a la misma los principios del Partido e inaugurar así el Nuevo Régimen, el 5 de Febrero de 1937, afirmaba Sukru Kaya, ministro del Interior: "Después de haber salvado la independencia de Turquía,

Ataturk ha creado un sistema estatal destinado a evitar peligros en el porvenir. Ha definido claramente, en forma programática, tales principios y ha confiado su ejecución al Partido Republicano del Pueblo, que había fundado. Estos principios constituyen, ante todo, el programa de un Estado en armonía con el carácter histórico de los turcos, su generosidad y su orgullo nacional". Queremos—añadió—que los actos que realizamos en el terreno político y en otras esferas "penetren en la cultura y en la conciencia jurídica, constituyendo el punto de partida, el origen y el apoyo de la vida jurídica. Por eso hemos decidido introducir el estatismo en la Constitución".

16. El nuevo régimen portugués

En cuanto a Portugal, el discurso del doctor Oliveira Salazar, el 30 de Julio de 1930, expresa el sentido de aquel Régimen. El doctor Salazar relaciona el Movimiento portugués con la que llama crisis del Estado moderno. Preocupado por la posibilidad de que si desapareciese la Dictadura se diese paso al sistema de partidos y con él se fuese abajo la obra iniciada, decide construir un Orden nuevo. "Recoger resueltamente las tradiciones aprovechables del pasado, las realidades del presente, los frutos de la experiencia propia o ajena, la previsión del futuro, las justas aspiraciones de los pueblos, el ansia de autoridad y disciplina que agita a las generaciones de nuestro tiempo y construir el nuevo orden de cosas que, sin excluir aquellas verdades substanciales a todos los sistemas políticos, mejor se ajuste a nuestro temperamento y a nuestras necesidades". Y así enuncia los principios del Manifiesto de la Unión Nacional, cuyos puntos de apoyo son: exaltación nacional, consolidación del Estado, refuerzo del Poder ejecutivo, coordinación social,

progreso económico y paz social. Estos principios se incorporan a la ley merced a la Constitución de 1933, que instaura el Régimen salazarista.

Esta Constitución define al Estado portugués como "República unitaria y corporativa, basada en la igualdad de los ciudadanos ante la ley, en el libre acceso de todas las clases a los beneficios de la civilización y en la interferencia de todos los elementos estructurales de la Nación en la vida administrativa y en la hechura de las leyes" (artículo 5). Y añade que al Estado incumbe: 1, promover la unidad y establecer el orden jurídico; 2, coordinar, impulsar y dirigir todas las actividades sociales; 3, velar por la mejora de condición de las clases sociales menos favorecidas (artículo 6).

17. Nuevo régimen y "vuelta al pasado."

En todos estos ejemplos, aparece el Régimen como incorporación al Estado de los principios de la Revolución, dando nacimiento a un sistema. Es marca común de estas nuevas legalidades la referencia al pasado, pero es también afirmación general en ellas el repudio de la reacción. El Fascismo italiano fué considerado, al principio, por amigos y enemigos, como reacción y vuelta al antiguo régimen.

Como nota Del Vecchio, quizá el más árduo problema que la mente humana se puede proponer, es discernir lo viejo y lo nuevo, lo esencial y lo accidental, lo eterno y lo contingente en la historia de las naciones. Téngase en cuenta que todos estos movimientos han empezado siendo fe y acción, y que las fórmulas han llegado cuando el edificio estaba construido. En el fondo de todas estas interpretaciones se lucha contra el concepto de Revolución y se pretende que la Verdad na-

cional no crezca y mude de corteza como crece y se viste con nuevas galas cada día el árbol que es símbolo de la Nación, manteniendo incólumes las raíces que le atan a la tierra, hija y madre. Para quienes admiten la Revolución no existe problema y otra actitud sería contradictoria al admitir el derecho a hacer la Revolución y negar fundamento a las transformaciones ocasionadas por la instauración revolucionaria que crea el Régimen.

La historia turca es ejemplar a este respecto. Admirablemente relataba el episodio Sukru Kaya en su discurso del 20 de Febrero de 1938, recordando que cuando Ataturk liberó a la Patria de la esclavitud, "había gentes que encontraron que ya era bastante. Estas se figuraban que una vez liberada la Patria de los invasores, descargada de cadenas y salvada, ya no había más que hacer. Y aconsejaban en tal sentido. Estos ignorantes—in-sistía el Ministro turco—no sabían que los elementos nefastos morales y materiales, que habían arrastrado a la nación de la gloria y el triunfo a los abismos de la esclavitud y de la destrucción, volverían a empezar a roer la existencia y nos arrastrarían hacia abismos quizá más profundos". Ataturk no se encontró seducido por la gloria de hacer independiente a su Patria y se consagró a la tarea de conducir el Estado, según planos que había estudiado ya durante la guerra, cuando dirigía la lucha en los frentes.

La obra de Franco aparece inspirada en estas mismas ideas, en cuanto que el nuevo Régimen, a pesar de que inicialmente sea una reacción, no significa vuelta al pasado. Precisamente, en su discurso del Día de la Victoria, en Madrid (19 Mayo 1939), refirióse a las batallas libradas en el orden político interior y exterior y en el orden económico, para dar potencia a nuestro ejército y hacer posibles las batallas militares. Terminada la gue-

rra, Franco afirma solemnemente que la lucha sigue: "La victoria se malograría—dijo en esa oportunidad—si no continuásemos con la tensión y la inquietud de los días heroicos, si dejásemos en libertad de acción a los eternos disidentes, a los rencorosos, a los egoístas, a los defensores de una economía liberal que facilitaba la explotación de los débiles por los mejor dotados". Y fijándose en el punto concreto que aquí ponemos de relieve, declaró: "Para esta gran etapa de la reconstrucción de España, necesitamos que nadie piense en volver a la normalidad anterior; nuestra normalidad no son los casinos ni los pequeños grupos, ni los afanes parciales. Nuestra normalidad es el trabajo abnegado y duro de cada día para hacer una Patria nueva y grande de verdad". Y señalando la diferencia con el pasado, insiste: "Acabaron, pues, los días fáciles y frívolos en que sólo se vivía para el presente; nosotros viviremos para el mañana; no es una frase hueca y sin contenido la de nuestro Imperio, a él vamos; pero sólo lo lograremos con renunciaciones, con austeridad y con disciplina. Pero para coronar nuestra gran obra, necesitamos que a la victoria militar acompañe la política..."

SEGUNDA PARTE

TRADICION Y ORDEN NUEVO

J. Beneyto, Vázquez de Mella, Antología (Barcelona 1939); J. Corts, Ideario político de Balmes (Madrid, 1934); E. R. Curtius, Spanische Kulturprobleme der Gegenwart ("Hochland", 1926); E. de Hinojosa, Estudios sobre la historia del derecho español (Madrid, 1912); Angel Ganivet, Idearium Español (Ed. con prólogo de P. Laín, Bilbao, 1939); Carlos Ibarguren, Las sociedades literarias y la revolución argentina (Buenos Aires, 1937); W. González Oliveros, Humanismo frente a comunismo (Valladolid, 1938), M. García Morente, Idea de la Hispanidad (Buenos Aires, 1938); R. Leñesma, Discurso a las Juventudes de España (1933); A. Matilla, Olózaga (Madrid, s. f.); R. de Maeztu, Defensa de la Hispanidad (Valladolid, 1938)-Montes y pueblos ("Heraldo de Madrid", 16 octubre 1913); Martínez Lumberras, El pensamiento y la acción tradicionalista en España durante el siglo XIX (Granada, 1938); Víctor Pradera, El Estado Nuevo (San Sebastián, 1937); J. Pemartín, ¿Qué es lo "nuevo"? (Valladolid, 1938); A. Moeller van der Bruch, Der dritte Reich-Preussische Stil (Hamburgo, 1933); José Antonio Primo de Rivera, Discursos (Obras completas, tomo I); Riaza, El derecho romano y el derecho nacional en Castilla en el siglo XVIII (Rev. de cien. jur. y soc., Madrid, 1928); E. Schramm, Donoso Cortés, Leben und Werk eines spanischen Antiliberalen (Hamburgo, 1934); G. Schreiber, Deutschland und Spanien (1936); Vegas Latapié, Romanticismo y democracia (Valladolid, 1938); Fernández Almagro, Origen del régimen constitucional en España (colec. Labor).

CAPITULO CUARTO

NUESTRO ORDEN POLÍTICO NACIONAL Y SU DEFORMACIÓN

18. La originalidad encubierta.

No sé de ninguna relación más clara y más emocionante que la que hay que establecer entre el Norte de Sicilia y el Levante español. Palermo como Valencia, con sus monumentos y sus naranjales. Aquella Catedral con tumba de Reyes y aquella carretera llena de flores hacia Monreal. Cuando lo recorrí acababa de publicar Turati sus *Discorsi* de 1928. En ellos se trataba de construir nuestra casa, casa que sería también nuestra iglesia y nuestro castillo, monasterio y hogar. Lcción vibrante para pintar al Estado de incontenible vigencia de nuestros Carlos y Felipe. Monreal era también la piedra y en este sentido gótico, clásico, frente a la escayola del barroquismo que hace florecer encima de las columnas y las dovelas guirnalda y decoraciones ochocentistas. Yo pensaba entonces en el estilo, como actitud diversa y propia en el hablar y el andar, el correr y el orar.

La cultura y la civilización han dado originalidad a cuanto ha sabido buscar buena raíz. España —nos dice Schreiber— ha sido original en la literatura, en la ciencia, en la organización de la infantería e incluso en el ascetismo. Pero la originalidad política se encuentra deformada, desfigurada por consciente designio de los politicones, mutilada y anquilosada hasta dar a luz al raquítico

pueblo que solamente sabía vibrar como un energúmeno bajo el látigo del cacique y la mentira del demagogo.

“La lengua española tiene un vocablo muy característico: ensimismarse. Este vocablo es peculiar de un pueblo cuya tradición pertenece a la mística”. Con estas palabras iniciaba, hace ya más de un decenio, Ernst Robert Curtius, un trabajo sobre el problema cultural español. Y el estudioso alemán, lleno de curiosidad por tantas cuestiones transcendentales, se fijaba en el “ensimismamiento” que se produjo en España a raíz de la pérdida de las Colonias. Entonces la derrota trajo a los puntos de cien plumas las más amargas confesiones. Ejemplar, entre ellas, la de Baroja: “Eramos una excepción entre los pueblos civilizados”. Comentando esta frase, dijo Curtius que se antojaba característica de aquellos países que se encuentran hundidos. Pasa en España en 1898, lo que en Francia en 1870.

El “ensimismamiento” no es, sin embargo, una consecuencia de la derrota, aunque con motivo de ésta mediten sobre España quienes no habían llegado a tener costumbre de hacerlo. Donoso, Aparisi y Balmes, escribieron, antes de la derrota, palabras de valor extraordinario sobre lo que era España. Aun los dos libros más próximos al 98 llevan algunos años de precocidad. Ganivet publicó su “Idearium” en 1896, y Unamuno escribe sobre el casticismo de España en 1895. ¡Lástima grande que en lugar del ensimismamiento de la inteligencia, no hubiese surgido la concentración de la voluntad! Porque lo que hacía falta no tanto era estudiar a España como creer en ella. De la incredulidad en España arranca el derrumbamiento de nuestro Imperio, y a la decadencia se une la pérdida de nuestro prestigio intelectual, según supo ya reconocer, con agudeza notoria, Maeztu.

Téngase en cuenta que, aun cuando se trataba de estudiar a España, la idea de partido conseguía tan enorme importancia que anulaba caminos que pudieron ser cauces anchurosos de una concepción auténticamente nacional. Pensemos, a título de ejemplo, en lo que sucedió con la Escuela histórica del derecho. Los trabajos de Federico Carlos de Savigny, que tendían a avivar el espíritu de la nación exaltando el sentido de la tierra y los padres, vinieron aquí con sectarios andadores. Recordemos al Marqués de Pidal, cuyas "Lecciones sobre la historia y el gobierno de España", aparecen innegablemente tendenciosas. En el propio Donoso Cortés, con cuya vigorosa prosa ha sabido tallar Edmundo Schramm el leño de su imagen y su dirección, se advierten contactos doctrinarios. Y si eso ocurre, incluso con geniales tradicionalistas, ¿qué habremos de decir de los liberales? Maeztu dejó escrito que "no hay ningún liberal español que haya enriquecido la historia del liberalismo con una idea cuyo valor reconozcan los liberales extranjeros".

Todavía, tantos años después, hay que pensar en el "Idearium" de Gavinet, como libro de sembrador, suspirando por la España deseosa de ensimismarse. Tres ideas destacan allí (catolicismo, política de masas, exaltación de la violencia) que vibran aún como profecía de nuestra hora. Bien que la siembra del inquieto granadino haya sido tan poco fecunda como la del enamorado de Salamanca. Nadie ha trabajado con rigor de técnica política sobre el paralelismo que señalaba Unamuno entre la tradición histórica y la eterna tradición. Han faltado y faltan aportaciones para fijar una conciencia unitaria en estos temas. El esfuerzo de quienes pretendían llevar a la política un sentido tradicional, se esterilizó para la vida del Estado, en gracia a la gloriosa gesta de que se habían convertido en actores. Si por este lado el viejo carlismo

supo enraizar tan adentro que pudo mantener durante cincuenta años la reciedumbre de su admirable fanatismo, en el aspecto intelectual faltó una aportación serena de estructuras útiles para una construcción política. Ni Balmes, ni Donoso figuraron en la Comunión Tradicionalista; el primero estaba entre los moderados isabelinos; el segundo no llegó a ingresar en partido alguno. Otra buena prueba es que el carlismo solo ha tenido fecundidad cuando ha podido acomodarse a las rutas del Nuevo Estado. Vázquez de Mella invadió con su tesis de la trilogía social, con pleno derecho, aquel campo que esperaba un buen labrador, pero una contribución caudalosa capaz de arrastrar a las masas y conducir al pueblo con impulsos y preocupaciones actuales, solamente se da tardíamente con Víctor Pradera, ya cuando las aportaciones de tipo fascista revisten la mejor calidad. En resumen, casi una centuria pasada vanamente sin que se meditara con fervor para coger las armas en defensa de España e imponer con ellas la Verdad de nuestro Orden. Y en esa centuria el liberalismo trastornó los conceptos fundamentales desde el de patria al de comunidad popular, y lanzó por las cátedras, convertidas en tribunas, aquellas teorías que representa ejemplarmente el profesor del monarca "constitucional y parlamentario", Santamaría de Paredes. Tales conceptos carecían de vigencia para dotar a España de lo que su Orden exigía. El pueblo había pasado a ser de comunidad multitud, y la multitud para volver a ser pueblo tenía que encuadrarse en milicias y hacer del territorio un campo de batalla. El "Rector Hispaniæ", el "Dux", solo ha nacido al hacerse milite el ciudadano.

Era la única salida. Cuando en 1923 muere la monarquía constitucional, habían fracasado derechas e izquierdas. Ni antes ni después supieron, unas u otras, constituir el frente nacional que

hacía falta. Ha sido necesaria la sangre para que, al derramarse por la tierra, surgiera la voz del parentesco. El Decreto de Unificación dado por el Caudillo, en la fecha imborrable del 19 de abril de 1937, es piedra sillar. Su piedra clave se encuentra en el retorno a la Tradición española de las tres unidades—de los hombres, de las clases y de las tierras—con que el juramento falangista recoge aquellos tres principios de unidad de pueblo, de interés común y de jefatura jerarquizada que constituyeron nuestro antiguo Orden político y que se levantan actualmente, apoyados por los argumentos que han servido para dar sepultura al régimen liberal en todos los países totalitarios.

19. La sinfonía interrumpida.

Lejos de ser ruínas y polvo—ha dicho Maeztu—la obra de España, “es una fábrica a medio hacer, como la Sagrada Familia de Barcelona o la Almu-dena de Madrid”. Es “una sinfonía interrumpida que está pidiendo los músicos que sepan continuarla”. La sinfonía se interrumpió en 1700—sigue diciendo Maeztu—al cerrarse para siempre los ojos del Monarca hechizado. La Guerra de Sucesión no había dejado, después de catorce años, ninguna de nuestras viejas instituciones, excepto la Corona de Castilla. España era “una pizarra en limpio, donde un Rey y una Corte extranjeros podían escribir lo que quisieran”.

1.700, centuria de importaciones. Un derecho exótico había sustituido, apoyado por los legistas, al derecho nacional, no sólo en la doctrina y la jurisprudencia, sino en la misma enseñanza. Y unas Sociedades de Amigos del País sirven para que colabore el snobismo de los aristócratas con la des-preocupación de los intelectuales, rompiendo de consuno el desarrollo natural de las instituciones españolas. Se da vida a una antítesis que fué

forzoso dirimir por medio de la ruptura violenta del orden burgués; es decir, por nuestra Revolución nacional.

La importación ha seguido siendo característica de todo el XIX. Revolucionarios puros, y puros reaccionarios han presionado sobre la estructura del Estado, sin conseguir empresas duraderas, por falta de esos auténticos conservadores que son los revolucionarios nacionales. La Constitución de 1812 está emparentada con textos franceses. La de 1845 se moldea sobre trepas abstractas. Benthano ofrece para hacer una Constitución. Se tienen recetas, viene a decir Fernández Almagro, como para hacer morcillas. La "vuelta al pasado", la pura reacción, es muy clara desde 1823. Aquel trienio fué estimado no transcurrido, y tuvo como designación oficial la de "los mal llamados años". No hay solución alguna ni respuesta posible durante todo el siglo. El esqueleto feudalizante fué vestido con indumento modernista. Con el sufragio universal se inauguró una etapa embustera. A este respecto, unas frases de Olózaga documentan tan viva realidad. En fin, y para gran desgracia, los terribles embustes pasaron por verdades, sencillamente a fuerza de repetirlos, como en las aventuras africanas de Tartarín.

¡Con qué vigor se lanzaba Maeztu contra tantas traducciones! No ya de derechista, sino cuando escribía en el "Heraldo", que ya entonces era nacional: "bien está—dijo en una ocasión, en la anteguerra de 1914—que las casas editoriales publiquen traducciones, pero ya es hora de que se deje de traducir en la *Gaceta*, y España no llegará a producir tipos originales de pensamiento político si sus clases intelectuales no refrescan incesantemente su sentido del pueblo".

Las traducciones de regímenes exóticos, la importación de fórmulas constitucionales y las vulgares reacciones, condujeron a la deformación total

de nuestro orden político. Esta deformación puede condensarse en tres conceptos: Desjerarquización de la jefatura. Igualitarismo. Rentabilidad. Así se hunde la Unidad de mando, la idea de Comunidad nacional y el principio de Servicio o Interés común.

20. Desjerarquización frente a la Jefatura.

El sentido y la función del Jefe se deshacen y desvirtúan cuando decae España. Mejor dicho, al revés, decae España cuando esa función y ese sentido están en desuso. La unidad del Estado en el Rey frente a los territorios fué destruída al anularse los órganos de su estructura; es decir, los virreinos, que eran delegaciones "in toto" del Poder, y empieza a desmenuzarse éste con intendentes y gobernadores, capitanes generales y audiencias. Recordemos cómo culmina la tendencia en las disposiciones de las Cortes reunidas en Cádiz que establecen demarcaciones provinciales a imitación de los departamentos franceses, según ya allí subrayó Capmany. El absolutismo pierde su auténtico carácter de plenitud de poder para acoger la idea, extraña a España, de poder arbitrario. Arranca a este respecto del reinado de Felipe V, del que son ejemplares los Decretos de Nueva Planta, en los cuales la fuente del derecho, contra toda nuestra construcción plurisecular, viene a ser "el justo derecho de conquista".

La idea monárquica es sustituída por el interés dinástico, y el pueblo que comprendía aquélla no pudo explicarse éste. La guerra de Sucesión constituye un símbolo, en su primigenio valor, de tan tristes conceptos. Para oponerse al interés dinástico, el pueblo vino a enfrentarse con la monarquía no sólo en vísperas de la Guerra Carlista, sino también en vísperas de la República y de la Revo-

lución roja. Los "Credos republicanos" circulaban clandestinamente entre quienes ya no veían en la monarquía aquel sentido español de síntesis de la unidad patria, sentido perdido al propio tiempo que el rey dejaba huir su conciencia de Jefe. En pieza así, contra la dinastía, vera a la desmonarquización, la tendencia republicana, que nace como movimiento de intelectuales y aristócratas para tener colofones inimaginados. Este carácter de sustitutivo que adquiere entre nosotros la República explica el poco arraigo conseguido por la experiencia novecentista y la obligada desviación de la jornada jaranera del 14 de abril. José Antonio nos lo dijo en su Discurso del Cine Madrid: "La Monarquía española había sido el instrumento histórico de ejecución de uno de los más grandes sentidos universales. Había fundado y sostenido un Imperio y lo había fundado y sostenido cabalmente por lo que constituía su fundamento virtual: por presentar la unidad de mando... Pero la Monarquía dejó de ser unidad de mando hacía bastante tiempo. En Felipe III el Rey ya no mandaba... Cuando llega Carlos IV, la Monarquía ya no es más que un simulacro sin substancia"... Y nos dijo también esta gran verdad: "la Monarquía que empezó en los campamentos se ha recluso en las Cortes".

Las Cortes en el XIX y el XX y la Corte en el XVIII y el XIX han sido la causa de nuestra desjerarquización. Pensemos en quienes figuran en la Corte bajo la Monarquía infiel al principio de jefatura. Y comparémoslos con el retrato del "valido" que hace Quevedo. El "valido" está caracterizado por el desinterés. La justicia es—y de ahí el cetro—la base de la auténtica Monarquía. Imaginemos a Isabel la Católica recorriendo el reino para presidir los juicios de la Santa Hermandad y veámos que esa fué la tarea de los Príncipes asturianos, que pasa a la Corona de Castilla y

León, tal como lo relata el Poema del Cid, que pinta al rey precisamente sentado en un tribunal. La obra demoledora culmina cuando las lises sustituyen a las águilas y ya nadie recuerda a las flechas y al yugo. Se fundan compañías de navegación para hacernos ver el avance de los tiempos y traen precisamente ese avance en libros franceses, que son la condenación de nuestros ideales. La Compañía Guipúzcoana, en 1872, llevaba a Venezuela enciclopedias francesas, y el Monarca español nombraba virreyes por recomendaciones de Versalles. Mientras antiguamente nosotros estudiábamos para enseñar al Mundo, entonces buscábamos a extranjeros para que nos construyesen calzadas. Frente al ejemplo clásico y glorioso de Bolonia, donde el Colegio Albornociano ha mantenido, desde el siglo XIV, una tradición de vida colegia fecunda, se crean las pensiones individuales, las bolsas de estudio para que el individuo, sin control nacional, vague en Europa y regrese a España desespañolizado.

21. Igualitarismo contra igualdad.

Factores semejantes destrozan otro gran principio, el de comunidad nacional. Frente a la igualdad reconocida antes de ser promulgada, se implantó un igualitarismo irrealizable. Lo que los diplomas de la Edad Media dejaban ver, incluso con raíces de Patrística; lo que las polémicas "de indiis" expresaban con la afortunada fórmula de "unidad de fin en el género humano", pero también con el sentido esencial de los "derechos fundamentales", tal como han estudiado en relación con España, Robert v. Keller, Eugen Wolhaupter y Konrad Beyerle, permiten constatar que la igualdad es un hecho y un derecho en el ambiente que reflejan los fueros y colecciones diplomáticas medievales.

El igualitarismo quiere decir, en cuanto a la relación estatal, valor igual de cada individuo. Su fórmula expresiva es "un hombre, un voto" y constituye en último término la consecuencia de la preocupación de los legistas por su predominio sobre el clero y la nobleza. Frente a los problemas de la producción, el igualitarismo conduce a la anulación de la organización gremial, esto es al hundimiento de los principios y de las prácticas de la especialización, el aprendizaje, etc., para conseguir el dominio de la figura del trabajador aislado. Los elementos que desfiguran la estructura estatal española, en este aspecto, son los interesados extranjerizantes, los amigos de modas recién importadas, Ward, Jovellanos, los Caballeritos de Azcoitia, las Sociedades de Amigos del País... En el terreno político, el triunfo de la idea igualitaria conduce al sufragio universal y a la intervención de gentes no preparadas o por lo menos sin especial sentido, en una palabra, al ímpetu del "hombre de la calle".

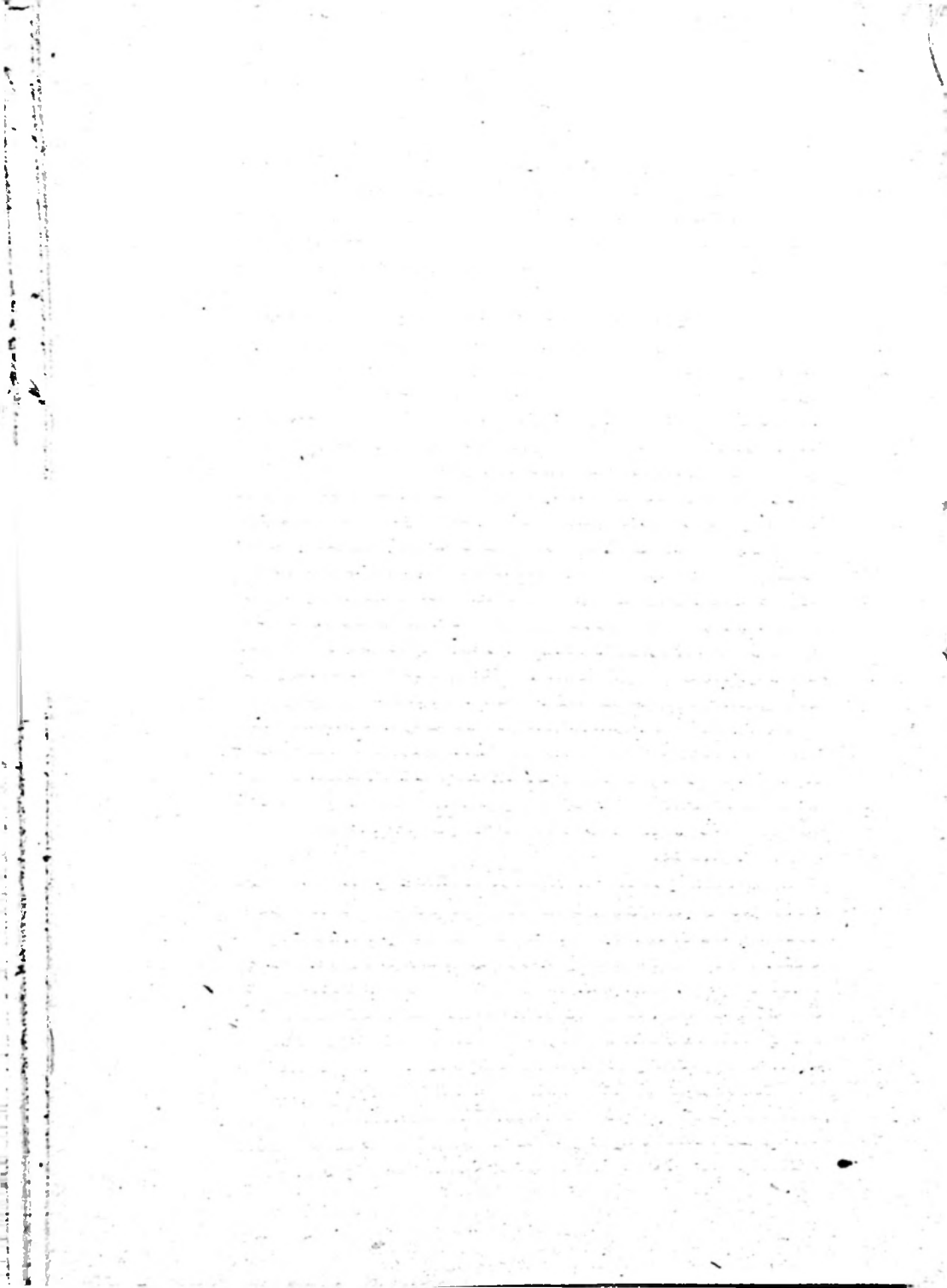
22. Renta contra interés común.

Finalmente, la deformación del concepto de servicio lleva a la destrucción de la prioridad del interés común. El capitalismo le sirve de ariete. Este es obra sumamente compleja, resultado del dominio judío en la economía y de la actividad desarrollada por ciertos ricos gremios que dieron base a estas nuevas formas. A través de la presión de tales conceptos se dirige una lucha contra las "manos muertas" y contra los bienes comunales. La expone entre nosotros el Decreto del 29 Junio 1822. Por este camino el individualismo, de acuerdo con los postulados de la filosofía enciclopedista, produce una doctrina civilista que tomando relieve en el Código Napoleón encuentra vehículo en las conquistas del general Bonaparte.

Rompióse así el lazo que unía la legislación con el pasado, y el derecho civil, que tenía la pretensión de resultar aplicable a todos, vino a convertirse en un derecho típico de clase. Se había exaltado de tal manera el concepto romano de la Glosa, que en el Código civil no se trataba más que de propiedad y de contrato, es decir, se hizo un cuerpo legal utilizable sólo por los burgueses. Ese régimen se extiende a lo penal, donde era más castigado el robo que el homicidio. De esa manera se dió pie para que pudiera decirse el derecho civil era un derecho para los ricos y el derecho penal un derecho contra los pobres.

A través de las disposiciones establecidas por los órganos gubernativos de la España siglo XIX, se puede ver una tendencia a desarticular y destruir los bienes comunales: es esta la obra de las leyes dictadas en la primera mitad del siglo pasado. El anuñamiento de los derechos de la colectividad sobre las tierras ajenas aparece clarísimo en aquellas disposiciones relativas al cierre y al amojonamiento de los tundos. Tales medidas afirman el derecho antinacional de dejar la tierra sin cultivo. Las decisiones del Tribunal Supremo relativas a la ejecución de la Ley de Señoríos fueron la legalización de un gran disparate jurídico: el de convertir los derechos jurisdiccionales en patrimoniales.

Por otra parte, el interés común y la idea de servicio se alejan de la configuración de los problemas de crédito. Dictanse normas para la explotación de los débiles por los fuertes. La libertad se hace negligencia y el liberalismo de "laissez faire" se convierte en liberalismo de "laissez mourir". En el terreno del trabajo faltando una reglamentación completa y eficaz se impone el abuso de los poderosos. Sólo así, con el avance de la idea de rentabilidad y por el individualismo, el mayor valor de la cosa que el hombre ha dado alas a este terrible desorden social de la vida del siglo XX.



Para documentar algunos aspectos aludidos aquí y complementando la bibliografía del capítulo anterior, deben tenerse en cuenta las sugerencias bibliográficas que siguen:

Nuevas orientaciones económicas.—*A. Fischer*, La nouvelle politique économique allemande (Revue d'économie internationale, 1936); *A. Weber*, Wirtschaftspolitik (1932). Tradición económica. *W. Sombart*, Judentum und Kapitalismus; *Andre-Sayaous*, La vie commerciale a Barcelone au XIII siècle (Estudis universitaris catalans, 1932); *A. Bonilla*, El derecho aragonés en el siglo XIII; *Cl. S. Alborno*, La repoblación de reino austro-leonés (Homenaje a Levene, tomo I); *M. M. Antuña*, La usura judía en Castilla (Ciudad de Dios, 1934); *Bermúdez Cañete*, El dinero en la España del siglo XVI (Córdoba, 1936); *Beneyto*, Contributo alla storia degli ademprivia (Riv. stor. dir. ital., 1933);—Il diritto catalano in Italia (misma Riv., 1934);—Diritto romano e diritto popolare nel Medioevo spagnolo (Studi per Albertoni, III, Milán, 1934).

El problema político puede atenderse leyendo, *Otto Hitz*, Ueber die Repräsentationsgedanke (Zeitschrift der Savigny-Stiftung, 1932); *R. Michels*, Il partito politico (Turín, 1918); *E. R. Huber*, Verfassung (1937); *E. Hinojosa*, El elemento germánico en la historia del derecho español (1912) Estudios sobre la historia de derecho español (1914); *L. Díez Canseco*, Notas para el estudio del fuero de León (Anuario hist. dar. esp. I, 1924); *L. Klupfel*, Verwaltungsgeschichte des Koenisreich Aragón; *Beneyto*, El beneficio en la España medieval (Rev. leg. y juris., 1934)—Ciudad e iglesia en la Edad

media española (Rev. cit., 1935)-Peripécia histórica del partidismo político (FE, 1938).

Otros aspectos interesantes son atendidos por *Forster Watson*, *The influence of Valencia in J. L. Vives* (1928); *Jiménez Soler*, *Estudios sobre la historia y el derecho de Aragón*; *Torres*, *El Estado visigótico* (An. hist. der. esp.); *Ramos Loscertales*, *Un documento interesante para los orígenes de la legislación aragonesa* (Spanische Forschungen der Goerresgesellschafts, III); *Klein*, *The Mesta* (Harvard, 1924); *Carande*, *El obispo, el Consejo y los regidores de Palencia* (Rev. Arch. Bibl. y Museo de Madrid, 1932); *A. Herculano*, *Historia de Portugal. Los datos más esenciales en el Manual de historia del Derecho, de los profesores Ríaza y García Gallo*, 1934.

El problema preciso de herejía e Inquisición, en *J. Montes*, *El crimen de herejía* (1908), y *López Ortiz*, *El tribunal de fe entre los musulmanes españoles* (Cruz y Raya, 1934). Sobre judíos, mucha documentación en *Baer*, *Die Juden in der chistlichen Spanien* (Berlin, 1932).

Sobre Indias, *A. Zabala*, *La constitución indiana* (Madrid, 1934).

Sobre los derechos fundamentales, *R. V. Keller*, *Freiheits- und Eigentums-garantien im Mittelalter* (1933); *E. Wohlhaupter*, *La importancia de España en la historia de los derechos fundamentales* (1932), y la conferencia de *K. Beyerle* en la I Semana Internacional de Hist. del Derecho esp. (1932).

La intromisión de los juristas, en *Guy Coquille*, *Les legistes*, y en *Torreánaz*, *Los consejos del Rey en la Edad Media*.

Sobre la oposición burguesa de cara al proletario, *A. Menger*, *El derecho civil de los ricos*; *Cimbali*, *I diffetti sociali delle leggi vigenti*, y *Beneyto*, *Construcción histórica del Derecho del trabajo* (Rev. de leg. y juris., 1931).

La intervención centralizadora francesa en *Martin Hume*, *La política centralizadora del Conde Duque*, y en *Antonio Sardinha*, 1640 (Nação Portuguesa, 1925. en el volumen de cuestión peninsular, Cádiz 1939).

La cuestión republicana se prevé estudiando los archivos de la Inquisición. Ejemplo, el Credo republicano lombardo, prohibido en 1797 (*Ahn*, legajo 451).

CAPITULO QUINTO

DECADENCIA Y RESURRECCION DEL ELEMENTO TRADICIONAL

La España imperial muere precisamente porque ha perdido el impulso de aquellos grandes principios que le dieron vida. Y lo perdió por obra de la intervención. Fuerzas de diverso origen pero de idéntico fin, se enconan contra España. Ramiro Ledesma hace en su "Discurso" esta sugestión: "si España, después de su primer traspies (1648), ha permanecido en una línea descencional, sin recobrarse como gran potencia, es porque alguien lo ha impedido". Lo han impedido la judería, el afrancesamiento, la masonería... y los cien impulsos que colaboran fervorosos porque la presa es buena.

23. Los judíos.

La judería, separada tradicionalmente, recluída en su "getho", ha sido un elemento funestísimo para nuestra España. De la labor destructora de la judería, puede formarse idea recordando lo que significa su actitud en nuestra novela picaresca, bello ejemplo de las armas encubridoras, como el que Papini explica en "Gog". Cuanto allí hay de demoledor es obra judía. Su fondo literario anti-heroico y de protesta social ha sido exaltado recientemente, en forma no dudosa, por Américo Castro. La posición de las figuras de la picaresca de cara a las jerarquías, queda exteriorizada en el caso del *Lazarillo*, en la cuestión de las bulas, etc.

Compárese con lo que se debe a los judíos en otras materias. Léanse Mateo Alemán y Garci Sánchez de Badajoz.

Donde hay una jerarquía hispánica que se pueda destruir, allí está el espíritu del "getho" con su piqueta. Pensemos también en la participación de la judería en la deformación del Santo Tribunal. La Inquisición, Tribunal admirable y Santo, hecho para la defensa de los grandes principios vivificadores de España, y por consecuencia también en derecho contra los judíos, llega a convertirse en instrumento del "getho". Piénsese como síntoma expresivo en la actitud que adopta Felipe II al no querer admitir a los conversos para los cargos supremos de este Oficio. La tesis contraria lleva a la deformación y hay un momento en que la Inquisición combate, al servicio de Francia y de la Judeoría, cuanto puede dar impulso a nuestro espíritu patriótico.

24. Los afrancesados.

La tradición de los afrancesados es tradición de anulamiento de nuestra personalidad histórica. Arranca de la Edad Media, con la reforma cluniacense. Tiende a la rotura de nuestra unidad de pueblo, envenenando el sentido nacional. En el año trágico de 1640, cuando España lucha porque Portugal siga unido a su Corona, es Francia quien apoya la sublevación catalana, y no contenta con desmembrar España, pretende su pulverización y hace posible que Andalucía con el Duque de Medina Sidonia y Aragón con el de Híjar, inicien levantamientos antinacionales. La dinastía borbónica entrega nuestra tradición a los enemigos de la tradición nacional. La imitación de Richelieu, la presión del Rey Sol, el "No hay Pirineos" y en último lugar el afrancesado doceañismo que

traducía las demarcaciones departamentales, influyen poderosamente contra nuestra constitución virreinal de grandes regiones con unidad de mando. El ambiente se ha preparado con tanta eficacia que Villarroel cuenta que

hasta la misma herejía
si es de París es aceptada.

El afrancesamiento viene a ser, por esencia, antiespañol. Aparece así, no como falsamente se ha creído, a partir de 1808, sino mucho antes de imaginarse la invasión francesa. Precisamente el pueblo que se opuso a Napoleón y colaboró con ímpetu a enviar a su país la soldadesca que servía a Bonaparte, conocía ya esta interpretación. En 1746 se hubo de ocupar la Inquisición de ciertos "Mandamientos de España contra los gabachos", interesante pieza propagandística que mereció la hoguera, vencida como estaba entonces la auténtica Inquisición, cuya estructura era puesta ahora al servicio del Monarca extranjero. El afrancesamiento culmina con el tratado de 27 de Julio de 1796, a partir del cual acude a representar en España al Directorio francés un masón destacado.

Los afrancesados, antes y después de 1808, eran los europeizantes y los antitradicionalistas, los que habían perdido la fe en España, los que hicieron posible aquel "Examen de los delitos de infidelidad a la Patria", en el que Reinoso recogía el espíritu de nuestra decadencia.

25. Los masones.

La masonería ha luchado en España contra España desde su misma introducción. No sólo hay que subrayar su actitud con motivo de la guerra americana, sino en toda la historia política del siglo XIX. En 1727 asomaron las primeras

logias; en Cádiz, en Gibraltar, en Madrid en aquella calle ancha de San Bernardo, ésta con el título "Las tres flores de lis". El confesor de Fernando VI decía a los que se ocupaban de la novedad: "No es cosa de burla o bagatela, sino de gravísima importancia". Los duques de Fernán-Núñez y Vistahermosa, el marqués de Mora y otras figuras de la aristocracia de la época visitaban, en Ferney, a Voltaire. A los monarcas franceses les ayudaban las ideas francesas. La masonería colabora con fervor.

26. Voltaire, Rousseau, Smith.

Las ideas francesas encuentran nuevo cauce con la Casa borbónica. Cuando Luis XIV comunicó a su nieto el testamento de Carlos II, le dijo: "Sed buen español, que es vuestra primera obligación, pero acordáos que habéis nacido francés...". Y a menudo se lo hizo fijar en la memoria. Impuso que sus embajadores asistiesen a los Consejos de Felipe V y que las tropas españolas fuesen mandadas por generales franceses. Con tantas complicidades, ¿podremos extrañarnos de la difusión de Voltaire y de la acogida dispensada a Rousseau?

El "Contrato social" condujo a la ruptura de la relación, tan española, de cultura, historia y vida política. No tarda la "Riqueza de las Naciones", de Smith, en darnos ejemplo científico—y exigir aceptación con rito de academia y empaque oficial—a la ruptura de la relación—tan española también—de moral y economía.

Finalmente, frente al principio esencialísimo de la unidad de mando, Montesquieu nos ofreció, por medio de oficiosos valedores, su "Espíritu de las leyes", que separaba lo legislativo de lo judicial.

Por un lado se derrumban los gremios (1783); por otro, toda la intervención del Estado en la vida industrial (1777). Hasta que se consuma la obra "al destruir—como dice Navasal—, en nombre del principio individualista e igualitario, la organización jerárquica".

27. El 18 de Julio, grito de reconquista.

Ha pasado desde entonces ya centuria y media. Y ha sido preciso el 18 de Julio para que el ensimismamiento nos diése un sendero y la voluntad un arma. El 18 de Julio representa—ha dicho Fernández Cuesta, en la celebración del III Año Triunfal—"nada menos que el dar solución durante varias generaciones al problema pavoroso que desde siempre el Mundo tiene planteado". El 18 de Julio "fué—añade—grito de reconquista. Tradicional en cuanto quería empalmar con las auténticas raíces españolas que estaban soterradas, y nuevo en cuanto quería encontrar cauces por donde esas raíces pudieran extenderse".

Así el Movimiento, la Revolución Española, es justamente la resurrección de nuestros elementos tradicionales. Lo que se nota con sólo considerar cuál es el programa del Estado, esos 26 Puntos de la Falange, consagrados por el Decreto 255.

El nuevo Estado hace caducar todas las disensiones, y es un centro de energía elevado por encima de toda desunión, frente a las oposiciones posibles de los estamentos, los grupos, las profesiones o los privilegios. Dentro de la comunidad puede haber formaciones orgánicas, pero no elementos discordantes. Frente al desgarramiento de las clases y los partidos, la Falange pide lo que es nuestra Tradición: la familia, el municipio, el sindicato, la milicia. La exaltación feliz de Isabel

la Católica viene a afirmar ese gran principio de "unidad de pueblo", que era ya multisecular en su época; las reglas pragmáticas firmadas por Fernando e Isabel en 1490 y 1501, están preparadas por las disposiciones de las Cortes reunidas por Juan I, en Guadalajara, el 1390, y por Enrique III, en Madrid, el 1392. La pragmática granadina de los Reyes Católicos exige que no hayan ni se nombren parentelas ni parcialidades "por vía de vandos, ni otro apellido, ni quadrilla" y ordena que "todos ante el Escrivano del Concejo de cada pueblo juren y se partan de qualquier liga, confederación i vandos que tengan hecho". Después caducan las normas y no valen las leyes. Las disposiciones de 1774 son el reconocimiento de la impotencia del Estado para reconstruir lo que no supo mantener.

Con el sentido de comunidad—proclamado por la Falange, con la declaración de un Estado totalitario al servicio de la integridad Patria y la estructuración del mismo sobre los cauces de la familia, el sindicato, el municipio y la milicia, y sancionado por el Caudillo, con su Decreto de Unificación—otro elemento tradicional surge también: es el de interés común, o si queremos, el de "servicio". Significa éste la dimisión de los egoísmos individualistas, y por consiguiente, la supresión de la primacía de la rentabilidad. El capital no interviene en la producción para dar mayor renta, sino para mejorar la condición del mayor número de personas. Volvemos así hacia el sistema de "necesidades cubiertas", con pan y con hogar para todos. Recordemos los fueros y las fazañas; pensemos en las instituciones que descubrimos en los diplomáticos, en el apoyo a los desvalidos. Cuando nace "Auxilio Social" se reivindica la tradición de nuestros tratadistas que fundan en el siglo XVI una verdadera ciencia "de subventionem pauperum", y se hace pensar en la re-

surrección de tantas admirables organizaciones destrozadas por el liberalismo y el arbitrio. Los Puntos 15 y 16 no hacen más que recalcar con espíritu moderno hechos e instituciones de nuestra Edad Media, cuando el derecho al trabajo y la obligación de trabajar constituían realidades protegidas jurídicamente. Baste que subrayemos con la tradición del ruralismo y su régimen de necesidades cubiertas (tan claros en todos los fueros extensos), los Ordenamientos de Menestrales que, precisamente en Valladolid, fueron dados en el año terrible—peste negra—de 1351. Este principio de servicio en la vida social se resume señalando una jerarquía. Una buena pauta nos dieron los Reyes Católicos en la forma de resolver la pugna entre ganadería y agricultura.

Y con el servicio o el interés común y la idea de comunidad o unidad de pueblo, el gran concepto de la Jefatura jerarquizada. Nuestra tradición muestra la unidad del Estado como unidad “en el Jefe”, que es Rex porque rige o Dux porque conduce. Al Jefe corresponde el poder de juzgar y en el juzgar está el gobernar y por juzgar lleva el cetro o bastón con la esfera terráquea. Le corresponde legislar y legisla, y manda sobre el todo territorio, colocando tenentes y “dominus villae” en las ciudades y un conde o vizconde en cada distrito. Suyas son las murallas ciudadanas. Del Rey dependen todos, como hoy del Caudillo. Incluso cara a la Iglesia, el Rey representa a la comunidad de los creyentes. A su lado el Aula Regia es un Consejo nacional. Y todo se escalona del Rey abajo, tras su comitiva o séquito.

Sobre España, *Beneyto*, El beneficio en el derecho medieval español (Rev. gen. de leg. y juris., 1933); *C. García Oviedo*, Las directrices del Nuevo Estado (Sevilla, 1937); *López Ferreiro*, Historia de los fueros municipales de Santiago y su tierra; *Hinojosa*, Estudios sobre la historia del Derecho español (Madrid, 1912);—El elemento germánico en la historia del Derecho español (Madrid, 1916); *M. Sancho Izquierdo*, Vecchio e nuovo corporativismo spagnuolo (Riv. inter. di scienze sociali, 1938); *Marqués de Lozoya*, Historia de las Corporaciones de menestrales en Segovia (1931); *Luis del Valle*, Democracia y jerarquía (Zaragoza, 1937).

El sentido de las reformas fascistas, en *G. Ambrosini*, La riforma elettorale (Milán, 1923); *Panunzio*, Popolo, Nazione, Stato (Florencia, 1933); *Prelot*, L'Etat fasciste (Melanges Carré de Malberg, 1936); *Rabaglietti*, La Cámara dei fasci e delle corporazioni (Bologna, 1937); *Ranelletti*, La rappresentanza nel nuovo ordinamento politico e amministrativo italiano (Riv. dir. pubbl., 1929); *Volpicelli*, Stato rappresentativo e stato corporativo (Nuovi studi di dir, econ, e pol, 1935). Los textos de *Mussolini* en Scritti e Discorsi (Milán, 1934).

Sobre Alemania, *Huber*, Verfassung (1937), y *Meissner u. Keiserberg*, Staat und Verwaltungsrecht im dritten Reichs (1935).

De Turquía da datos, el ex Ministro *Sukru Kaya*, en sus discursos del 5 enero 1937 y 20 febrero 1938.

Sobre Portugal, *M. de Figueiredo*, Principios essenciais do Estado Novo corporativo (Coimbra, 1936).

CAPITULO SEXTO

EL CONCEPTO DE COMUNIDAD NACIONAL

28. El concepto de pueblo.

Advertimos por lo pronto en la serie de los conceptos que chocan con los que eran admitidos por "communis opinio" en la vida política liberal, este de Pueblo como comunidad orgánica nacional. Ya no es Pueblo, como sucedía bajo el Estado liberal, el conjunto de los súbditos construido bajo el apriorismo de la preeminencia de los derechos individuales, cuya consecuencia más destacada era la actividad electoral en la que cada individuo expresaba su opinión sin enlaces directos con la comunidad de que formaba parte. Así el súbdito o el ciudadano avanzaba con olvido de la comunidad, que era realmente el único sujeto. De ese modo el concepto del Pueblo era vago y volátil. Su configuración se hacía depender de la voluntad, hasta el punto de que se podía pertenecer al mismo o abandonarlo.

Frente a esta idea, Pueblo se nos presentaba tradicionalmente como unidad de cultura. Pertenecen a un Pueblo en este sentido quienes son tributarios de su cultura. Y el concepto político arranca de allí, subsidiariamente, para quedar configurado de acuerdo con los principios de unidad y de totalidad. En síntesis se resucita ahora el viejo concepto de comunidad, tan caro a los escolásticos y de tan insigne tradición entre nosotros.

Este concepto es general en los distintos países totalitarios aunque en cada uno tenga, como es lógico, diversos matices y caracteres. Ya en su

libro "Mi lucha", Hitler afirmaba que el Estado es un medio para mantener y fomentar la vida física y espiritual de la comunidad. La comunidad pasa a representar en el Estado Nuevo el papel que el individuo tenía en cuantas construcciones arrancan de la Revolución francesa. Y este concepto es tan importante que de él deriva toda la teoría del Estado. Como nota Huber, de los principios de unidad y totalidad surgen dos trascendentales consecuencias: 1. La exclusividad de la dirección política, y 2. La unidad del poder de mando. El pueblo se relaciona con el Estado de modo que éste viene a ser "una función del pueblo", vehículo de su continuidad histórica. Digamos nación en vez de decir pueblo y veremos cómo se insiste en este concepto en la doctrina mussoliana.

El Pueblo hecho Estado a través del Movimiento, es el motivo que repiten los textos estatutarios de la Falange. Y la unidad y la totalidad, la autoridad y la disciplina, son los conceptos que recoge el emblema del Partido español que el nuevo Régimen incorpora a los símbolos de la unidad nacional. La bandera y el escudo representan esa unidad del pueblo. Y precisamente para mantener el principio de comunidad, a la bandera y al escudo se les unen los símbolos del Partido que ha roto la antigua división. Ya nos hemos referido al ejemplo de España, con la incorporación de las flechas y el yugo a la heráldica estatal. Italia decretó emblema del Estado el "fascio lictorio" o haz de vergas de los lictores por Decreto de 17 de diciembre de 1926 (Ley de 9 junio 1927) y lo introdujo en el escudo nacional por Decreto de 11 de abril de 1929. Alemania restauró—como España—su bandera anterior a la República, pero añadió a la misma la cruz gamada (Decreto de 15 septiembre 1935), emblema que pasa a ser del Estado por Decreto de 5 de noviembre de 1935 y figura en las condecoraciones y uniformes. España ha

hecho un uso semejante de los símbolos del Movimiento, estableciendo la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas (1 de octubre 1937) y llevando las flechas y el yugo a los uniformes de Marina (Decreto de 27 de mayo de 1938).

[Insistimos: la idea de comunidad nacional o "unidad de pueblo" reaparece en las normas que rigen la Falange. Esta organización—dice el Decreto 255 (art. 1)—"tiene la misión principal de comunicar al Estado el aliento del pueblo y de llevar a éste el pensamiento de aquél a través de las virtudes politicomorales de servicio, jerarquía y hermandad". Por su parte, los Estatutos definen a la Falange como "disciplina por la que el pueblo, unido y en orden, asciende al Estado y el Estado infunde al pueblo las virtudes de Servicio, Hermandad y Jerarquía".

El Pueblo "unido y en orden", es precisamente el viejo concepto de Pueblo como comunidad, frente al pueblo disgregado y atómico del liberalismo. El concepto se afirma más con la consideración de los Puntos de Falange, norma del Estado español. He aquí algunos textos decisivos:

"Nuestro Estado será un instrumento totalitario al servicio de la integridad patria. Todos los españoles participarán en él a través de su función familiar, municipal y sindical. Nadie participará al través de los partidos políticos. Se abolirá implacablemente el sistema de los partidos con todas sus consecuencias: sufragio inorgánico, representación por bandos en lucha y Parlamento de tipo conocido" (Punto 6). "Concebimos a España en lo económico como un gigantesco sindicato de productores. Organizaremos corporativamente a la sociedad española mediante un sistema de sindicatos verticales por ramos de producción, al servicio de la integridad económica nacional" (Punto 9). "...Orientaremos el ímpetu de las clases laboriosas, hoy descarriadas por el marxis-

mo, en el sentido de exigir su participación directa en la gran tarea del Estado nacional" (Punto 10). "...Nuestro régimen hará radicalmente imposible la lucha de clases, por cuanto todos los que cooperan a la producción constituyen en él una totalidad orgánica" (Punto 11).

Y por si estas afirmaciones no bastaran, otros pasajes señalan una "tarea colectiva" de la comunidad nacional. Así, el Punto 1: "Creemos en la suprema realidad de España. Fortalecerla, elevarla y engrandecerla es la apremiante tarea colectiva de todos los españoles..." Concepto éste que recalca el Fuero del Trabajo al referirlo al aspecto económico: "La producción nacional constituye una unidad económica al servicio de la Patria. Es deber de todo español mejorarla e incrementarla" (Fuero, XI, 1.)

Todavía más. En los Puntos esta unidad de pueblo toma un carácter ejemplar, reiteradamente. Así, en el Punto 2: "España es una unidad de destino en lo universal. Toda conspiración contra esa unidad es repulsiva. Todo separatismo es un crimen que no perdonaremos". Y recordando la actividad separatista de determinados jerarcas eclesiásticos y miembros de la clerecía en ciertas regiones—y refiriéndose al Concordato—, el Punto 25, en su párrafo 2, dice "sin que se admita intromisión o actividad alguna que menoscabe la dignidad del Estado o la integridad nacional". Esta supeditación del individuo al pueblo, este deber de servicio frente a la comunidad, lo acentúa bellamente el Punto 7, cuando, en su párrafo 3, declara: "A nadie le será lícito usar su libertad contra la unidad, la fortaleza y la libertad de la Patria. Una disciplina rigurosa impedirá todo intento dirigido a separar a los españoles o a moverlos contra el destino de la Patria".

29. La tradición española de la "unidad del pueblo".

A través de los Puntos de la Falange, la Tradición vuelve... En nuestro derecho histórico asoman vigorosos esos mismos conceptos que acabamos de mencionar. El de "unidad de pueblo" se recalca, juntamente con esa actitud que impide los partidos políticos y los bandos en lucha. La familia, el municipio y el sindicato—exaltados en el Punto 6 como bases del Estado totalitario, instrumento de la Patria—, así como el "sentido militar" a que alude el Punto 4, aparecen en nuestra Tradición.

Si dejamos a un lado las adiciones y enmiendas ochocentistas y separamos cuanto ya entonces era artificial, encontramos en la vida jurídica hispánica, como verdadera constante, la idea de "unidad de pueblo", es decir, el Pueblo "unido y en orden", frente a cualquier secesión. El individuo participa principalmente, como quiere Falange, a través de su función en la familia, en el sindicato y en el municipio, y en tanto que actor, es decir, milite.

Recordemos que un ciudadano no era considerado vecino, esto es, participe de la vida municipal, más que en cuanto tuviese casa abierta con mujer e hijos y caballo y armas. Esta exigencia fué muy vigorosa en toda la legislación nacional, y encuentra especialísimo relieve en los fueros de Castilla y León, y en Aragón, donde se han mencionado casos concretos, como el de los clérigos de Orihuela, sobre los que, al consultarse al Monarca la posibilidad de obtener cargos concejiles sin estar casados ni poseer caballo y armas, Alfonso III negó, incluso para los tonsurados, esa hipótesis.

La familia era la base fundamental de la constitución social española. Hinojosa se mostró sor-

prendido, estudiando el Poema del Cid, ante la fuerza de cohesión que en él muestra la familia. "Vése—dice—a los miembros de ésta unidos en un solo pensamiento y una misma acción, tomando como propios los asuntos y sobre todo las ofensas de sus parientes, asistiéndoles constantemente con sus consejos y dispuestos a vengar las injurias que se les han inferido." El sentimiento de la solidaridad familiar, de enérgica raíz germánica, queda tan fuertemente impreso, que Hinojosa no encuentra otra institución a la que pueda parangonarse, a no ser—dice—la solidaridad vecinal.

En efecto, el municipio constituía el segundo gran círculo de vida. Encontró entre nosotros un arraigo poderoso, al unirse la idea germánica del "mallus" con la tradición romana de una estructura férrea. Los "rustici", que acuden al "medianado" para resolver sus cuestiones y ocuparse de sus comunes intereses, se agrupaban cada domingo, después de la Misa Mayor, dando base a la organización medieval de los Municipios. Grande monumento del esfuerzo plebeyo, éstos surgen, con sus convulsiones renovadoras, cuando la transformación de la vida pública se apoya en las realidades y los muros de la ciudad se construyen de nuevo. Como en toda la Europa latina, surcada a fondo por el arado romano, revuelta luego por la espada germánica, también en España hay una época "municipal". Bien que ya antes entre nosotros la unidad de pueblo consiguiera una exteriorización extraordinaria gracias al concejo abierto, donde todos los vecinos participan.

El sindicato habrá de contar con el precedente gremial. De cara a la producción, la idea de unidad de pueblo se encuentra reciamente a través de las cofradías de artesanos. La ciudad facilita esta organización, porque la reunión de artesanos

en parroquias, barrios y calles hace sentir la fuerza de cohesión de quienes ganan el pan con el mismo trabajo de sus manos. Ocurre justamente ésto cuando se levantan las Catedrales. Las corporaciones artesanas crecen a medida que las torres diocesanas desafían al cielo. Nuestra historia de Santiago de Compostela deja ver claramente este enlace. Altos y bajos, los trabajadores de las manos y los del cerebro se reúnen gremialmente, manteniendo así el interés de los productores, que la organización estatal tutela cuando no va contra el interés común. Sólo se impide su desarrollo en lugares en que el feudalismo ha arraigado: buen ejemplo el del Fuero de Sahagún, en 1255, en donde la lucha con los monjes tomó—caso raro en España—sangrientos caracteres. Los gremios son en todo lugar vínculo de ayuda. Si empezaron así, su origen está dignificado. De todos modos este matiz no se pierde nunca. Es ejemplar el estatuto de la cofradía de San Miguel de Soria (1302): “E que nos ayuntemos todos los cofrades una vez en el anno par fazer caridat”. Este ambiente cooperaba a dar realidad a la idea de comunidad nacional, partiendo de la comunidad gremial. Degeneran con el capitalismo y cuando el interés del grupo quiere dominar al interés común. Así no es raro que avanzado el siglo XVI, les veamos pedir que se prohíba la entrada de productos de fuera, so pretexto de daño general, pero con el fundamento exclusivo de la mengua de sus provechos particulares.

Y en cuanto al sentido militar, la milicia fué en la España de la Tradición el elemento poderoso que ayudaba a sentir el Estado. A veces existía entre el milite y el Poder público un vínculo concreto, y se forjó la figura del “caballero con préstamo” que llega hasta el Ordenamiento de Alcalá. Los fueros dan siempre noticias de tales milites

había sido rota por el liberalismo la unidad de pueblo. La unificación siguió su marcha buscando la homogeneización de los conductores del nuevo Estado y bien pronto los partidos afines, cuya actuación había sido suspendida a raíz del Alzamiento para mantenerlos como milicias, se incorporan al Movimiento de Falange, a través de la Comunión Tradicionalista y de aquellas organizaciones como Renovación y Acción Española, que fueron asimiladas en la práctica a la Falange y al Requeté.

31. La idea de comunidad nacional en el fascismo.

El concepto que recogemos aquí es común a los países totalitarios. Las palabras de Mussolini lo manejan a menudo, unas veces hablando de Nación y otras de Comunidad popular. Su alocución al pueblo de Roma, el 28 de Octubre de 1926, recuerda el enterramiento del viejo Estado de sociedad nacional disociada y hace ver el carácter unido del Pueblo que quiere ser fascista. "Hemos enterrado—dice—el viejo Estado demócrata, liberal, agnóstico y paralítico; el viejo Estado que en obsequio a los inmortales principios, dejó que la lucha de clases se convirtiera en catástrofe social. Para sustituir a este viejo Estado, que hemos enterrado con funerales de tercera, hemos creado el Estado corporativo y fascista; el Estado—notemos bien—*de la sociedad nacional*; el Estado que recoge y controla, armoniza y temple los intereses de *todas las clases sociales*, que se ven así tuteladas por igual. Y mientras antes, durante la época liberal, las masas trabajadoras miraban al Estado con desconfianza, estaban fuera y contra él, y lo consideraban su eterno enemigo, hoy no hay italiano que trabaje que no busque su puesto en las corporaciones, en las federaciones, que no

quiera ser una molécula viva de este inmenso organismo". En el famoso discurso de 14 de Noviembre de 1933, ante el Consejo Nacional de las Corporaciones, insistía en esta tesis: "Nuestro Estado es un Estado orgánico, humano, que quiere adherir a la realidad de la vida". Cuatro meses más tarde, el 18 de Marzo de 1934, ante la II Asamblea Quinquenal, unía de nuevo Estado y Pueblo en una verdadera simbiosis. "Se va—afirmaba—hacia formas nuevas de civilización, tanto en lo político como en lo económico. El Estado recaba sus derechos y su puesto como intérprete único y supremo de las necesidades de la sociedad nacional. *El pueblo es el cuerpo del Estado y el Estado es el espíritu del Pueblo*. En el concepto fascista—terminaba diciendo—, *el pueblo es el Estado y el Estado es Pueblo*". Y declaraba que esta unión era posible merced a dos nuevas instituciones: la Corporación y el Partido. "Los instrumentos que permiten esta identificación son el Partido y la Corporación. El Partido es hoy el instrumento formidable y al propio tiempo extremadamente capilar que integra al pueblo en la vida política general del Estado; la Corporación es el instituto por el cual penetra en el Estado el mundo de la economía que hasta ahora era extraño y desordenado".

Así esta tesis se enlaza a la posición de quienes estiman necesario impedir que nuevos centros de ordenación jurídica salgan fuera del Estado. El Estado ha de actuar en perpetuo dinamismo y desarrollando una asimilación continua de elementos. Y eso es lo que hace el Partido; y lo que apoya la Corporación.

32. La "unidad de pueblo" en el nacionalsocialismo.

La idea de comunidad nacional es, asimismo, exaltada reiteradamente por la doctrina Nacional-

socialista. Y su Caudillo ha subrayado como tarea propia la de fomentar la unificación, especialmente frente a los partidos, las clases y la concepción federalista. En su discurso del 20 de Febrero de 1938, ha dicho: "Mientras Bismarck se afanaba en crear un Imperio con los grupos étnicos y los pequeños Estados alemanes, el pueblo que era soporte del Estado se desmembraba en clases..."

Una de las primeras medidas del Nacionalsocialismo en el Poder, fué la supresión de los sindicatos antinacional y los partidos de ese mismo matiz. Más tarde se unificaron los sindicatos en el Frente del Trabajo alemán y los partidos en el Nacionalsocialista, proclamado único. Recordemos la ley de 14 de Julio de 1933, contra la formación de partidos y la ley de 13 de Octubre del mismo año, para garantía de la paz legal. Tras ellas cae—nota Schmitt—todo el mundo ideal liberaldemocrático. No existen ya formaciones distintas de partidos, ni libertades políticas disociadoras. Se distingue al amigo del enemigo. Ha terminado aquella opción de masas entre cinco o seis programas, opción que rompía al pueblo alemán en otros tantos partidos incompatibles. El Estado de Partido único ha superado el peligro de toda posible ruptura pluralista.

Para unificar, la comunidad nacional alemana empieza dándose una definición, y lo hace con referencia al concepto de raza. Ya el Programa del Partido, en su Punto 4, nos lo recuerda: "Solamente puede ser ciudadano quien es miembro de la comunidad. No puede ser miembro de la comunidad más que quien lleva sangre alemana..." Y una ley, la de 15 de Septiembre de 1935, desarrolla este Punto, negando que los judíos puedan ser miembros de la comunidad nacional.

El pueblo así formado participa en la vida política, en tanto que comunidad no como multitud de individuos aislados. La vieja elección se trans-

forma en una respuesta del pueblo al llamamiento que lanza la dirección política del Estado. El Gobierno del Reich reconoce la voluntad de la comunidad nacional como decisiva y se considera vinculado a ella. Las elecciones que tienen lugar en la Alemania Nacionalsocialista son parte integrante de grandes plebiscitos en los cuales la comunidad formada por el pueblo unido toma posición de cara a la política del Gobierno.

33. El "popularismo" kemalista

Es característica muy destacada del nuevo régimen turco y constituye uno de los seis principios del Partido, el "popularismo". Este, dicen los textos ortodoxos, es "la condición primera para hacer que nuestro país se salve y viva independiente". Lo definen como "sistema que procede del pueblo y funciona con él", en el sentido de que el país ha de ser gobernado por la comunidad del pueblo. Va contra los privilegios individualistas y clasistas, y mantiene la igualdad nacional de los ciudadanos.

El popularismo turco exalta el hecho de que la nación turca haya sabido crear un Estado nuevo, después de habérsele suprimido su existencia política. Tal apoyo del pueblo hacia el Jefe trae un vivo enlace entre el Conductor y la comunidad.

Aspecto interesante del popularismo es la actividad cultural que desarrolla: obras jurídicas, congresos anuales de los Hogares del Partido, asambleas bienales en las provincias, gran congreso cuadrienal, etc. En su discurso del 20 de febrero de 1938, el Ministro del Interior y Secretario general del Partido, puso de relieve la labor de las Casas de Cultura Popular, creadas en 1932, que se esfuerzan en la divulgación de los conocimientos humanos. En 1938 más de cien mil miembros de estas organizaciones participaban activamente en una tarea tan importante.

Sobre los antecedentes históricos españoles; *Beneyto*, Notas sobre el origen de los usos comunales (Anuario histórico der., 1933)—Peripécia histórica del partidismo (FE, 1938); *Díez Canseco*, Notas sobre el fuero de León (*Anuario de his. del derecho esp. I*, 1924); *Hinojosa*, Estudios sobre la historia del derecho español (Madrid 1912); *López Ferreiro*, Fueros municipales de Santiago y su tierra; *Klein*, The Mesta (Harward, 1926); *García Valdeavellano*, El mercado (*An. his. de recho español VI*, 1932); *Sánchez Albornoz*, La potestad real y los señoríos en Asturias, León y Castilla (*Rev. Archivos*, 1914)—Las behetrías (*An. hist. der. esp. IV*, 1928); *Lafuente*, Estudios sobre la historia y el derecho de Aragón. Algunas referencias actuales en *C. García Oviedo*, Las directrices del Nuevo Estado (Sevilla, 1937); *Aurelio Joaniquet*, Calvo Sotelo (Santander, 1939); *José A. Primo de Rivera*, Discursos.

Sobre la unidad de mando en el régimen fascista, *Betti*, Sulla base giuridica del potere regolamentare (*Riv. dir. pubblico* 1927); *Bodda*, La Corona; *Del Vecchio*, El Nuevo Estado y sus bases jurídicas, (Valladolid, 1939); *De Valles*, Teoría giuridica della organizzazione dello Stato (Padua, 1931); *Liuzzi*, Sui caratteri fondamentali del diritto pubblico italiano (*Foro Amministrativo*, 1929); *Michels*, Corso di sociologia (1927); *Mortati*, L'ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano (Roma, 1931); *A. Origone*, L'estensione della competenza legislativa del Governo nello Stato moderno (Roma, 1935); *Ranelletti*, La potestà legislativa del Governo (*Riv. dir. publ.* 1926);—Istituzioni di dir. pubblico; *A. Rocco*, La trasformazione dello Stato (Roma, 1927); *L. Ragnisco*, La legge 31 gennaio 1926 ed il Consiglio di Stato

(Padua, 1930); *Sinagra*, La potestà normativa del Poere esecutivo (Roma, 1931); *Santi Romano*, Corso di diritto costituzionale (1931); *Vacchelli*, Sulla facoltà del Potere esecutivo di emanare norme giuridiche (*Riv. dir. publ.* 1926).

La idea alemana de la jefatura jerarquizada puede documentarse en *Becker*, Führungsordnung und Hierarchie (1937); *Hoehn*, Das Führerprinzip in der Verwaltung Deutschlands;— Das Gesetz als Akt der Führung (*Deutsches Recht*, 1934); *Huber*, Verfassung (1932); *Schmitt*, Staat, Bewegung, Volk. (1934); *Sembritzky*, Die Organisationsgewalt nach Reichsrecht (1934); *Richter*, Die Organisationsgewalt (1926); *J. Weidemann*, Führertum in der Verwaltung (1936).

Sobre el kemalismo, *S. Tongas*, Atatürk et le vrai visage de la Turquie moderne (Paris, 1937); *E. Schopen*, Die neue Türkei (Leipzig, 1938); *Herbert Melsig*, Kemal Atatürk (Frankfurt, 1938).

Sobre Portugal, la Constitución de 1938; *M. de Figueiredo*, Principios essenciais do Estado Novo corporativo (Coimbra, 1936); *Anton Mayer*, Portugal und sein Weg zum autoritären Staat (Leipzig, 1939); *G. de Reynold*, Portugal (Paris, 1936).

CAPITULO SEPTIMO

UNIDAD DE MANDO

34. La unidad de mando en el nuevo Estado español.

El principio de la unidad de mando, viejo concepto que fluye de nuevo a la vida jurídica estatal, no es otra cosa si no el más auténtico sentido del concepto de "gobierno". Gobernar comprende en primer término el mandato y no puede suponer la separación de lo legislativo, como pretendió el individualismo liberalista a través de la construcción del Parlamento, pues la ley no es más que un mandato jurídico, precisamente el más claro acto de mando. Panunzio resalta el hecho de que "iussum" no fué nunca, en la historia jurídica, el simple y puro ejecutar. Gobierno es así vocablo vigoroso que expresa la unidad del poder político soberano. Y la unidad le es tan esencial que hasta en la voz común se habla de desgobierno, no cuando se gobierna mal, sino cuando se divide la acción de tal forma que resulta impalpable y difusa.

El nuevo Estado español no podía desconocer la tradición y la presencia de este concepto de unidad de mando. Lo deja ver así tanto en la doctrina como en las realizaciones.

Ya uno de los puntos programáticos, el 4, en su segundo párrafo, se refiere a la necesidad de vigorizar el Ejército y darle la dignidad debida, y "haremos—añade—a su imagen, que un sentido militar de la vida informe toda la existencia española". Un sentido militar de la vida significa

una unidad y una disciplina. Pero es más. En sus discursos habló José Antonio de "una mente y un brazo", de una jefatura, de un conductor. La doctrina encontró cauce inmediato, porque la milicia resucitó a España y todos los españoles tuvimos que ser milites para enfrentarnos con la barbarie roja. Y en la milicia alzóse una figura de Caudillo que ha sabido ser, desde el primer momento, la representación de aquel Jefe en quien pensaba la Falange.

El problema de la jefatura no tiene, sin embargo, en la doctrina, normas concretas, y no las tiene porque tal problema no puede ser sobrevalorado en una concepción totalitaria, pues ésta lleva implícita la idea del Jefe natural. Jefes naturales fueron, otrora, los Reyes de España. En el ciclo creativo de la monarquía el jefe natural es el primer rey. El sentido director se pierde más tarde y ya no queda nada cuando el rey se entrega a la Corte y a las Cortes luego. Este ciclo puede ser iniciado solamente cuando el Régimen haya abandonado sus andadores. Así lo declaró el Caudillo mismo en el Preámbulo al Decreto 255. "Cuando hayamos dado fin a esta ingente tarea de reconstrucción espiritual y material, si las necesidades patrias y los sentimientos del país así lo aconsejaren, no cerramos el horizonte a la posibilidad de instaurar en la Nación el régimen secular que forjó su unidad y su grandeza histórica." Nótese que la unidad de mando, merced a la monarquía, no se incluye en la doctrina vigente más que supeditada a las necesidades y a los sentimientos del país, y que no va a restaurarse sino a "instaurar". Franco, conductor en la guerra ha de ser conductor en la paz, salvo su propia determinación y asociando la institución que hizo posible antiguamente la unidad de mando al régimen que lleva esa unidad como exigencia inherente, de tal modo que no se conciba una deformación.

En la vigente estructura constitucional la unidad

de mando aparece conseguida, plenamente, a través de la figura del Caudillo. En él se enlazan las cuatro funciones esenciales que mantienen el control total de una Nación, jefatura del Estado, jefatura del Ejército, jefatura del Partido y jefatura del Gobierno.

Como Jefe del Estado el Caudillo español se encontró elevado el 29 de septiembre de 1936, a la cabeza de la organización estatal, dando unidad a todos los poderes que había concentrado, en forma colegiada, la Junta de Defensa. Al mismo tiempo aquella Ley cargaba sobre los hombros y sobre el cerebro de Franco la tarea de dirigir al Ejército de tierra, mar y aire, designándosele Generalísimo y encuadrándole con los poderes propios del general en jefe de Ejército en campaña. A estas dos jefaturas se une la del Movimiento en virtud del Decreto de 19 abril 1937, que integra en la Falange a las fuerzas afines creando la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, cuyo jefe se proclama el mismo Caudillo. Finalmente, al establecerse un Gobierno regular por la ley de 30 enero 1938, Franco acoge también la cuarta jefatura, la del Gobierno, y la acoge precisamente en forma tal que configura exactamente la institución más expresiva de la unidad de mando que caracteriza al Nuevo Régimen. La ley referida declara en su artículo 16 que "la Presidencia queda vinculada al Jefe del Estado", lo que equivale a instaurar un sistema de enlace real—no personal—entre ambas jefaturas.

En cuanto jefe del Gobierno el Caudillo español encuentra señaladas sus facultades en el artículo 17 de la ley citada, en el terreno tan importante de la legislación. El concepto de que gobernar no es solo ejecutar, sino mandar, legislar principalmente aparece aquí plenamente reconocido: "Al Jefe del Estado, que asumió todos los Poderes por virtud del Decreto de la Junta de Defensa Nacional de 29 de septiembre de 1936, correspon-

de la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general. Las disposiciones y resoluciones del Jefe del Estado, previa deliberación del Gobierno y a propuesta del Ministro del ramo, adoptarán la forma de Leyes cuando afecten a la estructura orgánica del Estado o constituyan las normas principales del ordenamiento jurídico del país..."

Falta sin embargo a este respecto la aplicación del concepto de jerarquía, que es tributario del de jefatura, concretamente en el ejemplo del Consejo de Ministros. Este ¿puede seguir funcionando sobre las figuras del derecho político liberal? ¿No es obligado afirmar que los Ministros dejan de intervenir en los Consejos como representantes políticos? En todo caso ¿cabe admitir que se resuelvan problemas por votación, habiendo un jefe? La ausencia del concepto de jerarquía puede llegar a convertir, por simple fuerza mecánica, en gobierno de coalición el gabinete de Partido único.

35. La tradición española de la unidad de mando.

Nuestra estructura tradicional fué precisamente de jefatura jerarquizada. En el momento de iniciarse la osificación constitucional de la Reconquista, el Estado era justamente el Rey, que no solo representaba el símbolo sino la raíz de la unidad del Estado. Y a pesar de las limitaciones propias de una organización embrionaria, el lugar de Jefe le correspondía al Rey por sus particulares privilegios. Algunos de estos derivaban de su condición de jefe del Ejército, Dux o Conductor de las huestes reunidas para las empresas bélicas. El poder de convocar al Ejército, adunarlo y dirigirlo: la reunión y la dirección frecuentes, hacían ver como consustanciales las dos figuras jurídicas de Jefe

del Ejército y Jefe del Estado. Los textos nos hablan—"sive Reges sive Duces", término que como notaba Latuente comentando a Zurita, "nunca se han traducido por duques sino por caudillos."

El poder judicial simbolizado en el cetro es producto de una elaboración más lenta, pero aparece ya en el Fuero de León, de 1020, incluso con la posibilidad de una designación de jueces hecha por el Rey mismo y válida para toda la extensión de su reino. Más tarde ampliase la concepción por la idea de "mayoría de justicia", desarrollada de modo singular. En el Poema del Cid el Rey se presenta ejerciendo la función de juez, una—dice Hinojosa—de las "más esenciales y características de la dignidad real, así en el período visigótico, como en León y Castilla". Su competencia era ilimitada. Podía avocar a sí el conocimiento de todo linaje de asuntos, pero algunos, por su importancia o por la indole de los interesados, le eran reservados exclusivamente: como las contendas civiles entre nobles y los casos de ripto. La autoridad del rey en este aspecto es tal, que incurrir en su ira puede ocasionar el destierro inmediato. Y así es justamente como aparece el Monarca en el famoso Poema del Cid.

La actividad legislativa del rey nace tardía; en Castilla durante el siglo XII, y su desenvolvimiento se orienta sobre figuras de derecho privado: trata-se, en el fondo, de contratos en los cuales la suscripción regia no es más que una garantía o confirmación especial. Puede decirse que una ley empieza siendo un diploma. Bien que este mismo tardío nacimiento le dá mayor complejidad y poder. Buena prueba de ello es el empeño que ponían y la prisa que se daban las ciudades para obtener la confirmación de sus Fueros cada vez que se coronaba un nuevo soberano. Esto es muestra evidente de que reconocían en el rey no sólo el poder de darles leyes, sino el de derogar y modificar a su arbitrio la legislación anterior.

Hay que considerar por otro lado lo que significa el poder del rey sobre los terrenos desiertos, que asume importancia enorme aun cuando no llegue a constituir, entre nosotros, un "Bodenregal". La repoblación hecha en virtud de cuerno y alben-de de rey, pone en primer término esta actitud patrimonial del jefe del Estado, sobre la que se forja más tarde el desenvolvimiento de la teoría romana del poder eminente. El poder del rey sobre los territorios desiertos aunque no llegase a ser probablemente un dominio superior sobre montañas, aguas y bosques era, con vigencia incontenible un poder propio y especial. Para formarse idea de la importancia de estos conceptos se debe pensar en el desarrollo del privilegio de pacer por todo el reino, privilegio propio de la cabaña regia que informa como ficción jurídica la organización de la Meseta castellana.

Pero lo que más importa aquí es subrayar de qué modo la monarquía tradicional representaba el concepto, que ahora renace, de unidad de mando. Lo haremos recogiendo la actitud del rey frente a los territorios, las clases, los nacionales, los no nacionales y la Iglesia.

La unidad del Estado frente a los organismos territoriales es representada por el rey en tanto que aquel domina la misma demarcación, aun en aquellos momentos en los cuales es más intensa la tendencia disgregadora. El monarca mandaba a un "comes" como jefe de una circunscripción y "tenentes" y "dominus villæ", según los clásicos estudios de Herculano, a la cabeza de las ciudades. Todo el poder correspondía al rey y quienes gobernaban estas circunscripciones lo hacían "por delegación" del Monarca. Los "comes" eran, así, funcionarios, y no llegaron a constituir título hereditario ni aun en la época del Poema del Cid, pues allí éste no llama condes a los infantes de Carrión, aunque eran hijos de conde. Esta supremacía del rey, absoluta y sin límites, invadía las esferas po-

litica y administrativa. La inmunidad que da base al señorío y al feudo, el coto, o territorio exento, apenas se inicia en Asturias y León tardíamente. Por otro lado, el estado permanente de guerra determinaba una selección de soberanos capaces, y por eso la competencia central no fué desarticulada, hasta el punto de que cuando se llega a conceder inmunidad no se hace más que atribuir a un "comes" la competencia de los delegados regios. Y lo mismo puede decirse de las ciudades. Estas, que en el resto de Europa consiguen prepotencia política, no llegan a imprimir tal empuje entre nosotros. Aún en la época de las hermandades de municipios, cuando los concejos de Castilla y los del Norte, desde Laredo a Fuenterrabía, hacen cartas de hermandad, bajo Fernando IV (1295), se determina siempre: "que guardemos a nuestro sennor el rey don Fernando todos sus derechos e todo su sennorio bien e complidamente". Además, nunca perdió el rey sobre las ciudades, y en relación con los intereses de la defensa militar, un cierto dominio sobre los muros y las torres. El rey designaba a ese fin, especiales "tenentes". Tal es el caso de León, donde como notó Canseco, el "tenente" tenía pretensiones incluso sobre las truchas que se cogían en el río. No es tan claro el problema del dominio sobre el suelo urbano. Mientras en Palencia del concejo expresaba sus pretensiones ante el Obispo, en el reino de Valencia, Jaime I el Conquistador, en 1259, concede a algunos municipios los muros, las barbacanas, las calles y las plazas.

Frente a las clases, el rey era la unidad que hacía posible una síntesis en una sociedad tan compleja. Es difícil percatarse de una disociación tan amplia, bajo un mando tan recto. La nobleza con sus pretensiones y sus privilegios; el clero con su situación jurídica excepcional; aquella clase nueva de los caballeros, elevada sobre reglas en gran parte calcadas del régimen nobiliario; el artesano, desarrollado al mismo tiempo que crecía la

urbanización. Abajo, en la escala social, los campesinos ligados a la tierra, los siervos, los esclavos...

La unidad la daba la jefatura. Desde el individuo al rey no había intermediarios políticos. Las grandes Ordenes militares venían a representar el papel de nuestros partidos únicos modernos, en tanto que otras organizaciones nobiliarias, eclesiásticas y ciudadanas completaban su cometido. Y ninguna liga o monopolio podía entrecruzarse para disorciar y dividir. Tales intentos eran cortados radicalmente, y la ley dada en 1390 por las Cortes de Guadalajara, llega a la Nueva Recopilación Hay que tener en cuenta la unión entre disidencia política y herejía, según el concepto de las Partidas, pasaje VIII, 26, 1., en el que se considera que el hereje "daña a la tierra", es decir, al Estado.

Frente a los no-nacionales, el Monarca era el único vínculo. En nuestro Estado histórico, fuera de los grupos nacionales que le caracterizaban y hasta que no se consiguió—aunque fué a medias—la unidad de raza y religión, existían judíos y moros en barrios separados llamados juderías y morerías. Tales gentes se sometían al "mundium" o protección del rey, que era una institución resultante de la evolución del "fiscus iudaicus" romano bajo el influjo de la conciencia germánica. Estos grupos vivían aparte en tales aljamas, dentro de un régimen administrativo especial, que constituía una peculiaridad del municipio.

El rey es también jefe de cara a la Iglesia. En la organización eclesiástica, el rey representaba la unidad de la nación creyente. La tendencia a construir en este aspecto una organización vicarial, refleja de modo vigoroso la importancia adquirida por esas ideas. Durante el periodo de formación de España, la religión fué un vínculo preponderante, y la Iglesia hubo de convertirse en

organismo colaborador en la empresa monárquica de hacer tangible la idea del Estado. Más tarde, la actitud de Felipe II, dos veces excomulgado, exterioriza la fuerza de tales conceptos. Los privilegios de la Iglesia de Indias hacen de Madrid el Vaticano de América, con lo que se dota de elementos dogmáticos a los proyectos de Carlos III, por más que aquí se trate preferentemente de una deformación. El Estado tradicional español fué así un Estado-Iglesia, ese Estado misional de que habló el Caudillo el 18 de Julio de 1938. Buena prueba de ello es la Inquisición, admirable tribunal de defensa de la unidad, y con ella de los grandes principios nacionales, tribunal que hubiera sido ejemplar si no se hubiese adulterado y desfigurado. La colaboración entre los dos poderes fué fecunda y la unión de Estado e Iglesia aparecía clarísima hasta en los detalles de menor trascendencia: los edificios del culto eran propiedad del Estado, las campanas que servían para llamar a los fieles se utilizaban también para señalar el término de la jornada de trabajo, y el cura y el sacristán los designaban los concejos...

36. La división de poderes y la unidad de mando.

Esta vieja idea de la unidad de mando fué rota en el 1700 por la tesis de la división de poderes, pero había perdido ya eficacia por el desgaste de las combinaciones cortesanas. De todas formas, el enlace entre ambas doctrinas se encuentra ahora de nuevo al resurgir la unidad de mando. Por doquier el Nuevo Estado es crisis de la idea divulgada por Montesquieu.

El fascismo, dice Rocco, restituye al Estado el pleno ejercicio de su soberanía; es decir, reafirma el Poder ejecutivo. A base de éste se consigue la unidad. El ejecutivo posee, de nuevo, facultades

legislativas y encuentra su máxima expresión en la suprema autoridad de que se inviste al Jefe, verdadero conductor de la nave el Estado.

Cuando el Ministro Rocco, en la Cámara fascista, exponía los proyectos que iban a suprimir en Italia las consecuencias de la deformación del régimen originario inglés, refiriéndose a la división de poderes, expresaba de qué modo se había perturbado su único posible sentido. Este—decía—“no es un principio democrático, sino un principio de desarrollo del Estado, que, como toda organización, a medida que se desarrolla y perfecciona, se determina en sus órganos”. La especificación es ley natural del progreso de todos los organismos, y asimismo ley del progreso del Estado, pero no debe deformarse el concepto—como se había conseguido, llegando incluso a enfrentar los diversos poderes—pues según añadía Rocco, “se trata siempre de órganos y de partes de un mismo complejo”. Puede hablarse de división de poderes sólo en el sentido de división de trabajo, pero nunca en el de parcelación del Poder. La teoría surgió para impedir el renacimiento del Estado absolutista, pero tuvo consecuencias inesperadas. En la divergencia es preciso decidir y quien decide ha de ser el juez. Habrá que establecer, por consiguiente, en la práctica, la preeminencia del poder judicial; pero al imponerse el Parlamento, llegando al extremo de caracterizar a un tipo de Estado, la pugna entre unos y otros hubo de traer verdaderas catástrofes. El proceso Braun-Severing fué, vísperas de implantarse la unidad de mando hitlerista, un ejemplo del cauce que se iba abriendo. Por otro lado, el poder judicial vino a ser expresión de la reacción individualista contra pretendidos abusos y exorbitancias del Estado, y hubo que idear nuevos procedimientos y tribunales.

Frente a esta tesis, que solamente es válida con las restricciones aludidas, que rebajan toda signi-

ficación, hay que exaltar al Gobierno a una función no ya coordinadora, como quería Constant, sino propiamente gubernativa. Esta es la que corresponde al poder político y la que muestra la preeminencia entre todas las funciones. No hay ya división de poderes, sino "especificación de funciones", y entre ellas la ejecutiva deja de ser ejecutora para ser directora y dar realidad al símil expuesto por Ranalletti: "el Gobierno es la cabeza, la administración los brazos".

Schmitt ha recordado que la teoría de la división de poderes tenía el sentido político de dividir el poder estatal para someterlo a la sociedad extraestatal. La división, sin embargo, cumplía una función de coparticipación de la soberanía que habrá de ser, más que anulada, superada. En este sentido se puede recordar con Onésimo Redondo que esta separación "ha de tener realidad formal, y sobre todo la independencia del judicial ser un hecho firme". Palabras del Caudillo apoyan asimismo interpretaciones análogas. La unidad de mando no es obstáculo para una separación que permita la mayor precisión técnica.

Ya hemos visto en España de qué modo la unidad de mando dotando del poder supremo de dictar leyes a quien une las jefaturas del Estado y del Gobierno trae la consecuencia de vigorizar a éste. En Italia, con las reservas que exige la nueva constitución de la Cámara de los fascios y las corporaciones, la ley de 31 de Enero de 1926 facultaba al Ejecutivo para emanar normas jurídicas, dejando al Parlamento tan sólo ciertas materias esenciales, especialmente relacionadas con la tutela ciudadana (libertades, tributos, servicio militar, tratados con modificaciones en el territorio), y que vienen a representar la vieja competencia de los antiguos Parlamentos o Cortes estamentarias. La primacía es del poder político, "del cual el legislativo es un ejecutivo". En Ale-

mania todo el poder corresponde al Führer, en cuanto se instaura en vehículo de la voluntad nacional. Unido al pueblo en cuanto jefe propio, es independiente de intereses y grupos. El plebiscito que configura la ley de 14 de Julio de 1933 viene a apoyar la misma unidad de mando y constituye un retorno germanista.

37. La unidad de mando en el Estado fascista.

Sobre este punto, hay una declaración terminante de Mussolini: el Fascismo—decía el 22 de Diciembre de 1928—ha restituido al Estado su actividad soberana, reivindicándole contra todos los particularismos de clase y de grupo el absoluto valor ético y “ha restituido al Gobierno, que había quedado reducido a instrumento ejecutivo de la asamblea electiva, su dignidad de representante de la personalidad del Estado y la plenitud de su potestad de imperio”. Se trata por consiguiente de una unidad de mando conectada al propio instrumento de mando que es el Gobierno. Tal sistema resulta apoyado por la ley de 4 Diciembre 1925, tan trascendental a este respecto, que es, según Panunzio, la que hace fascista al Estado italiano, condicionando la unidad del sistema jurídico y permitiendo dar el nombre de “régimen del jefe del Gobierno”, al régimen político italiano. Y así es, aunque figure la monarquía en la cúspide de la pirámide y tenga ésta en su base al Pueblo encuadrado económicamente en los Sindicatos y políticamente en el Partido. Según aquella ley, “el Jefe del Gobierno, primer Ministro, dirige y coordina la obra de los ministros”, con lo que da a la jefatura esa condición complementaria de la jerarquía, idea que, por otra parte, ha sido aplicada en otros campos in-

cluso en el docente (Ejemplo: "el decano cuida de la buena marcha didáctica, educativa y administrativa" en las Universidades). Ante este texto no cabe discutir, cómo la doctrina ha pretendido, que sea cierto que el Jefe del Gobierno es jefe jerárquico, pues habiéndose construido todo el derecho público fascista sobre idea de jerarquía, no puede faltar en este punto incluso frente a los Ministros. Ahí están por lo demás las palabras de Rocco que no dejan lugar a duda: "El Consejo de ministros puede y debe ser utilísimo auxiliar y consejero del Jefe del Gobierno, pero solamente auxiliar, no director efectivo de la política".

Esta magnífica realización del concepto, tan fundamental de unidad de mando, se completa en otras actividades del Jefe del Gobierno. Su adhesión es necesaria para fiar el Orden del día de las Cámaras (ley 4 Diciembre 1925, cit.). Y en relación con los organismos del Régimen, la actividad del Jefe del Gobierno en el Gran Consejo es bien notoria. Téngase en cuenta que esta dinámica culmina en la designación por el Gran Consejo del futuro jefe del Gobierno, acto en el cual el Partido se muestra compenetrado con el Rey y no ocasiona el menor trastorno al régimen de jefatura. En el terreno legislativo todas las leyes han de llevar la contrafirma del Jefe del Gobierno, quien puede incluso llevar a la decisión parlamentaria un proyecto de ley rechazado una vez pasados tres meses, etc., y a pesar de que sobre este punto existe una clara norma constitucional (Estatuto italiano art. 56).

38. La unidad de mando en el nacionalsocialismo: sus fundamentos y sus realizaciones.

La unidad de mando se realiza vigorosamente en la figura del "Führer", Jefe del Estado y del Gobierno. Hitler resume todos los poderes: el mando supremo militar, el poder judicial, el de organización, el de relaciones internacionales y el legislativo, representando la Ley, como producto de su propia voluntad.

Los conceptos fundamentales del Derecho Nacionalsocialista son los de jefatura jerárquica e igualdad de estirpe. Schmitt ha estudiado estos dos aspectos fijándose en la oposición a todo artificio normativístico y funcionalista. El Nacionalsocialismo trata con medidas distintas las cosas distintas. No quiere, sin embargo, reconocer la multiplicidad de la vida particular y específica de tal modo que conduzca de forma inmediata a la disolución del pueblo. Toda unidad política necesita de la conexión y la lógica entre sus sistemas de normas y sus instituciones. Un Estado fuerte es supuesto necesario para una vigorosa vida propia de sus diversos miembros. La fuerza del Estado Nacionalsocialista estriba precisamente en que todo él aparece invadido por la idea de jefatura jerarquizada. La aplicación organizativa de esta idea exige ante todo que caduquen los métodos esenciales y conformes al pensamiento liberaldemócrata, desde la elección por abajo hasta los procedimientos de votación mayoritaria. La competencia legislativa del Gobierno del Reich—dice Schmitt—es un primer ejemplo, que abre un nuevo camino, de esta anulación de artificiosas rupturas.

Por lo pronto el Jefe del Gobierno alemán tiene el poder militar supremo, que, con el de las relaciones internacionales, habían sido tan discu-

tidos por el Parlamento. Recuérdesse que ya en la Constitución de Bismark (art. 60) se sometía al Parlamento la fijación de las fuerzas militares. En el régimen weimariano, si bien el Presidente tenía el mando supremo, se encontraba en relación con el Ministro de la Guerra y necesitaba la confianza del Reichstag. La ley de 2 de Agosto de 1933 traspasa ese poder al Caudillo; la de 20 de Agosto de ese mismo año, determina que los oficiales y soldados han de jurar a Adolfo Hitler, y la ley de Defensa nacional (21 Mayo 1935), atribuye al Caudillo el mando del nuevo Ejército, en tanto que la reorganización de 4 de Febrero de 1938, le coloca en posición de mando inmediato como jefe director, hasta el punto de que si el mando efectivo corresponde al Ministro de la Guerra, éste actúa como delegado del Caudillo y con deber de obediencia respecto al mismo. De este modo el ejército alemán viene a ser—de acuerdo con el Punto 22 del Programa Nacional-socialista—el pueblo en armas, ese mismo pueblo que—políticamente—está unido en comunidad a las órdenes del Jefe.

La potestad judicial se había separado del poder político por la interpretación dada a la doctrina de división de poderes. Si el Caudillo resume todo el Poder, es claro que también estas funciones. Y semejantemente ocurre con toda la administración. En el régimen monárquico se hablaba de prerrogativas de la Corona. El parlamentarismo las invade, en relación con el derecho a elaborar los presupuestos. En la Alemania nacional-socialista, al Caudillo corresponde ese poder total sobre la administración.

También corresponde al Caudillo y de modo más vigoroso que a los antiguos jefes de Estado, el poder de las relaciones con el extranjero. Hemos visto que el Caudillo alemán decide estas cuestiones y es notoria la actividad desarrollada

a este respecto con la retirada de la S.D.N. y la exposición de principios de política exterior (Discursos de 17 Mayo 1933, 21 Mayo 1931, 7 Marzo 1936, etc.). Tal Poder queda perfectamente delimitado por la ley de 24 Marzo 1933, que señala que los tratados internacionales no necesitan la aprobación del Reichstag.

El Gobierno alemán está constituido por Ministros técnicos dependientes del Caudillo, en forma que se diferencia tanto del sistema de Weimar como del de Bismarck. El Caudillo señala los grandes principios y normas de orden político; la voluntad del Gobierno no se forma mediante votación, sino jerárquicamente, siendo resueltas por decisión del Caudillo, en el seno del Gobierno, las dudas y dificultades. Los ministros aconsejan al Caudillo y están obligados con él, mediante un lazo de fidelidad y obediencia, fijado por la ley de 16 Octubre 1934. Todo esto contrasta con la Constitución de Weimar. Así el Caudillo no es, en el Gobierno, solamente "primus inter pares", sino que aparece—como dice Huber—de manera destacada sobre los demás ministros.

El jefe alemán posee, en fin, el Poder legislativo. La base de éste es la voluntad del Caudillo y él mismo constituye el vehículo de este Poder, habiendo sido suprimida la potestad legislativa del Reichstag por la ley de 24 Marzo 1933. Resulta interesante notar, sin embargo, que en una país organizado en unidad de poder político, existen tres distintos legisladores: el Gobierno, el Reichstag y el Pueblo, bien que, en verdad, gracias a la estructura adoptada, sólo el Caudillo sea legislador.

39. La unidad de mando en Turquía y Portugal.

La Constitución portuguesa de 1933, coloca como principio fundamental éste de la consolidación

del Ejecutivo. No hay para élla Estado fuerte si el ejecutivo no lo es. Por eso tal Poder corresponde al Jefe del Estado, que designa libremente a sus ministros sin tener que someterse a la influencia de la Asamblea Nacional. El artículo 71 declara que "la soberanía reside en la nación y tiene por órganos: el Jefe del Estado, la Asamblea Nacional, el Gobierno y los Tribunales". En el fondo, el verdadero titular, es el Poder ejecutivo, es decir, el Gobierno. Este tiene la exclusiva confianza del Presidente de la República y su conservación en el Poder no depende de la suerte que corran sus proyectos de ley o de cualesquiera votación de la Asamblea Nacional (Constitución, art. 112). Fortalecer el Poder ejecutivo es una de las grandes tareas que Salazar se propuso en el discurso de 30 de Julio de 1930. Hay, sin embargo, en Portugal, Asamblea con atribuciones extensas y régimen interno con huellas democráticas. A su lado, una Cámara corporativa asesora.

En cuanto a Turquía, la preponderancia del Jefe del Estado está bien clara, y el principio de unidad de mando se lleva también al Gobierno donde el Presidente no es un jefe de gabinete liberal, sino un verdadero orientador de la política, hasta el punto de que la misma terminología lo refleja llamándole primer ministro (Ley de 30 Octubre 1923). La unidad tiene acentuado carácter militar. Precisamente la grandeza de la obra de Atatürk está ahí, en la realística de su ideario. Como dice Schopen, la esencia de su política nacional arranca de la estrategia del soldado y de la sangre fría del matemático que llevó desde su juventud.

Referencias a la tradición española, en *Beneyto*, Contributo allo studio degli ademprivia (Riv. st. dr. ital. 1933);—Dritto romano e diritto popolare nel medioevo spagnuolo (Studi per Albertoni, III);—Regulación del trabajo en la Valencia del 500 (An. hist. der. esp. VIII, 1932);—Notas sobre el origen de los "usos comunales" (Anuario cit, IX, 1933); *Bonilla*, El derecho aragonés en el siglo XIII (Zaragoza 1926); *González Palencia*, Los mozárabes (Madrid); *Hinojosa*, Estudios sobre la historia del derecho español (Madrid, 1902); *M. Marcos Antuña*, La usura judía en Castilla (Ciudad de Dios, 1934); *A. Sayaus*, Les contrats commerciaux a Barcelone (Estudis univ. cat. 1932); *Maeztu*, Defensa de la Hispanidad.

El aspecto actual, *García Oviedo*, Las directivas del Nuevo Estado (Sevilla, 1937); *Conde de Altea*, El problema de los funcionarios públicos (Etapas 1938).

Sobre Italia: *Cammeo*, Gli impiegati degli enti pubblici e le norme sul impiego privato (Giurispr. ital. 1927); *Giannetti*, Partito e preparazione militare (Nazione militare, 1938); *Mussolini*, Scritti e Discorsi; *Panunzio*, Teoria generale dello Stato fascista (1937); *Rocco*, Trasformazione dello Stato (1927).

Sobre Alemania: *Decker*, Die politische Aufgabe des Arbeitsdienst (1935); *Fabricius*, Der Beamte als deutscher Sozialist (Deutsche Sozialisten am Wert; Prinz v. Schaup Lippe, Berlin 1936); *Friesenhahn*, Ueber den Eid des Beamten (1935); *Gerber*, Politische Erziehung des Beamtentums im nationalsozialistischen Staat (1933); *Heckel*, Das Wehrgesetz vom 21 mai 1935 (Deutschen Juristen Zeitung 1933); *Hoehn*, Der politische Eid (Deutsche Juristentag, 1936); *Huber*, Verfassung, (1937); *Schmitt*: Staat, Bewegung, Volk (1934); *Seel*, Deutsches Beamtenrecht (1934); *Stamm*, Der Reichsarbeitsdienst (1935); *H. Surén*, Volkserziehung im Dritten Reich (1934).

Sobre Turquía: *Sukru Kaya*, Discours (Angora, 1938).

Sobre Portugal: *Reynold*, Portugal (Paris, 1936); *Oliveira Salazar*, Discursos (1937).

CAPITULO OCTAVO

SERVICIO (INTERÉS COMÚN)

40. Presencia y tradición española del concepto de interés común.

Presencia vigorosa en los Puntos de la Falange. Ya desde el 1.º, que señala el fortalecimiento, la elevación y el engrandecimiento de España como "la apremiante tarea colectiva de todos los españoles" e insiste, subrayando el servicio a que hemos de supeditarnos, en una jerarquía de intereses dominada por el interés común, que es este de la Patria. "A la realización de esa tarea habrán de plegarse los intereses de los individuos, de los grupos y de las clases". La concepción pasa al terreno económico en el Fuero del Trabajo: "Todas las formas de propiedad quedan subordinadas al interés supremo de la Nación. cuyo intérprete es el Estado" (F. T. XII, 1). Ya el preámbulo de este importantísimo texto señala la "voluntad de poner la riqueza al servicio del pueblo español, subordinando la economía a su política", y expresa el designio "de que también la producción española—en la hermandad de todos sus elementos—sea una unidad que sirva a la fortaleza de la Patria y sostenga los instrumentos de su poder".

En el propio Fuero se entrecruzan estos conceptos de servicio y de interés común con relación a la idea del sometimiento a la jerarquía de los valores nacionales, a cuya cabeza se encuentra la Patria. Así se declara que "servicio es el trabajo que se presta con heroísmo, desinterés o abne-

gación, con ánimo de contribuir al bien superior que España representa". Y no sólo en los textos reaparece hoy esa tradición de servicio. El Conductor de la nueva España ha aprovechado su Discurso de la Victoria, en Madrid (19 Mayo 1939), para hacer esta declaración terminante: "Hay que dar a la Patria cuanto se tiene, y no se lo da quien guarda reservas mentales, quien se siente ofendido al ser apartado de un puesto o de un servicio; nuestros cargos se sirven como la centinela, en constante tensión y sacrificio, y se relevan cuando la natural fatiga lo aconseja. Esta ha de ser la moral de la nueva España, el concepto de nuestro Movimiento, y con ella haremos que los laureles de la Victoria no se marchiten jamás".

Y no es otra, nuevamente a través de la Falange, la Tradición hispánica. Recordemos que uno de los aspectos que caracterizaban nuestra estructura económica tradicional, era el de la subordinación del interés particular de los gremios al nacional. La idea de rentabilidad con que el capitalismo ha envenenado la moral, era exótica entre nosotros, puesto que toda nuestra vida económica estaba construída sobre la base de un sistema de "necesidades cubiertas" y un principio severo de servicio. Vamos a bosquejar someramente el cuadro:

Leyes y costumbres habían reconocido la existencia de ciertos derechos de leña "ad usus suo". Los más antiguos fueros y cartas pueblas (Valpuesta 804, Brañosera 824) hablan de libertades de este tipo—"ut habeatis plenariam libertatem ad incidenda ligna in montibus meis ad construendas Ecclesias, sive aedificandas domos, aut cremandum, vel ad quocumque necesse fuerit". Se atendía así a las necesidades domésticas y agrícolas. Un sentido especial adquiere este régimen en las comarcas levantinas, donde el "empriu" se enlaza a ciertas elaboraciones dominiales. Tales

derechos fueron delimitados por preocupaciones extradomésticas, pero no faltó a veces—así con el esparto—un cierto sentido de aprovechamiento industrial. Advertimos también determinados derechos sobre tierras ajenas, de los cuales algunas supervivencias han llegado a nuestro siglo (espigueo, rastrojo). Mayor importancia tenía la organización del cultivo libre con pacto implícito cuando se trataba de terrenos no explotados. Es costumbre registrada en los textos que dan base al “Libro de los fueros de Castiella” y al conocido pasaje del Fuero Viejo, IV, 3, 3—“Esto es fuero de Castiella: que si alguna tierra yace erial, e la labra algún labrador; e quando viene el tiempo de coger el pan, viene suo dueño de la tierra, e quier la segar, e levar el pan della leve el que la labró levar el pan della, e al suo dueño darle suo derecho de tercio o de quarto, qual fuer la tierra, maguer que la aya labrado sin mandado le suo dueño”. Estos textos son aludidos como “fazañas” o relacionados con fueros locales, lo que demuestra su vigor. La fórmula es afortunada y encuentra en la teoría apoyos posteriores. No es muy distinto lo que pedía en “De Rege” el gran jesuita Mariana.

El problema del crédito resulta tema interesantísimo. No ya en el terreno del crédito personal—que el Fuero del Trabajo declara fomentará—con antecedentes tan admirables como los del préstamo al honor por la Universidad a sus licenciados. Aun en las figuras jurídicas típicas se desarrollan concepciones nuevas, peculiares, que enlazan el depósito y el comodato en la encomienda. Otras instituciones surgen para hacer frente a la falta de capitales para acometer obras refaccionarias. Recordemos a este respecto, a través de los cartularios, el contrato de plantación a medias. Los propietarios rústicos que querían llevar a cabo

obras de roturación, celebraban contratos con grupos de trabajadores asociados a ese fin mediante la cesión del goce de la tierra en un lapso determinado y un derecho de propiedad sobre la mitad del terreno roturado. En cuanto al préstamo a interés éste era negocio limitado por los Concilios (León y Coyanza, entre otros) a los no cristianos. El Poema del Cid muestra a los judíos ejerciendo la usura. El préstamo que hacen a Martín Antolínez se celebra clandestinamente—"que non me descubrades a moros ni christianos". Los fueros municipales reglamentan el préstamo en especie. Así el de Zorita alude a "tod aquel que sus dineros diere por cevada a agosto, gane iv dineros de cada menkal". Por otra parte, los Pósitos regularon el crédito sobre cereales, desde época antigua. El Cardenal Cisneros vivificó la institución, y las Cortes de Valladolid, en el siglo XVI, la impusieron de nuevo.

En cuanto a la cuestión que en el siglo XVI se calificaba "de subventionone pauperum", ya la Edad Media dió precedentes interesantes. El cuidado de los pobres y los indigentes fué desde un principio cometido propio de la Iglesia, y ésta construyó albergues, orfanotrofios y hospitales. Lenta-mente, a través de los siglos, de la competencia eclesiástica se llega a la competencia civil, municipal. Pero ya en nuestra época medieval España conoció formas muy progresivas y eficientes, como el "Procurador de los Miserables" y el "Padre de Huérfanos". Forster Watson, señalando la influencia de la organización municipal valenciana en las ideas que Juan Luis Vives presentó a los Burgomaestres de Brujas, cuando les dedicó "De subventionone pauperum", puso de relieve estas instituciones. Más tarde la literatura es copiosa y en ella se advierte de modo paladino la extensión de la idea del "pauper" a la del sin trabajo, el "pie

c
si
ti,
tél
nes
de a
La
sólo
tó to
ejemp
escudo
tos y a

polvoroso" de las crónicas. Hay discusiones sobre la limosna, y un manuscrito de la Biblioteca Nacional (M. 849), señala la sentencia dada en favor del Procurador real y contra la curia eclesiástica en 6 de Julio de 1619, atribuyendo al Procurador del rey y a los Jueces seculares la competencia para dar licencia para pedir limosna (elemosinas petere per vicos et plateas civitatis et regni).

Otro aspecto valioso es el régimen del trabajo. Teniendo en cuenta el ambiente rural predominante en la Edad Media española, el hombre sin tierra constituye excepción. El "pie polvoroso" de las crónicas es quien tiene necesidad de alquilar por jornadas su esfuerzo, pero esto no sucede más que en épocas de siega y vendimia. El campesino con tierra es regla y cuando se habla de hombres y de trabajo hay organismos, como oficinas de colocación, que le daban lugar donde servir. No sólo existía la costumbre de la reunión matutinal en la plaza mayor del pueblo, sino incluso instituciones como el Affermamosos valenciano, con jefes y funcionarios. Y se imponía el trabajo al modo, que nadie podía estar en la ciudad sin ocupación. Lo atendían los organismos de este tipo, si se rechazaba el puesto se expulsaba del pueblo al holgazán. Los ordenamientos de méridos adquirieron singular importancia después de la unión de las Cortes de Valladolid de 1351. La intervención del Estado fué general, y no se limitaba a abastecimientos, sino que orientaba la política productiva, determinando, por ejemplo, el aprovechamiento de los cueros para zapatos y sillas, con preferencia a zapatos.

41. La idea de servicio en el Estado fascista.

Dentro de la concepción fascista, la idea de servicio—relación entre el particular, el grupo o la clase con el Estado—lleva a asimilar a la estructura de servicio militar gran parte de las relaciones posibles. Esta actitud deriva lógicamente de los conceptos generales. Y así Mussolini, en su discurso del 26 de Mayo de 1927, podía decir: "Solamente el Estado da esqueleto a los pueblos. Si el pueblo está organizado, el pueblo es un Estado; de otro modo será una población a merced del primer grupo de aventureros internos o de cualquier horda de invasores que venga del exterior, porque solamente el Estado con su organización jurídica y con su fuerza militar preparada, puede defender a la colectividad nacional".

El vínculo estrecho entre educación política y educación militar enlaza las ideas de Partido y de Ejército. Así el servicio político es un verdadero servicio militar. Pero, aún más: en el Estado fascista no hay separación entre pueblo y ejército, y el concepto de ciudadano-soldado integra aquel de ciudadano-productor. Ambos son fundamento del Estado. Así todos los ciudadanos han de producir en la economía y defender en el ejército, con espíritu de servicio y de sacrificio, que es espíritu de milicia. Como nota Panunzio, nunca ha habido una extensión tan universal de la obligación militar como hoy en Italia, y por eso —añade—nuestro Estado "precisamente por que es popular y en conexión con ello", puede llamarse militar. Tales conceptos pasan a la vida jurídica por la ley de 31 de Diciembre 1934, sobre instrucción premilitar, donde se declara que "las funciones de ciudadano y de soldado son inseparables en el Estado fascista" (art. 1).

Ese mismo concepto llega a la burocracia, siempre en base a la nueva idea—que es la tradicional—de Pueblo. “La misma burocracia—ha dicho Mussolini (14 Noviembre 1933)—no es hoy día y menos aún mañana un diafragma entre lo que es obra del Estado y lo que son los intereses y las necesidades efectivas y concretas del Pueblo italiano”. Y los funcionarios—como los soldados—juran fidelidad.

42. Funcionarios y soldados en la Alemania nacionalsocialista.

En el Estado nacionalsocialista, la idea de servicio se impone en el cuerpo directivo que ha de superar las viejas antitesis liberales. La burocracia aparece sometida al cumplimiento del alto interés común, merced al juramento que exige la ley de funcionarios de 26 Enero 1937. La burocracia jura ser “fiel y obediente al Führer del Reich y del Pueblo alemán, Adolfo Hitler, acatar las disposiciones legales y cumplir conscientemente con las obligaciones del cargo”. Nótese este cumplimiento “consciente”, que revela la utilización del concepto de servicio. Para acentuar esta actitud, la camaradería es una obligación, y todo funcionario ha de pertenecer a esa parte escogida del pueblo alemán, que es el Partido. El funcionario se relaciona, además, con el Partido, a los efectos de ser el vigilante permanente de éste en la Administración, hasta el punto de estar obligado a transmitir al Partido el conocimiento de cualquier hecho que pueda redundar en perjuicio de la organización nacionalsocialista. El deber de fidelidad es característico del servicio y tiene aspecto directo, no al modo de juramento a la Constitución. Ministros y Gobernadores (ley de 16 Octubre

1934), soldados y empleados (ley de 20 Agosto 1934) y miembros del servicio de trabajo (ley de 1 Octubre 1935) todos juran guardar esa fidelidad.

La nueva Alemania presenta entre las estatales tres formas de servicio público: el de trabajo, el militar y el burocrático. Hay otras formas extraestatales: las del Partido, por ejemplo. Y todos esos servicios cumplen tareas de interés común como unidades no mecánicas, sino vivas y conscientes. El servicio público es definido como "servicio de honor al pueblo alemán". El servicio de trabajo es considerado obligación de cara al pueblo alemán (ley de 26 Junio 1935).

Todos los miembros de la comunidad alemana, son así funcionarios y soldados. El servicio militar es servicio de honor y el servicio burocrático servicio al interés común. Un servicio público no es una oficina ni una red de oficinas, sino "una comunidad de servicio", en la que se ha de valorar un nuevo elemento—el interés del servicio—en la escala jerárquica que corona el interés de la Nación.

43. La idea de servicio en Portugal y Turquía.

Oliveira Salazar dijo, el 21 de Octubre de 1929, que el fin, cuyo cumplimiento importaba al Estado, era el de subordinar las actividades al interés colectivo, y dió la fórmula: "Nada contra la Nación, todo por la Nación".

Este objetivo es general para todos los ciudadanos, pero el Estado ha de cuidar de hacerlo cumplir por quienes más íntimamente se relacionan con él, es decir, por los funcionarios. Y así la Constitución declara: "Los funcionarios públicos están al servicio de la colectividad y no al de

cualquier partido u organización de intereses particulares, incumbiéndoles el acatar y hacer respetar la autoridad del Estado" (artículo 24). La ley de 13 Mayo 1935 aplica estos conceptos estableciendo diversas normas, ampliadas en 1936 mediante la inserción de la cláusula anticomunista.

En cuanto a la posición kemalista, en uno de sus discursos, Sukru Kaya ha expresado el concepto bellamente: "Todos somos hombres—dijo—que hemos asumido una función en el seno del pueblo. Un agricultor, un obrero, un médico, un artista, un diputado, un ministro está obligado a llenar el cometido que le incumbe en la vida de trabajo nacional y social". Y en otro pasaje apoya la intervención estatal con el argumento de que confiándosele la tarea difícil de organizar el Ejército, deben confiársele las demás con toda solicitud. Es cuestión de preparación y entrenamiento, y el Estado, sometiendo a los particulares al interés nacional, termina elevando la situación de esos mismos particulares. Cita un ejemplo de 1912, cuando se rehusaba el trabajo turco y cuando se creía que un turco no podía ser guardagujas. Ahora—dice—explotamos los ferrocarriles.

TERCERA PARTE

LA ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL

J. M. de Bedoya, Siete años de lucha (Valladolid, 1938);— Antes que nada, política (Valladolid, 1939); *J. Beneyto*, Vázquez de Mella (Barcelona, 1939); *Juan Vázquez de Mella*, Ideario (Obras II a V) y Discursos parlamentarios, (Obras VII a XI, 1935); *José A. Primo de Rivera*, Discursos, I; *Onésimo Redondo*, El Estado Nacional (1938); *R. Fernández Cuesta*, Discurso en el Congreso de técnicos de Falange, Bilbao 1 mayo 1938 (FE, marzo-abril 1938); *Miguel Sancho Izquierdo*, Orientamento sociale del nuovo Stato nazionale spagnuolo (Riv. inter. sc. sociali, 1937); *J. L. Santaló*, Introducción a la Política del Imperio Nuevo (Valladolid, 1938); *L. Prieto Castro*, El momento revolucionario del Fuero y sus líneas ideológicas (Universidad, 1938); *Ignacio Serrano Serrano*, Problemas de vigencia que plantea el Fuero del Trabajo (Ciencia Tomista, 57, 1938).

Con respecto a Italia: *Mussolini*, Scritti e discorsi; *Pannunzio*, Teoria generale dello Stato fascista; *Santi Romano*, Corso di diritto costituzionale; *Zangara*, Il Partito e lo Stato (Catania, 1935). El problema de la eficacia de la Carta de Lavoro, en *Donati*, Efficacia costituzionale della Carta del Lavoro (Archivio studi corporativi, Pisa 1931). Sobre sus primeras aplicaciones judiciales, *Guidi*, Prime applicazioni giudiziarie della Carta del Lavoro (Diritto del Lavoro, 1927). El tema del valor de la Carta está ampliamente estudiado. Cf. especialmente *C. Costamagna* en la revista "Il Diritto del Lavoro" (1927); *Chiarelli* (Riv. dir. pub. 1928); *Barassi*, Lezioni di diritto sindacale e corporativo (1934); *Sermonti*, Il diritto sindacale italiano (1937); *Salemi*, Lezioni di diritto corporativo (Padua, 1929); *Carlo Costamagna*, Premesse allo studio del nuovo diritto pubblico italiano (Riv. dir. pubbl. 1931); *A. Gianini*, Movimenti costituzionali contemporanei (Roma, 1937).

Sobre la doctrina alemana: *Feder*, Der deutsche Staat (Munich, 1932); *Hitler*, Mi lucha;—Discurso del 20 febrero 1938; *Huber*, Verfassung; *R. Freisler*, Nationalsozialistisches Recht und Rechtsdenken (Berlín, 1938); *Schmitt*, Staatsgefüge und Zusammenbruch des Zweiten Reiches (Hamburgo, 1934);— Staat, Bewegung, Volk (1934); *Frank*, Artículo en "Deutsche Justiz" 1936.

Sobre Portugal: *Oliveira Salazar*, Discursos (Coimbra 1935-37).

La experiencia austriaca en cuanto estructura, *W. Loehne*. Was ist die Waterländische Front? (Voelkischer Beobachter, 20 febrero 1938). Sobre el Kuomintang chino, *Wu K'i*, La nouvelle Chine et le gouvernement nationale. (París, 1929); *B. Mirkine-Gueszewicht*, Los principios constitucionales del Estado dictatorial (Rev. der. pub. 1934).

CAPITULO NOVENO

LA DOCTRINA

44. Elementos teóricos del Nacionalindicalismo

Ya citamos en las primeras páginas un expresivo texto de José Antonio Primo de Rivera, según el cual para nosotros no es todo el Estado y, por consiguiente, no nos conformamos con cambiar la Constitución. Onésimo Redondo afirmó vigorosamente esa misma tesis desde un punto de vista análogo: "Nuestro primer deber en esto que llaman problemas constitucionales—dijo—es desentendernos de ellos; no caer ni por un momento, teórica ni prácticamente, en el lazo del constitucionalismo". Hay que tener en cuenta que los textos de Onésimo y de José Antonio surgen en la época del "revisionismo" constitucionalista y es forzoso mantener ese enlace oportunista. Sin embargo, hay en ambos palabras seguras sobre la cuestión, aun aparte de la preocupación que les era contemporánea. Onésimo llega a decir que "el desprecio de la mitología constitucional es una piedra sillar de nuestro ideario". Y con esto Onésimo pretende fundamentalmente seguir el mismo punto de vista que el gran tribuno del Tradicionalismo, Antonio Aparisi y Guijarro, quien se enfrentaba de cara a los amigos de los fetiches convertidos en estatuas de sal. En un admirable folleto titulado "Restauración", Aparisi se lanza contra quienes sostenían que la doctrina de la

Comunión Tradicionalista era un programa fijo y que en 1878 podía aplicarse lo que hubiera sido posible en 1848. Esto mismo era lo que pretendía Onésimo: Que no llegara la hora de actuar y se pensara en aplicar lo que era adecuado en la hora de actuar y se pensara en aplicar lo que era adecuado en la víspera del Alzamiento pero había perdido virtualidad años después. A las insistencias de quienes querían saber a punto fijo cómo iba a ser el Estado creado de acuerdo con los puntos de las JONS, Onésimo contestaba: "Repetimos una vez más que nuestro Estado será un Estado nuevo. Con decir nuevo significamos dos cosas: que será el instrumento político para forjar y mantener la España grande, libre y única a cuya conquista vamos. Y que *será tal como lo exija el imperativo de los días que entonces vivamos*, y no como hoy pudiera ocurrirsenos, ni como fué en tal o cual época pasada". De ahí que cuanta doctrina exponga Redondo sea, siempre doctrina de tesis general. Así nos habla de principios de negación—antimarxismo, antiparlamentarismo—y de construcción—, fé hispánica, justicia social, orden político cristiano. Y da sólo ideas matrices para nutrir el ideario: unidad, en cuanto al fin, y sacrificio, en cuanto a la táctica. Queremos unidad, "porque el dolor secular de España, como de todo el pueblo que decae no es otro que la falta de unidad". La unidad es la medida de los valores políticos. "Aquel sistema—dice—que asegure una unidad constructiva a la acción del Estado será bueno, y si no hay más que uno que la asegure, sólo ése será bueno". "Unidad en todo y ante todo. Esa es la salvación".

Para que las afirmaciones de hoy no nos atengan mañana y para que la unidad sea siempre posible, Onésimo predicaba una lucha sin tregua contra la servidumbre de las fórmulas. "Nuestra

juventud debe abstenerse de confiar en un nuevo recetario, provisto de un rótulo mundial que sirva para curarlo todo" .. Y abandona la ilusión constitucionalista de las fórmulas, al servicio de la exaltación del Caudillo. "El Poder—declara—se atribuirá no a los que sugestionen al pueblo con nuevas promesas, sea cualquiera su género, sino a los que sepan ganarle con la creación de un ejército de patriotas que confíen en las cualidades de sus jefes por haberlas experimentado en la lucha para la conquista del Estado y en la gran campaña de regeneración espiritual que España necesita".

No era otro el modo de pensar del Tradicionalismo que supo buscar en la lucha el medio de selección y que, al sintetizar en tres palabras su ideario genial, sostenía en la figura del Jefe la tesis del programa a cumplir, más cierto que esos programas de que sólo hablaban los grupos liberales. El gran tribuno y pensador tradicionalista don Juan Vázquez de Mella sustituía las Constituciones parlamentarias por las que llamaba internas e históricas. Constituciones no hechas y deshechas por los Parlamentos, sino elaboradas por los siglos y las realidades. Fijábase en el espíritu y no daba importancia a los formalismos constitucionalistas. Es más, para Mella el espíritu de aquellas constituciones internas habían perdido vigor precisamente por los códigos externos que trataban de borrar las verdaderas Constituciones nacionales. Y lo mismo que Onésimo y Aparisi y Mella, José Antonio se une a esa clara actitud. Una vez dijo que "nosotros seríamos una partido más si viniéramos a enunciar un programa de soluciones concretas", y después de señalar el truco de que tales programas nunca se cumplen, exalta como esencia de la Falange "un sentido permanente ante la historia y ante la vida", sentido que "nos da las soluciones ante

lo concreto, como el amor nos dice en qué casos debemos reñir y en qué casos nos debemos abrazar”...

Por eso no aparece concretamente lo que sea, con respecto a la organización del Estado, la tesis Nacionalsindicalista. Fernández Cuesta dijo en su discurso de Bilbao (1 Mayo 1928): “Cuando nosotros decimos el Estado nacionalsindicalista, nos referimos tan sólo a uno de los aspectos del Estado, el aspecto económico: queremos decir que el Estado para disciplinar la economía emplea el instrumento de los Sindicatos”. Onésimo Redondo, al utilizar por vez primera el término, entendía que el Estado “nacional y sindicalista” tenía que estructurarse en un Estado nacional y mediante una forma de organización sindicalista. El Manifiesto político de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (10 Octubre 1931), declaraba como ámbito de este matiz “la sindicación oficial de los productores”. El Fuero del Trabajo, en su preámbulo, afirma que el nuevo Estado ha de ser “Nacional, en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, y Sindicalista, en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista”.

Aunque haya unos fines, el concepto no se presenta, pues, tan unívoco como pudiera imaginarse, prestándose a contraproposiciones arbitrarias en gran parte porque aun no se ha iniciado su elaboración jurídica. En todo caso, concebir el Nacional-sindicalismo como la reflexión estatal de la doctrina de la Falange, tampoco cierra por completo la cuestión, pues exigirá separar falangismo y nacionalsindicalismo contra todo precedente y contra la unidad, que es mayor valor en contacto con el cual todos desmerecen y se anulan. El nacionalsindicalismo dejaría de aparecer como concepción propia del mundo y de la vida que abarcase nuestra completa integridad humana, si

se afectase esencialmente, con adhesión carismática, a una organización de ensayo que intente realizar en la vida política una tarea tan compleja y difícil.

Por eso, cuando se plantean estas cuestiones, urge referirse de modo inmediato a lo que es consubstancial del Régimen: el Partido y el Jefe, huyendo de toda posible teorización de lo episódico.

45. Los fundamentos del derecho en el Estado Español:

No hay—como notamos—una fórmula ni una Constitución, pero existe una doctrina. Una doctrina, según ha dicho, en solemne ocasión (18 Julio 1938), el Secretario General del Partido: "Porque, en efecto, si en los primeros tiempos del Alzamiento lo que aglutina a cuantos a él fueron era el antimarxismo y el amor a España, desde el momento en que el Caudillo elevó a norma del Estado los veintiséis Puntos del Programa de la Falange, éstos son la fuente de la nueva legalidad de nuestro sistema constituyente y el círculo de unión de todos los españoles dentro de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que es el instrumento que ha de realizarlo".

El mismo concepto que hemos advertido en la doctrina precursora anterior al Alzamiento, aparece vivo en el preámbulo al Decreto 255, que unifica en la Falange a los grupos políticos tradicionalistas y jonsistas. Estas dos grandes fuerzas nacionales—dice—"hacen su presencia solidaria en el servicio del Estado". Y añade: "Su norma programática está constituida por los veintiséis Puntos de la Falange Española". Pero subraya, de acuerdo con los conceptos sostenidos por el tradicionalismo y el nacionalsindicalismo: "debiendo

hacerse constar que como el Movimiento que conducimos es precisamente esto, más que un programa no será cosa rígida ni estática, sino sujeto, en cada caso, al trabajo de revisión y mejora que la realidad aconseje".

La aceptación en tales términos no supone en forma alguna que pueda estimarse fórmula transaccional que no haya de cumplirse. Ofenderíamos con tal interpretación no sólo a la lógica, sino al honor del Caudillo, que hubo de proclamarlos y ha insistido en defenderlos. Era obligado hacer la afirmación del valor transitorio o provisional del texto de los Puntos, precisamente para recoger el auténtico espíritu de las dos fuerzas que hacían esa presencia solidaria. Se sirven así los conceptos que expusieron tanto Aparisi Guijarro como Onésimo Redondo. Por otra parte, la realidad legislativa y las afirmaciones del Jefe Nacional, nos han hecho ver el cumplimiento de las referidas normas y el propósito de que cada vez muestren mayor vigencia. Es ejemplar el caso del Fuero del Trabajo, desarrollo de los Puntos 8 a 16. Ya antes, en la legislación sobre ordenación triguera y en el decreto sobre servicio social femenino, los preámbulos arrancaban de las normas contenidas en los 26 Puntos. En la exposición de motivos de este último (Decreto de 7 Octubre 1937), llega a hacerse esta declaración terminante: "La consagración de los 26 Puntos del Nacional-sindicalismo como norma programática del Nuevo Estado Español obliga al Poder público a dictar medidas de gobierno que determinen la vida española por las rutas políticas y sociales que exigen aquellos puntos".

Nuestra perfecta línea política enlaza estas afirmaciones con las siguientes rotundas palabras del Caudillo, ante el Consejo Nacional, al inaugurar la sesión del 5 de Junio de 1939: "Yo os aseguro que, así como mi voluntad, inspirada en mi con-

ciencia del futuro de España, convirtió en norma los veintiséis Puntos del Movimiento, genuina expresión actual de la tradición española, cuya interpretación constante es imperativo indeclinable y exclusivo del caudillaje, esa misma voluntad hará también que se cumplan, por cuanto constituyen el fundamento inviolable del nuevo orden constitucional y la empresa histórica a que el Estado debe servir".

¿Significa esto que haya de establecerse una Constitución? Parece que si el Movimiento no es cosa rígida ni estática, mal cabe encuadrarse su actividad en una Ley análoga a las Constituciones del siglo XIX. Esto no obsta para que la estructura del Estado pueda quedar pergeñada en una disposición de tipo general que recogiese como texto único las diversas leyes fundamentales. Pero esto ya no sería una verdadera Constitución del tipo conocido. Algún autor pide, sin embargo, que se cumpla la tarea que él cree urgente, de dotar a España de una Constitución. Pero ¿es necesario este formalismo para "establese—como quiere el señor Santaló—el nuevo orden fundamental de la Nueva España"? La Constitución vive ya, aunque no tenga figura decimonómica. Está en aquella Ley del 29 de Septiembre de 1936 que crea la Jefatura del Estado, en el Decreto de 19 de Abril de 1937 que monta el Régimen de Partido Unico, en el Decreto de 19 de Octubre que establece el Consejo Nacional y en las Leyes de 30 de Enero de 1938 y 8 de Agosto de 1939, que unen la Jefatura del Gobierno a la del Estado y detallan la organización de la Administración Central. Esta Constitución actualmente vigente encuentra su declaración de derechos y de deberes en dos textos esenciales: los 26 Puntos y el Fuero del Trabajo.

Hemos aludido al Fuero del Trabajo como desarrollo de la doctrina señalada en los Puntos.

Ahora, cabe plantear la relación entre los dos textos a los efectos de su vigencia. Evidentemente el Fuero es una interpretación auténtica de los Puntos a que se refiere. Así los Puntos 8 y 14 han de considerarse interpretados de acuerdo con el texto del Fuero XI. 4, que afirma que "en general el Estado no será empresario si no cuando falte la iniciativa privada o lo exijan los intereses superiores de la Nación". Pero en todo caso parece que, mientras no se modifiquen los Puntos, éstos constituyen un programa máximo que no deberá ser rebasado. Así vino a decirlo el Secretario General del Partido, en unas declaraciones sobre reforma agraria: "Legislaremos, por tanto, sobre bases prácticas; sobre experimentos concretos y dentro por supuesto *de los límites trazados por los Puntos* de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, daremos cima a esa obra espléndida de transformación social, contenida en el Fuero del Trabajo" ("Libertad", 14 Septiembre 1938).

La interpretación hecha en esas palabras deja entender que el Fuero es un desarrollo de los Puntos, pero que éstos son, aun sobre el Fuero, el programa máximo del Régimen, en tanto, es claro, que no sean modificados y puestos de acuerdo con las preocupaciones circunstanciales en un futuro momento histórico. Con ello se alude a un problema que merecería largo estudio: el del vigor práctico de los Puntos. Estos no son—de esta manera—una ley que pueda actuarse por los Tribunales, sino un plan que el Estado se propone. El individuo, la familia, el sindicato, el municipio y algún que otro elemento que figura en los Puntos como sujeto no pueden pretender judicialmente la realización de cuanto los Puntos afirman y verse, en esa esfera, procesalmente protegidos. Los Puntos no podrán por consiguiente ser invocados en los Tribunales más que como principios generales del derecho. Su vigor concreto

arranca del texto legal que los aplica. (El problema presenta analogías y disparidades con el que en Italia se hubo de plantear con motivo de la "Carta del Lavoro" por más que ésta fuera un acto del Partido, mientras que en España los Puntos son un programa del Estado, declarado así en un decreto fundamental.)

Ya en sendos interesantes trabajos dos profesores universitarios han abordado el problema. El profesor Prieto Castro, tras afirmar que el Fuero se ha publicado para el desenvolvimiento de los Puntos 9-11, 13-16, 18 y 19, afirma que el Fuero y los Puntos constituyen "el criterio de interpretación de la voluntad revolucionaria del Estado nacionalsindicalista". En el caso concreto del Fuero, estima que éste "obliga desde el momento de su promulgación a todos a quienes afecta", es decir a los trabajadores y los empresarios, a los Tribunales de trabajo, a los Tribunales ordinarios, a las autoridades y a los funcionarios. Por su parte, el profesor Serrano, cree que el Fuero es "una norma (Decreto) emanada como las demás y que, como todas, goza de los caracteres de generalidad y obligatoriedad".

Esto, sin embargo, no debe entenderse en la forma como se planteaban problemas semejantes bajo el régimen liberal constitucionalista. Si hiciésemos de la doctrina una fórmula, "caeríamos inevitablemente—como dice Martínez de Bedoya—en la absoluta negación de nuestra propia razón de ser".

46. La doctrina fascista.

La idea, esencial en el Nuevo Estado, de atribuir a éste un contenido, da vigor a la tesis que niega eficacia al viejo concepto del agnosticismo estatal. Si el Estado es o puede ser en sí vacío,

esto sucede solamente en cuanto pura forma jurídica, siendo preciso—según dice Panunzio—“apoyar al Estado como a una construcción sobre pilares en una fuerza espiritual”. Esta fuerza—agrega—fué representada antiguamente por Ordenes religiosas, militares, caballerescas, por órdenes económicos, propiedad, feudos, etc. “Hoy la representa el Partido Nacional Unico”.

El Fascismo ha utilizado al Partido como elemento revolucionario y ha tomado por base, según ya observamos, la situación anterior sin hacer tabla rasa en la doctrina ni en la estructura. Procediendo de la crisis del socialismo, ha exaltado, frente a éste, el valor del Estado, ignorado por aquél. La influencia sindicalista soreliana ha dado un contenido económico; en tanto que la doctrina que iba elaborando Mussolini llenaba las viejas instituciones de sentido nuevo y creaba los organismos adecuados. En la maravillosa evolución homogénea del pensamiento mussoliniano los primitivos puntos del Partido han ido adquiriendo en cada momento el preciso valor. No hay, como en España, un reconocimiento estatal de unas normas, y cuando esas normas surgen por medio de la “Carta del Lavoro” no se trata de una proclamación del Gobierno, sino de un acto del organismo supremo del Partido, lo que plantea cuestiones características y motiva una extensa literatura. El texto de la Carta fué votado por el Gran Consejo cuando éste no había asumido el carácter de órgano del Régimen, cuando era todavía una institución interna del Partido. De ahí la discusión y la interpretación múltiple de que ha sido objeto. Mientras unos, como Costamagna, le dan valor constitucional, otros estiman que solamente rige efectivamente en cuanto contiene principios generales del derecho (Donati), o de equidad (Guidi). No faltan los que niegan valor de fuente de derecho a la Carta (Barassi, Balzarini) y los que la

estiman derecho interno del Partido (Longhi, Salemi). Pero es generalmente aceptada la posición que le atribuye vigor general a partir de la ley de 13 Diciembre 1928, que supone su recepción. Para Santi Romano tiene carácter de programa de acción—en tal aspecto semejante a nuestros Puntos, subrayemos esto—y valor directo de norma del Partido, vigente fuera “sólo en cuanto las normas jurídicas estatales lo presupongan”. El problema de la eficacia inmediata con respecto a los miembros del Partido, ha sido estudiado recientemente por Zangara. Frente a Donati, que estima que tal vigencia sería inconciliable con el carácter general de las declaraciones—argumento que podría esgrimirse también en nuestro caso, tanto en los Puntos como en cuanto al Fuero—. Zangara afirma, sin embargo, que la Carta es un acto del Partido y apoya su tesis en distintas declaraciones del Gran Consejo, que aluden a la intervención de los fascistas en la tarea de dar vida a los principios sindicales, tarea que se ha declarado reiteradamente propia de los miembros del Partido.

47. La doctrina nacionalsocialista.

También el Nacionalsocialismo se lanza contra los formalismos constitucionalistas. El Estado constitucional pugna con la concepción heroica de la vida y es precisamente, como ha notado Schmitt, el tipo que quiere el burgués. Los problemas de la ley formal y la ley material se anulan desde el momento en que el Caudillo tiene el poder de legislar y el Ejecutivo. De ahí incluso un nuevo concepto del derecho y de la ley. No se trata con esto, según ha sugerido Huber, de un simple cambio en la materia de promulgación. La unidad del Caudillo y el Pueblo se documenta me-

diante el plebiscito, y las decisiones del Reichstag tienen un valor análogo. El Reichstag ya no dicta la ley; se ha transformado en tribuna para que el Caudillo diga su palabra decisiva sobre política general; el Reichstag ha oído a Hitler la exposición de la política exterior, militar, racista, etc. Y como es el Partido quien orienta y dirige, el Programa del Partido adquiere todo el valor de la Doctrina del Estado. Siendo ley fundamental del nuevo derecho público nacionalsocialista la preeminencia de la dirección política, la jefatura jerarquizada es concepto esencial y toda la actividad que se despliegue ha de estar orientada en ese sentido.

El Programa del Partido, sin declaración legislativa del Estado, pasa así, por obra de la teoría general del Nacionalsocialismo, a constituir la auténtica doctrina que ha de realizarse. Este programa—como ha dicho Hitler, en su discurso del 20 Febrero 1938—“significaba una revolución en la mayor parte de las esferas hasta aquí informadas por conceptos y principios sociales, políticos y económicos”.

¿Qué valor muestra el Programa en cuanto a su vigencia con rigor de norma base de derechos subjetivos? “No tiene la fuerza de una ley formal, pero constituye una línea directriz para decidir todos los problemas sociales del pueblo alemán, así como para resolver los problemas históricos”. Estas palabras, pronunciadas por el Ministro de Justicia, Dr. Frank, en el Congreso Jurídico celebrado en Leipzig en 1936, tienen marcado carácter de interpretación oficiosa.

48. La doctrina de Salazar.

La doctrina del Dr. Oliveira Salazar está llena de realismo. No se basa sobre conceptos abstractos, sino sobre tesis concretas, que encuentran el

apoyo del ambiente contemporáneo portugués. Si él, procedente del Centro Católico, fundador del "populismo" portugués, no sólo abandonó aquella actitud, sino que disolvió el Centro, obligándole a limitar sus actividades al terreno social, es porque, fervoroso católico, no quiere llevar a la lid pública las jerarquías eclesiásticas. Si él, monárquico de tradición, no ha restaurado la monarquía, es porque advierte el predominio del indiferentismo ante ese problema, y pretende colocar en el primer plano aquellas cuestiones que tienen vigencia más vigorosa. Estos conceptos los supo desarrollar admirablemente Salazar en su discurso del 23 Noviembre 1932. Y más tarde, el 26 de Mayo de 1936, conmemorando el X Aniversario del Alzamiento recoge, como guión de su política, los conceptos de Dios, Patria, Autoridad, Familia y Trabajo, en una exposición detallada que, buscando las raíces auténticas del 28 de Mayo, afirma: "No discutíamos a Dios y a la virtud; ni a la Patria y su historia; ni a la autoridad y su prestigio; ni a la familia y su moral; ni la gloria del trabajo y su deber". En el Manifiesto de Unión Nacional postuló esas mismas tesis, e incorporándolas a la Constitución y al Estatuto del Trabajo Nacional.

¿No hay un programa en la política portuguesa? Puede advertirse un programa en la Constitución, que ha tomado del tipo de las flexibles un cierto carácter de norma de un Estado de Movimiento al decidir que cada diez años habrá de revisarse y que el Jefe del Estado puede provocar esa revisión antes de plazo, apenas trascurra un lustro.

49. La lección austriaca y el contraejemplo chino.

Hay quien cree que Austria desapareció sencillamente por el poder de Hitler, pero no se paran mientes en el hecho de que precisamente el poder de Hitler es—y era fundamentalmente bajo Dollfuss y Schuschnigg—un poder espiritual ejemplar. Y menos todavía en otro hecho: la inconsistencia del llamado Frente Patriótico, verdadera coalición gubernamental sin apoyos orgánicos. ¿Hasta qué punto se hubiera resistido en Austria a la incorporación si el Frente hubiera sido un verdadero partido nacional totalitario? Y sobre todo, ¡qué rápida fué la incorporación! Parece que todos suspiraban por unirse a un Movimiento que les habían pintado terrible.

¿Qué era el Estado austriaco de Dollfuss? No era desde luego una organización unitaria. El Canciller había conseguido reunir diversos grupos políticos. En el primer mitin, celebrado en Viena el 11 Septiembre 1933, se afirma un programa: Austria "como Estado alemán socialcristiano con fundamentos corporativos y bajo una dirección fuertemente autoritaria". La ley de 1 Mayo 1934, señaló como objetivo del Frente la concentración política de todos los súbditos, de acuerdo con aquellas ideas. El Frente fué configurado en 21 Mayo 1936 como propio portador de una voluntad política informadora. No había una doctrina. Sin doctrina no pudo haber Partido, y sin Partido no pudo construirse el Estado que Dollfuss soñaba. La experiencia austriaca es fundamental y merece un estudio detenido para escarmiento de quienes todavía prefieren las uniones a las unificaciones.

Y el contraejemplo viene de China. El Kuomintang, construido con analogías al tipo europeo de Partido Unico, ha sido la vigorización de la Chi-

na de Chan-Kai-Shek. Este Partido nacional mantiene los tres principios del pueblo, a saber: el de la raza (nacionalista), el de la vida (socialista) y el de los derechos del hombre (liberal), a los que apoya el Estado mediante los cinco poderes de la Constitución (legislativo, ejecutivo, judicial, de control y de examen). El vigor de esta Constitución estriba en gran parte en la eficacia judicial inmediata de los principios, que pueden ser invocados por cualquier ciudadano como base de derecho subjetivo. ¿Nos damos cuenta de lo que ésto ha podido significar ante el hecho de la guerra con el Japón? Importa que meditemos a menudo sobre la eficacia de la doctrina.

Sobre el Caudillo español, *R. M. de Hornedo*, Virtudes raciales primitivas en torno al Caudillo y su reflejo en la hora presente (Razón y fé, diciembre 1938); *R. Fernández Cuesta*, Discursos (1939); *José Antonio Primo de Rivera*, Discursos, (Obras, I); *Onésimo Redondo*, El Estado Nacional (1938); *Dionisio Ridruejo*, La Falange y su Caudillo (FE, marzo-abril, 1938); *E. de Tejada Spínola*, La figura del Caudillo (Sevilla, 1939). Sobre la Constitución futura, *Santaló*, Introducción a la Política del Imperio Nuevo (1938).

La bibliografía italiana sobre el Duce lo estudia principalmente en relación con la ley del Jefe del Gobierno, Cf. *Agresti*, La forma di governo nello Stato fascista (Roma, 1936); *D'Alessio*, Forma e spirito della nuova costituzione italiana (Lo Stato 1930); *Bodda*, La Corona (1931); *Coco*, La Legge sul Primo Ministro nei lavori preparatori (Riv. dir. pubb. 1926); *Guarneri*, Il Capo del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano (1932); *De Francesco*, Leggi costituzionali fasciste e forme di governo (Riv. dir. pubblico 1931); *Costamagna*, Diritto pubblico fascista (1934); *Macedonio*, La legge sul Primo Ministro (1934); *Panunzio*, Il Consiglio Nazionale della Corporazioni (Lo Stato, 1930); Teoria generale dello Stato fascista (1937); *Sailis*, Considerazioni e note sul Consiglio dei Ministri italiano (Sacer, 1936) *Ranalletti*, Il Gran Consiglio (Riv. dir. pubb. 1933).

Con respecto al Führer alemán, *E. Becker*, Diktatur und Fuehrung (1935); *H. G. Brause*, Kunst der Fuehrung (Posdam, 1938); *R. Hoehn*, Die Wandlung im staatsrechtlichen Denken;—Der Fuehrerbegriff im Staatsrecht (Deutsches Recht, 1935) *E. R. Huber*, Verfassung (1937); *H. Krueger*, Fuehrer und Fuehrung (1934); *P. Ritterbusch*, Der Fuehrer und Reichskanzler, des deutschen Volkesstaatsoberrhaupt (1934); *Schmitt*, Staat, Bewegung, Volk (1934). Los conceptos más generales sobre el programa en *Feder*, Der deutsche Staat (Munich, 1932).

Para Portugal, cf. *A. Ferro*, Salazar le Portugal et son chet (Paris, 1935); *Pereira dos Santos*, La constitution sociale et politique portugaise (Paris, 1935) *Hans Paeschke*, Oliveira Salazar's Portugal (Die Tat, 1939); *L. Teixeira*, Perfil de Salazar (Lisboa, 1938); *G. de Reynold*, Portugal (Paris, 1936).

Sobre Atatürk, *Tongas*, Atatürk et la vrai visage de la nouvelle Turquie (Paris, 1936); *Schopen*, Die neue Türkei (Leipzig, 1937); *Melzig*, Kemal Atatürk (Frankfurt, 1938).

CAPITULO DECIMO

EL JEFE Y EL CONSEJO

50. El Caudillo y el Consejo en el Estado Nacionalindianista.

La primera disposición legal que se ocupa del Caudillo español, es la Orden del 28 de Septiembre de 1937, que establece la Fiesta Nacional del Caudillo, para conmemorar la elevación de Franco a la Jefatura del Estado.

En dicha Orden se exalta al Caudillo en su doble cualidad de Jefe del Ejército y del Gobierno, sin que se mencione el carácter de Jefe del Partido; "por su insuperable dirección de la campaña como Generalísimo"—dice el texto—, y por "las excepcionales dotes de gobernante". En estas dos cualidades, sin embargo, se da cabida ya al más amplio concepto de Jefe supremo y total. Y el concepto se afirma en la Ley de 30 de Enero de 1938, cuyo artículo 16 determina que "la Presidencia del Gobierno queda vinculada al Jefe del Estado".

En cuanto al Partido, los Estatutos publicados por el Decreto 313, dan al Jefe de la Falange un carácter peculiar de adhesión al Movimiento. No se elige, ni se sustituye porque sea otro el Jefe del Estado, sino que él mismo "designará secretamente su sucesor, el cual será proclamado por el Consejo en caso de muerte o de incapacidad física" (art. 42). Lo que trae la consecuencia de que el Jefe del Movimiento, Caudillo del Nuevo Ré-

gimen, tiene los cargos estatales a consecuencia de su posición dentro del partido y en virtud de la obra de liberación de España. Es ese Jefe de que hablaba Onésimo Redondo, que ha sabido ganar al pueblo por la previa creación de un ejército de patriotas.

El Caudillo no es un dictador. Ya hemos notado que el Régimen nacionalsindicalista no es una dictadura. Esta no pasa de ser una etapa, una transición. Onésimo Redondo, que pedía un Caudillo, se enfrentaba contra la posibilidad de que se levantase un dictador: "Tan impura es la aberración mítica de la soberanía parlamentaria—dijo—como la confianza mesiánica en un dictador"... Y para que el Caudillo no pueda asimilarse al dictador, hay sólo dos caminos: que sea parte de un régimen orgánico, o que venga a constituir un auténtico Héroe.

Evidentemente—y la doctrina no lo recata—hay que distinguir, incluso en casos como el de Italia, el Caudillo del Dux, el Jefe del Conductor. El Caudillo, como eje de todos los poderes y representación del Movimiento, es una figura normal de un régimen con caracteres normales de sistematización y funcionamiento. El Dux—desde luego en el caso de Mussolini, que ha servido para teorizar—, es una figura extraordinaria. Evidentemente, para crear un sistema, hace falta un Héroe. Pero para seguirlo, para continuarlo, para darle la savia cotidiana, no. Mussolini es un Héroe mientras consigue levantar su Régimen, porque por lo menos hasta 1928, una figura vulgar no hubiera podido hacer, por mucho apoyo de la Nación que tuviera, lo que hizo Mussolini desde Octubre de 1922, y antes, casi desde que los granaderos de las trincheras deseaban ser mandados por él. De Hitler pueden decirse palabras semejantes, y en cuanto a Franco, su genio no cabe dentro de una concepción normal: es un Héroe

también. Pero debemos ponernos en guardia contra ciertas argumentaciones generalizadoras.

La exaltación de Mussolini principalmente ha hecho elaborar sobre su misma figura construcciones de tipo teórico que no son exactas, y cuyo aprovechamiento por la ciencia jurídica podría traer consecuencias desastrosas. Pecan de esta parte casi todos los que han aludido a la figura del Caudillo en los distintos regímenes de tipo fascista. Que se trata de una afirmación circunstancial, deja verlo incluso algún pasaje de nuestro José Antonio, quien al configurar como Héroe griego al hombre que consigue ser Caudillo, habla de "dictadores geniales que han servido para sustituir al Estado". Se comprende fácilmente que José Antonio no pudo hablar en tesis general, porque ello equivaldría a decir que ni Alemania ni Italia tienen "Estado". Lo que sin duda quiso decir fué que estos grandes hombres, figuras de excepción, habían conseguido subrogarse en el Estado mismo, conquistándolo—lo diremos con palabras que recuerden el amor—en términos de una entrega absoluta, como mujer seducida que deja de ser individualidad aislada para subsumirse en el amante.

Análoga posición ha sido sostenida también por Fernández Cuesta, por más que aquí recuerde a Panunzio y venga a dulcificar la posición dando entrada al elemento providencial. El Caudillo—ha dicho—no es un jefe de Gobierno, ni un dictador vulgar. Es "el Jefe carismático, el hombre señalado por el dedo de la Providencia para salvar a su pueblo. Figura—añade—más que jurídica, histórica, filosófica, que escapa de los límites de la ciencia política para entrar en el de héroe de Carlyle o en el del superhombre de Nietzsche".

Ahora bien; Fernández Cuesta, como José Antonio, no pueden referirse así al Caudillo, figura de un régimen normal, sino al Caudillo iniciador de la Revolución. artífice de la arquitectura del Esta-

do nuevo. Y lo dice en estas palabras: El Caudillo "es sencillamente la idea que mueve al todo, el progreso revolucionario "gestador" del nuevo Régimen, y es en España, Francisco Franco".

En la Falange, según sus Estatutos, el Caudillo personifica todos los valores y todos los honores del Movimiento. "Como autor de la Era Histórica donde España adquiere las posibilidades de recobrar su destino y con él los anhelos del Movimiento, el Jefe asume en su entera plenitud la más absoluta autoridad", y responde ante Dios y la Historia (art. 47). Tan lleva unida a sí esta autoridad, que a él corresponde designar sucesor, que recibirá las mismas dignidades y obligaciones (artículo 48).

Y es que como ha notado Dionisio Ridruejo, "no puede haber una fe operante sin estar encarnada en un Jefe, confiada a una voz de mando", y para su eficacia el Caudillo "no está limitado más que por su propia voluntad". Elías de Tejada insiste en el carácter de director, que es esencial al Caudillo. "Si se deja dirigir, ya no será Caudillo sino acaudillado, ya no cumplirá su peculiar misión de Jefe de una aventura histórica y universal". Por otra parte—añade—"simboliza la continuidad y la unidad de la historia española". El Caudillo mismo, en la sesión de 5 junio 1939, ha recabado para sí, ante el Consejo Nacional, como imperativo indeclinable y exclusivo la "interpretación constante" de los veintiséis Puntos.

Al Jefe antiguo, Dux o Rex, se le une la curia regia, los "comites palatii". La Curia fué en Castilla y León—dice Hinojosa—, "rueda importantísima en el mecanismo político". El "Poema del Cid" nos recuerda a los Condes de Carrión, consejeros del Rey:

ellos son muy orgullosos
e an part en la Cort.

Los diplomas rezan: "cum consilio nobilium virorum regni mei", "tam regio robore, quam nobilium meorum subscriptionibus". Cuando en nuestro Decreto 225, piedra angular del Régimen nacionalsindicalista, se habla del Consejo Nacional que "conocerá de los grandes problemas nacionales que el Jefe del Estado le someta", ¿cómo se nos recuerda la estirpe tradicional de nuestros antiguos Consejos! ¿No casi repite las palabras de las Partidas—"E ellos han aconsejar al Rey en los grandes fechos"?

Los Jefes crean Consejos. Máximo poder, máxima unidad, pero también cuidado máximo en tener buenos asesores. El Gran Consejo Fascista es ejemplar como Consejo Nacional de un Régimen. También tiene tal carácter, aunque a primera vista aparezca como un órgano del Partido, el llamado Consejo Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las Jons. El Consejo creado por el Decreto del 19 de abril de 1937, nació, de acuerdo con los Estatutos, por Decreto de 19 de octubre de 1937. Estaba compuesto de cincuenta miembros, designados por el Caudillo entre los militantes de la Falange. Ahora bien, esta composición ha variado una vez conquistada la Paz y disuelto el primer Consejo. Tras la Victoria, han pasado a formar parte del Consejo, los Delegados nacionales de Servicios, el Secretario general, el Presidente y el Vicepresidente de la Junta Política, Jefe de la Milicia, algunos militantes de méritos y servicios excepcionales y "las personas que el Caudillo designa por razón de sus jerarquías en el Estado" (Estatutos, art. 35). ¿Puede imaginarse que intervengan en un órgano puramente del Partido personas que ni siquiera son llamadas con la exigencia de que sean militantes, y que acuden precisamente para representar al Estado? Está ahí la prueba de que el Consejo Nacional es un órgano no del todo ajeno al Estado, es decir,

concretamente un órgano auténtico del Régimen.

La competencia del Consejo Nacional aparece mucho más obligada si se configura así. No porque cuanto se le atribuye sea ajeno a la tarea del Partido, cuyo primer deber es difundir en el Estado el nuevo espíritu, sino porque representa vigorosamente cuanto puede interesar al Régimen mismo. En efecto, según el art. 41 de los Estatutos, el Consejo Nacional de Falange ha de decidir: 1. Las líneas primordiales de la estructura del Movimiento; 2. Las líneas primordiales de la estructura del Estado; 3. Las normas de ordenación sindical; 4. Todas las grandes cuestiones nacionales; 5. Las grandes cuestiones de orden internacional.

Durante la Guerra no ha podido ser así: intervino en el Fuero del Trabajo, pero no en la Ley de Administración Central, que constituye exactamente línea primordial de la estructura del Estado. Por otro lado, en 1938 no se celebró la reunión estatutaria del 17 de julio.

Con la Victoria, estas vacilaciones pierden toda viabilidad. El nuevo Consejo nacional entra a constituirse como órgano esencial e inesquivable caracterizado con toda vigencia, según el propio Caudillo ha venido a afirmar ante sus Consejeros en la sesión del 5 de junio de 1939.

Por otro lado, la nueva constitución de la Junta Política, en virtud del Decreto de 31 de julio de 1939, dotando a este órgano de especiales agilidad y competencia y señalándolo como eje del gobierno del Partido, proporciona al Movimiento una eficaz estructura. La Junta, integrada por un Presidente, un Vicepresidente y diez consejeros y teniendo por miembros natos al Vicesecretario y a los Delegados Nacionales de Exterior, Educación Nacional, Prensa y Propaganda, Sección Femenina, Sindicatos y Organizaciones Juveniles, se ocupa del estudio y la orientación de cuantos problemas tengan interés para la marcha general del Movimien-

to, la presentación al Jefe Nacional de cuantas proposiciones e iniciativas estime convenientes en todos los órdenes, el asesoramiento al Jefe Nacional en cuantos asuntos éste le someta y el examen y censura de cuentas, así como la aprobación de presupuestos. (Art. 31).

La Ley de 8 de agosto de 1939 viene, además, a reforzar la actitud unitaria del mando al plantear "una acción más directa y personal del Jefe del Estado en el Gobierno", suprimiéndose la Vicepresidencia (art. 3.º), y haciendo recaer en la Jefatura del Estado no sólo la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general, sino proclamando que en ella radican "de manera permanente las funciones de Gobierno, cuyas disposiciones y resoluciones adopten la forma de Leyes o Decretos, podrán dictarse, aunque no vayan precedidas de la deliberación del Consejo de Ministros cuando razones de urgencia así lo aconsejen". (Artículo 7.º).

51. Duce y Gran Consejo en el fascismo.

Los Estatutos del Partido Fascista, declaran en su artículo 5, que el Partido desarrolla su acción "bajo la guía del Duce". Éste es, pues, figura que ocupa la posición excepcional del Jefe que posee en grado sumo el poder de organización del Partido. Configuración que no responde, sin embargo, a la originaria. En los Estatutos de 1929, el Duce era el primer jerarca; ahora el primer jerarca es el Secretario, pues el Duce está—como el Caudillo español, artífice supremo—sobre el Partido mismo. Téngase en cuenta que al Duce corresponde la designación de Secretario, cuyo titular es propuesto por él al Jefe del Estado. Es situación jurídica notoriamente distinta de aquélla por la cual propone al Rey un ministro; mientras ésta está

vinculada al Monarca, aquélla no, pues el Duce tiene, como jefe directo del Partido, su dirección suprema.

El problema de la relación entre las jefaturas del Gobierno y del Partido que dan nacimiento en Italia a la figura jurídica del Caudillo, cuenta ya con abundante bibliografía. Para Panunzio, el jefe del Gobierno es Caudillo "sólo en cuanto es jefe del Partido"; preside el Gran Consejo por su carácter político, más que por su posición jurídica. Bodda ha mantenido la preeminencia de la Monarquía a este respecto, por estimar que aunque el Jefe del Partido es quien preside el Gran Consejo, éste adquiere tal cualidad "*ipso iure*" en el momento en que la Corona le designa para ocupar la Jefatura del Gobierno.

Realmente, en el derecho positivo italiano (Ley de 24 de diciembre de 1925), el primer ministro secretario de Estado, es cargo destacadísimo. No sólo tiene especiales poderes como presidente, sino que representa al Gobierno y mantiene la unidad de dirección. El Jefe del Gobierno es responsable directamente frente al Jefe del Estado. Con esto—negación de responsabilidad frente al Parlamento—se ha reconocido por la exposición de motivos de aquella ley que las relaciones entre Gobierno y Parlamento eran "de carácter esencialmente político", lo que para Santi Romano podría significar que tales relaciones "ya no son jurídicas".

Esta actividad parlamentaria que decae se hace contemporánea de la actividad del Gran Consejo, que crece. Téngase en cuenta sobre todo la fundamental disposición del artículo 13 de la Ley de 9 de diciembre de 1928, que habla de la lista de nombres que ha de elaborar el Gran Consejo para hacer presente a la Corona, en caso de vacante, quiénes deben ocupar la Jefatura del Gobierno, que sería también la del Partido. Se trata, por

tanto, de la sucesión del Caudillo. Esta función, que es análoga a la que ejercita el Gran Consejo proponiendo al Jefe del Gobierno nombres de ministros y de subsecretarios, tiene un relieve singular.

El Gran Consejo aparece ya ahí, no como órgano del Partido, sino como institución fundamental del Régimen. Los Estatutos de 1926, en su norma primera, hablaban del Gran Consejo como órgano del Partido. En 1929, el artículo 3.º de los nuevos Estatutos no menciona ya al Gran Consejo. No tenía por qué hacerlo, pues la Ley de 9 de diciembre de 1928 le había configurado como órgano supremo del Régimen. De ahí que para la "communis opinio" italiana, las funciones del Gran Consejo sean actualmente estatales.

El Gran Consejo se eleva junto al Jefe del Estado—síntesis personal—como síntesis colegiada que representa las grandes fuerzas de la Nación. Su función esencial—la continuidad—se ejerce mediante la designación de sucesor en la Jefatura del Gobierno y del Partido. Se relaciona con éste por el Secretario, quien transmite, por conducto jerárquico, las normas dadas por el Gran Consejo.

Como órgano supremo del Fascismo, fijaba desde Octubre de 1922, las directrices de éste en todos los campos de la vida nacional; la ley de 9 de Diciembre de 1928, modificada y complementada por la de 14 de Diciembre de 1929, hace pasar el Gran Consejo a la categoría de órgano constitucional encargado de coordinar e integrar todas las actividades del Régimen. Forman parte de él, por razón de sus cargos o jerarquías, el Jefe del Gobierno, los Presidentes de las Cámaras, los Ministros de Asuntos Exteriores, Interior, Justicia, Hacienda, Educación Nacional, Agricultura y Corporaciones, el Presidente de la Academia de Italia, el Secretario y los Vicesecretarios del Partido, el Comandante General de la Milicia, el Pre-

sidente del Tribunal de Defensa del Estado, los Presidentes de las Confederaciones nacionales fascistas. A título personal, participan los Cuadrumviros de la Marcha sobre Roma. El nombramiento es hecho por Real Decreto, a propuesta del Jefe del Gobierno. También pueden ser designados por un trienio y con posibilidad de nuevo nombramiento, los exministros o exsubsecretarios del Partido después de 1922, que hayan servido beneméritamente a la Nación y a la Revolución.

El Gran Consejo es el asesor normal del Gobierno en materia política. Aunque sus dictámenes no obligan hay, en todo caso, consultas facultativas y consultas obligatorias. Entre las primeras las cuestiones de interés nacional, político, económico y social, suscitadas por el Jefe del Gobierno. Las obligatorias se refieren a cuestiones de carácter constitucional, ya actos del Gobierno, ya proyectos de ley. Entre ellas figuran las que se refieren a la sucesión del Trono, las prerrogativas de la Corona, la composición y el funcionamiento del Gran Consejo y de las Cámaras, las atribuciones del Jefe del Gobierno, la facultad del Ejecutivo para emanar normas jurídicas, el ordenamiento sindical y corporativo, las relaciones con la Santa Sede, los tratados internacionales que lleven a modificación del estatuto territorial o a renuncia de adquisición de territorios. Las atribuciones peculiares son taxativamente: formación de la lista de jefes del Gobierno, de ministros y de subsecretarios; lista de diputados, y deliberaciones sobre el Partido, es decir, Estatutos, normas, cargos del Directorio, etc.

52. Caudillo y séquito en el nacionalsocialismo.

Aunque Feder, máximo teorizante inicial del Partido, diga que el Führer es "un dictador ro-

mano, rodeado de colaboradores y ayudantes", la verdadera tradición de la figura del Caudillo alemán es puramente germana. Procede de la antigua jefatura de los pueblos nórdicos, en la que el jefe político y el jefe militar se unían, en un ambiente de adhesión del pueblo tan intenso que mostraba un plebiscito constante. Tácito, cuando nos cuenta las costumbres germanas, y Jordanes y Sidonio Apolinar, documentan lo que era aquella jefatura. Tradición que, por otra parte, ha encontrado el enlace prusianista de un Estado de funcionarios y soldados—cuya configuración jurídica ha ocupado bellas páginas a C. Schmitt—, dirigido por grandes Conductores.

Al Caudillo germano le sigue un séquito. La comitiva o "Gefolgschaft" se une a él como selección del pueblo, nobleza conquistada. El séquito es, más que un Consejo, un verdadero Estado Mayor. Y de ahí por qué la configuración de los Consejos varía en el Nacionalsocialismo frente al Fascismo, porque allí es la tradición germana la que revive.

La teoría general de la dirección o jefatura política ha sido estudiada por Schmitt en forma comparada. Buscando una explicación a la expresión de señorío característica de la tradición alemana, no encuentra posible el uso del parangón del piloto, el pastor y el caballero. Esta última imagen—dice—va bien para Francia, porque explica la actitud imperial de ese soldado italiano que se apoderó del Estado francés, al propio tiempo que señala la necesidad interna de normalización y legitimación. Ninguna de esas imágenes, sin embargo, acoge esencialmente aquello que debe entenderse como jefatura política en el sentido alemán de la palabra. Este concepto—subraya Schmitt—proviene enteramente del pensamiento substancial y concreto del Movimiento nacionalsocialista. Es sintomático que toda imagen fracase. Nuestro

concepto no descende de alegorías o representaciones barrocas, ni de una "idee generale" cartesiana. "Es un concepto del inmediato presente y de presencia real. Por esta razón implica asinismo, como exigencia positiva, una absoluta igualdad de raza entre caudillo y séquito. Tanto el contacto continuo e infalible entre el caudillo y séquito como su reciproca fidelidad, se fundan en la igualdad de estirpe. Solamente ésta puede impedir que el poder del Caudillo se convierta en tiranía y arbitrariedad. Solamente ella es la razón de la diferencia que le separa de todo dominio de una voluntad heterogénea, aun cuando inteligente y ventajosa". De ahí deduce Schmitt como supuesto y base indispensable para fijar el concepto alemán de jefatura, el de igualdad de estirpe.

Por lo demás, la figura alemana del Caudillo arranca de la del Jefe del Partido. Hitler es Canciller del Reich, Jefe del Estado y Caudillo del Movimiento. Para configurarlo orgánicamente así, se ha modificado el concepto de canciller. Ya no es el órgano estatal construido por los constituyentes de Weimar en conexión con el Parlamento. Además, tras la muerte de Hindenburg, una ley, la de 1.º de agosto de 1934, puntualiza la figura del Soberano incorporándola a la del Caudillo. Por consiguiente, el cargo aparece ahora como "nuevo", según ha sabido subrayar Huber. No es una combinación de los de Jefe del Partido, Canciller y Presidente. La Ley de 1.º de agosto de 1934 le atribuye competencias aisladas y aumenta las atribuciones de la cancillería, pero aun antes de ser Canciller, Hitler era ya Caudillo. Lo que ocurre es que de tres cargos distintos se ha hecho hoy una función unitaria, basada sobre el principio de que el Estado alemán es un Estado de Movimiento, esto es, que el Partido constituye la comunidad política, en la que se agrupa el pueblo en unidad de voluntades. Huber afirma que la

jefatura jerarquizada del Partido mantiene hoy su primitivo carácter, y que la jefatura jerarquizada del Reich es su necesaria consecuencia. La relación queda afirmada por Huber en estos términos: "Adolfo Hitler no es Caudillo del Partido por su calidad de soberano, sino que en tanto que es Caudillo del Movimiento es también Caudillo del Estado y del Pueblo". Resume así, por su procedencia del Movimiento y por su actitud en el Estado, la dirección política, siendo su poder el verdadero "poder político" del Nuevo Reich.

A esta nueva idea del Caudillo pertenece como natural corolario la institución de su Consejo, en el sentido tradicional de séquito o comitiva. Esta está al lado del Caudillo, apoyándole y ayudándole. El principio de que toda responsabilidad es del Caudillo hace que el Consejo no pueda descargarle de tal peso, ni deba representar y expresar ningún dualismo. Cesan así, comenta Schmitt, las viejas contraposiciones, y el Consejo dista de poder asimilarse representaciones de tipo superado (representación popular contra el Gobierno, representación municipal frente al Ayuntamiento, etcétera). Por eso el Consejo ha de ser escogido por el Caudillo mismo y en forma alguna puede proceder de fuera o de abajo. De este modo se elabora una estructura, cuyo esquema puede ser llevado a otros campos. El primero ha surgido sobre el Consejo prusiano, obra admirable de Goering, trasladada luego a la esfera de la administración. La ley prusiana de 17 de Junio de 1933 viene a condensar el ejemplo de un desarrollo general del principio de jefatura jerarquizada, esencia del Estado Nuevo.

53. Los Caudillos de Portugal y Turquía.

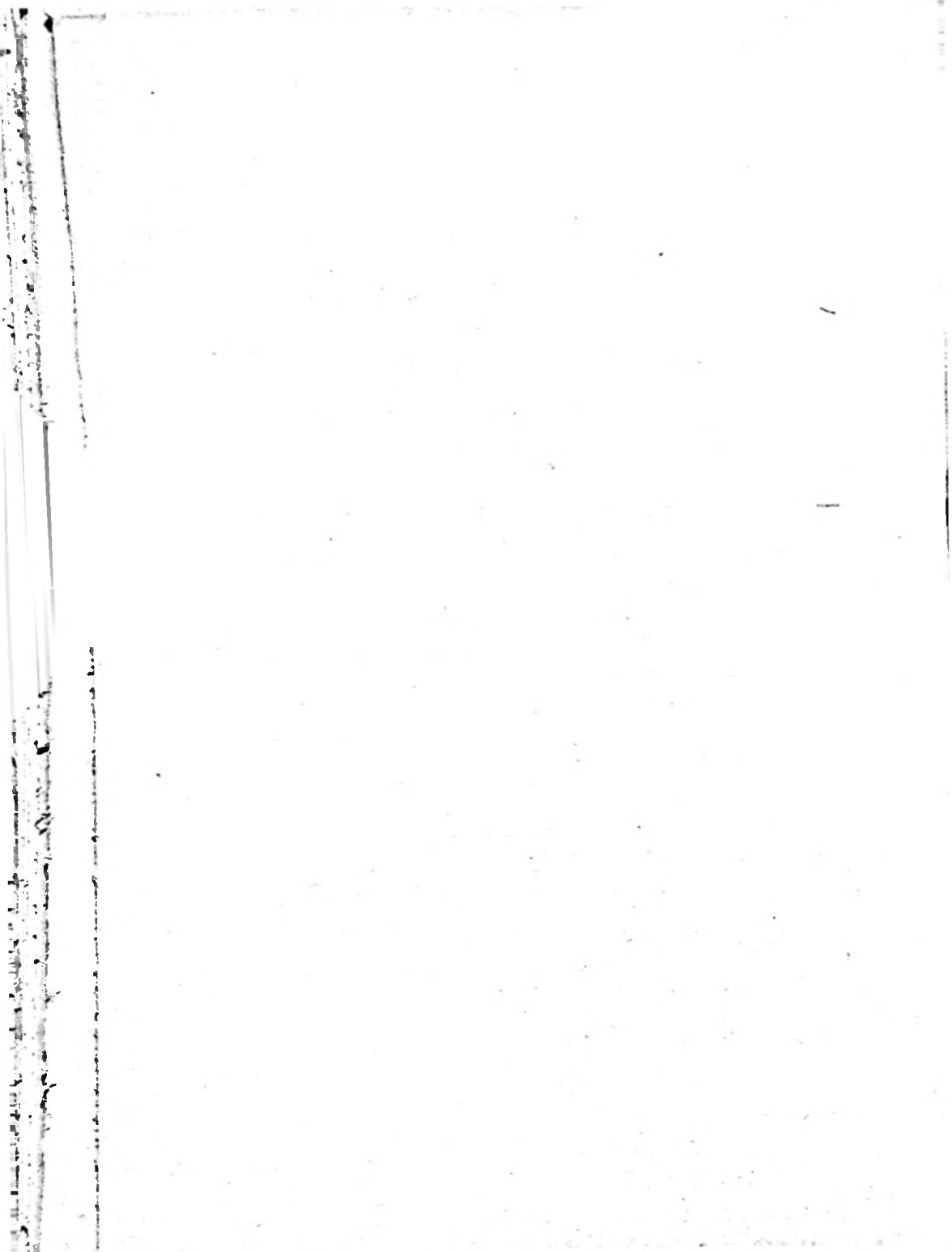
Portugal inaugura su Nuevo Régimen a través de un golpe militar dirigido por el mariscal Da Costa, que constituye, con el general Carmona y Mendes Cabeçadas, un Triunvirato. Desde el mes de Junio de 1926, Carmona asume la jefatura del Gobierno, y en 25 de Mayo de 1928, pasa a la Presidencia de la República.

¿Quién es el Caudillo portugués? Evidentemente, Carmona. A él corresponden todos los poderes. Designa libremente al Presidente del Consejo y a los ministros, y puede disolver la Asamblea Nacional, de tal modo que resulta el verdadero Presidente de toda la actividad política nacional. Jefe de hecho y de derecho. Por otra parte, el poder del Jefe del Gobierno no es un poder organizado como jefatura jerarquizada, sino que más bien deriva de una concentración de servicios y competencias: así, en la Presidencia del Gobierno, se encuentran tres Secretariados importantes: Defensa Nacional, Propaganda y Corporaciones y Previsión. De ese modo, el Dr. Oliveira Salazar lleva directamente cuanto resulta neurálgico al Régimen. De ahí el carácter y prestigio de su jefatura, a parte de la labor en Hacienda que permite configurarle como libertador de su nación, si no en el terreno militar, sí en el económico y financiero. Como ha notado Paschte, Salazar tiene autoridad sin la característica totalitaria.

El Caudillo turco nace con similitudes notorias con el Caudillo español. Generalísimo de los ejércitos que libertan Turquía, se rebela contra las con-fabulaciones anglo-helénicas que habían decretado la supresión de su país como nación independiente. Y conquista el territorio, y conquista el pueblo. Suprime el Califato y se erige Presidente de la República. Jefe del Estado, del Ejército y del Par-

tido, es auténtico Jefe de Turquía. La jefatura del Gobierno queda separada, pero bajo un control doblemente directo, estatal y político, ya que el Secretario del Partido es miembro del Gabinete.

Muerto Ataturk el 10 de Noviembre de 1938, procedióse a designar sucesor, de acuerdo con el artículo 34 de la Constitución de 1933. Ishmed Inonu, que sustituye a Mustafá Kemal, representa ya al Caudillo-político, que sucede al Caudillo-héroe (Segundo caso en la historia contemporánea, después de la sucesión Lenin-Stalin, y mentis rotundo a los que solían preguntar como argumento supremo "¿qué pasará después?").



Literatura española, (*S. Torrente Ballester*), *La Falange como partido único* (Servicio Nacional de Propaganda, Barcelona, 1939); *La Falange local* (Propaganda de FET y de las Jons de Valencia, Zaragoza, 1938) *R. Fernández Cuesta*, *Discurso de Valladolid* (23 octubre 1938); *José A. Primo de Rivera*, *Discursos, Obras 1*; *Onésimo Redondo*, *El Estado nacional*; *Serrano Suñer*, *Siete discursos* (1937). *Trabajos de conjunto*, *Beneyto y Costa*, *El Partido* (Zaragoza, 1939), y *Manoilesco*, *El Partido único* (Zaragoza, 1938).

Sobre el Partido Fascista, *Ambrosini*, *Il Partito Fascista e lo Stato* (Roma, 1934); *E. Bazán*, *La Milizia voluntaria* (*Civiltà Fascista*, 1929); *Colucci*, *Stato e Partito* (*Rassegna Nazionale* (Roma, 1937); *Bonaudi*, *Il Governo rappresentativo* (en *Studi per Cammeo*); *Donati*, *Appunti di diritto costituzionale* (1929); *Feroci*, *La natura giuridica del PNF* (*Riv. ital. dir. pen.*, 1932) *Jemolo*, *Natura giuridica del PNF* (*Riv. dir. pubb.* 1929); *A. Marpicati*, *Il Partito Fascista* (Bologna, 1938); *A. Melchiori*, *Milizia Fascista* (Roma, 1929); *S. Panunzio*, *Teoria generale dello Stato Fascista* (Padua, 1937) *O. Ranalletti*, *Il Partito Nazionale Fascista dello Stato italiano* (*Riv. dir. pubb.* 1936); *A. Renda*, *Lo Statuto del PNF commentato* (Turín, 1938); *Volpicelli*, *Prólogo a la trad. ita. de Schmitt* (Florenzia, 1935); *Salemi*, *L'organizzazione nazionale del Partito Fascista e i suoi rapporti con lo Stato* (*Riv. dir. pubb.* 1936); *Zangara*, *Il Partito e lo Stato* (Catania, 1935);

Sobre el Partido Nationalsozialista, *Das Recht der NSDAP* (Munich, 1938); *W. Buch*, *Die Parteigerichtsbarkeit der NSDAP* (*Deutsches Recht*, 1934); *E. R. Huber*, *Verfassung* (1937);—

Ist ein S. A.—Führer Beamter im Sinne des § 359 STGB (Deutschen Juristen Zeitung, 1935); *R. Freisler*, Gedanken zum Schutz der Bewegung im neuen Strafrecht (1936); *Frick*, Partei und Staat (Deutsches Verwaltung, 1934);—Die Gesetze gegen die Neubildung von Parteien und zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat, (NS—Handbuch, 1935); *Hoen*, Partei und Staat (Deutsches Recht, 1935); *Koellreutter*, Deutsches Verfassungsrecht, (1935); *A. Lingg*, Die Verwaltung in der NSDAP (Deutsches Recht, 1936); *H. Muth*, Die rechtliche Stellung des Stellvertreters des Führers (Deutsches Recht, 1935); *G. Neesse*, Partei und Staat, 1936;—Ist ein Traeger der Bewegung Beamter im Sinne des STGB (Jugend und Recht, 1935);—Das Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat (1934); *Stuckart*, Partei und Staat (Deutschen Juristen Tag, 1936); *R. Pelloux*, Le parti national-socialiste et ses rapports avec l'Etat (Paris, 1936); *A. Rosenberg*, Wesen, Grundsätze und Ziele der NSDAP (Munich, 1938); Cf. también *H. Kelsen*, La dictature du parti (Rapport a la sesión del Inst. Internacional de Derecho Público, 1934). En español, *Beneyto*, Nacional-socialismo (Barcelona, 1934).

Sobre Turquía, *Sukru Kaya*, Discours (Angora, 1938); *Schoper*, Die neue Türkei (Leipzig, 1936).

Sobre Portugal, *Salazar*, Discursos (Coimbra, 1935-1937).

CAPITULO UNDECIMO

EL PARTIDO

54. La Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

A partir del 18 de Julio, el régimen liberal y parlamentario quedaba anulado en España, porque el Alzamiento fué principalmente dirigido contra las luchas de partidos y tenía por finalidad esencial la exaltación de la unidad a los gritos de ¡Viva España! Las palabras de Hindenburg mostraban vigencia en la España anterior al 18 de Julio. Se trataba de todo—como en la Alemania prehitleriana—menos de la Nación. Ya José Antonio Primo de Rivera, en una intervención parlamentaria, había subrayado el hecho de que se hablaba en nombre de todos los intereses, pero que nadie defendía el interés de España. Por eso se concibe que una de las más urgentes medidas fuera la de la unificación política.

Las bases legales de esta tendencia van a ser aludidas aquí someramente:

Primera atención: la de disolver los grupos antinacionales. El Decreto de 13 de Septiembre de 1936, declaró fuera de la ley a todos los partidos y agrupaciones políticas o sociales que des-de la convocatoria de las elecciones celebradas el 16 de Febrero integraron el llamado Frente Popular, así como cuantas organizaciones tomaron parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperaban al Movimiento Nacional (art. 1), decretándose la incautación de sus bienes (art. 2).

Segunda medida: imponer una tregua a la actuación política de los partidos nacionales. Por el Decreto de 25 de Septiembre de 1936, se determina la prohibición, "mientras duren las actuales circunstancias", de todas las actuaciones de carácter político, y de la actividad sindical, tanto patronal como obrera, que tenga ese matiz (artículo 1). Se impide la actuación, propaganda y actividad política o sindical de cuantas personas reciban nombramientos para el desempeño de funciones públicas de autoridad o sean designadas para formar parte de comisiones o entidades administrativas o consultivas (art. 2).

Objetivo final: unificación de los partidos nacionales. Decreto de 19 de Abril de 1937. Allí se hacen las siguientes fundamentales declaraciones: "Una acción de gobierno eficiente, cual cumple ser la del Nuevo Estado Español... exige supeditar a su destino común la acción individual y colectiva de todos los españoles". Esta verdad, "es incompatible con la lucha de partidos y organizaciones políticas que, sin bien, todas, pugnan noblemente por el mejor servicio de España, gastan sus mejores energías en la lucha por el predominio de sus estilos peculiares o, por lo que es peor, en cuestiones de tipo personalista". Por consiguiente, la unificación es enderezamiento de energías. ¿Cómo? La unificación la exige el Caudillo "en el nombre de España". ¿Quién osará oponerse? ¿En qué forma la lleva a cabo? Por la constitución del Partido Nacional Unico. El recuerdo de la Unión Patriótica sigue acechando. La ineficacia de las coaliciones es notoria. Y el Caudillo declara que la nueva organización no quiere decir "ni conglomerado de fuerzas, ni mera concentración gubernamental, ni unión pasajera". Y añade: "Hay que huir de la creación de un partido de tipo artificial".

Así establece una sola entidad política nacio-

nal, "enlace entre el Estado y la Sociedad, garantía de continuidad política y de adhesión viva del pueblo al Estado", recogiendo "el calor de todas las aportaciones para integrarlas por vía de superación". El espíritu del Alzamiento ha encontrado en Falange y Requeté "los dos exponentes auténticos". De ellos ha de salir el nuevo instrumento. Con ese fin, "como en otros países de régimen totalitario, la fuerza tradicional viene ahora en España a integrarse en la fuerza nueva".

Y el artículo 1.º declara: "Falange Española y Requeté, con sus actuales servicios y elementos, se integran, bajo mi Jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional que, de momento, se denominará Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

El artículo 2.º define el carácter del Partido y su tarea: "Esta organización, intermedia entre la Sociedad y el Estado, tiene la misión principal de comunicar al Estado el aliento del pueblo y de llevar a éste el pensamiento de aquél a través de las virtudes político-morales de servicio, jerarquía y hermandad".

El gobierno de la Falange encuentra a su cabeza al Jefe del Estado, al Secretariado o Junta Política y al Consejo Nacional (art. 2). A la Junta le corresponde "establecer la constitución interna de la entidad para el logro de su finalidad principal, y auxiliar a su Jefe en la preparación de la estructura orgánica y funcional del Estado, y colaborar, en todo caso, a la acción de gobierno" (art. 2, párrafo 2). El Consejo "conocerá de los grandes problemas nacionales que el Jefe del Estado le someta, en los términos que se establecerán en disposiciones complementarias" (art. 2, párrafo 4).

Pertenecen al Partido como miembros originarios y por derecho propio, quienes el 20 de Abril de 1937, poseían carnet de la vieja Falange o del Requeté. Los demás españoles podrán ingresar

"previa admisión (art. 1, párrafo 3). Posteriormente, se ha enlazado al Ejército, formando parte de él, "de jure", los oficiales.

Las milicias de la Falange y del Requeté quedan también integradas y fundidas en una sola, y a ellas se incorporan también las demás milicias combatientes (art. 3). La Milicia Nacional se organiza bajo la suprema Jefatura del Jefe del Estado, y bajo la directa de un general del Ejército y dos subjeses, así como en relación con dos asesores políticos "para mantener la pureza de su estilo" (art. 3, párrafo 3).

El Partido participará en la vida estatal mediante la intervención de sus componentes en los organismos y servicios del Estado, "mientras se realicen los trabajos encaminados a la organización definitiva del Nuevo Estado" y "para que les impriman ritmo nuevo" (art. 3, párrafo 5), y de una manera directa al través de sus órganos.

Estas disposiciones fundamentales han ido cumpliéndose. El Decreto de 22 de Abril de 1937, designó al Secretariado Político, de acuerdo con el artículo 2.º del Decreto de Unificación. El Decreto de 11 de Mayo, nombró jefe directo, subjeses y asesores de la Milicia. Otro Decreto de esa misma fecha señaló la iniciación de la anexión de las llamadas fuerzas auxiliares, haciendo depender de los jefes provinciales de la Milicia a "todas las fuerzas auxiliares que prestan servicio de orden público en pueblos y localidades de la retaguardia", es decir, las Guardias Cívicas o Ciudadanas nacidas en las distintas poblaciones. El Decreto de 4 de Agosto, aprobó los Estatutos del Partido, elevados por la Junta o Secretariado Político. En ellos, la unificación se afirma al considerar que la aportación tradicionalista es "garantía de la continuidad histórica" y que el jonsismo de la vieja Falange es "vocación, norma y estilo de la Revolución Nacional". En fin, se nombra el

Consejo y se designa Secretario (Decreto de 2 de Diciembre de 1937).

Así la obra, la unificación aparece hecha sobre el esqueleto de la vieja Falange, auténtico partido revolucionario que, con el Requeté, exaltaba la disconformidad más acusada con el perfil del sistema anterior al 18 de Julio. Una interpretación puramente jurídica nos lo deja ver así, pues de Falange Española y de las JONS es el programa y ella da "vocación; norma y estilo"; sus emblemas son declarados como propios del nuevo Partido, sus distintivos señalan las nuevas jerarquías... Y la unidad del Partido con el Estado se hace también en contacto con la vieja Falange. Se adopta su saludo; sus símbolos pasan al escudo nacional, al uniforme de la Marina... Y, sobre todo, el Punto 26 acoge la tesis de la Revolución Nacional y ésta ha de aparecer de acuerdo con cuanto constituye vocación, norma y estilo de aquélla.

No son distintas las afirmaciones ortodoxas. Fernández Cuesta dijo en la ocasión solemne del 18 de Julio de 1938: "Y si es verdad que ese instrumento, el realizador del nuevo sistema, ya no es la antigua Falange Española ni la Comunión Tradicionalista, ni ninguna de las fuerzas que en ella se han integrado, también es verdad meridiana que no es una concentración de fuerzas ni un conglomerado transitorio, sino que constituye una personalidad nueva con su jugo, su contenido doctrinal que le caracteriza y distingue y que son precisamente esos veintiséis puntos que la inspiran y que acabo de aludir".

El problema de la naturaleza jurídica del Partido español, ha sido comentado. Fernández Cuesta, en su referido discurso, ha dicho a este respecto: "Un Partido que, lejos de nacer a la sombra del Poder, amparado con su protección, ha surgido de abajo, curtiéndose en la pelea y en la adversidad. Un Partido que nada tiene que ver con

los partidos del llamado Estado parlamentario, basado en el artificio del sufragio, y que mientras se le confunda con ellos y no se le valore exactamente, no podremos comprender ni el régimen ni el nuevo Estado. Partido que es, a la par, institución e instrumento. Institución autárquica, independiente, titular de la idea revolucionaria que ha engendrado el Nuevo Estado y el que le da impulso. Instrumento constitucional del Estado, cuyo Jefe lo es también del Partido y es Caudillo del pueblo, pudiendo expresarse sobriamente las relaciones de ambos diciendo, con un agudo pensador, que el Partido es la iniciativa y el Estado la autoridad que da vida a esa iniciativa. Un Partido impregnado de un profundo patriotismo y de un auténtico sentido militar, patriotismo no de museo ni de charangas, sino sobrio y profundo que ansía que España sea rica, fuerte y poderosa, y que se opone a que desaparezcan las características de su personalidad católica, cesárea y misionera". Y añade, frente a los que sostienen una posición abolicionista trasnochada: "Yerran los que sueñan con que la Falange Española Tradicionalista desaparezca, se desvitalice, se desprestigio y quede reducida a un conglomerado extraño e ineficaz. Falange Española Tradicionalista no es una entelequia, es una realidad cada vez más fuerte... La Falange Española Tradicionalista ni es transitoria ni es interina. Tiene vocación de permanencia, es consustancial con el régimen mismo..."

Fernández Cuesta ha sabido también subrayar en su discurso de Valladolid (23 de Octubre de 1938) cuál es el papel del Partido en el Nuevo Estado. En los regímenes totalitarios—dijo—"toda clave de organización del Estado reside en el Partido. El Estado necesita para existir un punto de apoyo, una fuerza espiritual".

Para Serrano Súñer, la tarea de ordenación en Estado de la Nación española, ha de hacerse pre-

cisamente "a través del ímpetu y del pensamiento de Falange Española Tradicionalista y de las JONS", de tal modo, que la función del Partido es la de dar impulso y doctrina al nuevo Estado.

La Ley de 8 de agosto de 1939, al proclamar que deben desglosarse del Ministerio del ramo para depender del Movimiento aquellas funciones relacionadas con la actividad sindical que se estima deben recaer en la línea jerárquica del Partido, se aumenta notablemente en forma de indudable resonancia de éste. En su virtud pasan a depender del Servicio de Sindicatos de Falange Española Tradicionalista y de las JONS "todos los asuntos directamente relacionados con las actividades sindicales". (Art. 6.º)

55. El partido nacional fascista.

El Partido Fascista arranca de un movimiento intervencionista organizador, al término de la Guerra, de los Fascios de Combate. Su cerebro y su jefe natural fué Mussolini. El asalto al Poder, a través de la histórica Marcha sobre Roma, dió el resultado de un Gabinete, en el que el Partido Fascista estaba en minoría. Solamente cuatro años más tarde adquiere el carácter de Partido Único. La ley del 25 de Noviembre de 1926, disuelve los partidos y prohíbe cuantas actividades políticas y sociales no procedan del Partido Fascista. Ya entonces se habían incorporado al Fascismo los elementos que representaban la Tradición, especialmente los nacionalistas de Federzoni y los monárquicos piemonteses de De Vecchi. En 1923, la creación de la Milicia "al Servicio de Dios y de la Patria y las órdenes del Gobierno", completa la obra iniciada en Octubre de 1923, con el establecimiento del Gran Consejo, encargado de orientar la obra política.

El ejemplo italiano muestra cómo un partido revolucionario conquista el Poder y se convierte en Partido Unico de un régimen totalitario. Así, hoy este Partido es piedra angular del nuevo Estado y del nuevo Derecho público, constituyendo el proceso conductor de una revolución que pasa por etapas.

El problema de su naturaleza jurídica es especialmente objeto de discusión. Su enlace íntimo con el Estado ha hecho pensar que pudiera ser un órgano de éste. Sin embargo, es preciso reconocerle personalidad autárquica, porque negarle esto sería insertar aquél en la organización misma del Estado, convirtiéndole en órgano suyo, lo que equivaldría a abolirle. No es pues, extraño, que la "comunis opinio" italiana configure al Partido como institución de Derecho público subsidiaria del Estado y auxiliar del mismo. Viene a ser una milicia cuya labor ha sido parangonada a la de las Ordenes religiosas al lado de la Iglesia. Para Zangara, el Partido debe clasificarse entre aquellas figuras intermedias que tienen conjuntamente caracteres corporativos e institucionales; predominando los primeros, es fundada la calificación del Partido entre las Corporaciones institucionales. Es así, según la doctrina más autorizada (Chimienti, Lessano, Maraviglia, Donati, Panunzio, Ranalletti), institución constitucional.

La configuración del Gran Consejo como órgano del Régimen hace que el Partido no dependa de aquél, sino del Duce. La relación del Partido con el Gobierno arranca solamente de que la jefatura de ambos corresponde a una misma persona. Esta relación rige principalmente por el ejercicio del poder de designar y dimitir a los jerarcas.

Su relación con el Régimen estriba en el hecho de que el Partido es una institución fundamental, pero no se olvide que el Régimen es un sistema del cual el Partido es sólo una parte.

Los órganos principales del Partido Fascista, son el Consejo Nacional, el Secretario y los Jefes provinciales.

El Consejo Nacional es una asamblea de los Jefes provinciales presidida por el Secretario. Examina la actividad del Partido y recibe normas generales de ejecución. Constituye un organismo colegiado, enlace entre el secretario y los jefes provinciales.

El Secretario es nombrado por Real Decreto a propuesta del Jefe del Gobierno, en su calidad de Jefe supremo del Partido. El Secretario actúa como tal en las reuniones el Gran Consejo, y lo preside en los casos de ausencia del Jefe.

Puede participar en el Consejo de ministros, tiene voto en la Comisión Suprema de Defensa, en el Consejo Nacional Corporativo, en el Comité Corporativo Central y en el Consejo Superior de Educación; propone el nombramiento y la separación de los miembros del Directorio Nacional y de los Jefes provinciales; actúa bajo la dirección jerárquica del Duce, sometiéndose al poder propio de éste, quien puede avocar, anular y reformar los actos del Secretario; representa al Partido cerca de las autoridades, los órganos del Estado y las asociaciones sindicales; viene a ser el órgano representativo de la Nación dentro de la organización nacional fascista; es el primer jerarca del Partido y tiene en él una situación preeminente.

Ha habido cierta discusión doctrinal en torno al carácter de la participación del Secretario del Partido en los Consejos de ministros. Hablóse de si era más que ministro o bien sólo ministro sin cartera. Las precedencias en Corte dejaban lugar a dudas. Finalmente, en enero de 1937, se decidió la elevación del secretario al cargo de Ministro y la cuestión ha quedado zanjada.

Los jefes provinciales son nombrados y separados por el Duce, a propuesta del Secretario. Re-

presentan al Partido en la provincia y cuidan de vigilar la actividad de los Fascios y de las organizaciones dependientes del Partido. Para ayudarse designan inspectores políticos y administrativos. Su competencia es muy extensa: fascios juveniles, obras asistenciales, comité intersindical, oficinas de colocación, asociaciones deportivas y universitarias, curso de preparación política, etc. Convocan al Directorio provincial, mensualmente por lo menos, a fin de examinar los problemas de la vida del Partido en la provincia y "aquellos morales, sociales y económicos de la provincia" (artículo 11 de los Estatutos). De dónde arranca su competencia en problemas generales. Se relacionan con los Gobernadores, pero no existe entre ellos vínculo jerárquico, pues son órganos de administraciones diversas; y así, las decisiones del jefe provincial no pueden ser recurridas ante el Gobernador. Bien que el jefe provincial no pueda proceder en forma diversa ni mucho menos contra el Gobernador, porque éste es la autoridad política superior en la provincia y responsable de cuanto allí pueda acontecer. El jefe se ayuda del Directorio provincial, calcado del Directorio nacional o Junta política asesora. Lo componen siete fascistas propuestos por el jefe provincial y designados por el Secretario del Partido. Como órganos de enlace entre la capital y las localidades, dispone el jefe provincial de Inspectores de zona, que vigilan la actividad de los Fascios y de las organizaciones del Régimen. Su acción no sólo es inspectora, sino directiva y de colaboración hacia el fomento de las organizaciones.

56. El partido nacionalsocialista obrero alemán.

Al advenimiento del Gabinete Hitler, Alemania reunía varias docenas de partidos. Bien pronto fueron lanzados fuera de la legalidad los grupos

marxistas, tanto comunistas como socialistas, y sus soportes sindicales. Tras la disolución, sólo quedaron grupos afines de tipo nacional: Centro Católico, Nacionales-Alemanes, Partido de Estado y grupos liberales patrióticos. La ley de 14 de julio de 1933 declaró que ya solamente existía un partido: el Nacional-Socialista Obrero Alemán, y castigaba la reconstrucción de los disueltos y la formación de nuevos partidos. En realidad, la unificación fué un hecho rápido por la incorporación de los Cascos de Acero y de los seguidores de Hugenberg, monárquicos protestantes, auténticos tradicionalistas prusianistas. Los demás grupos de estirpe liberal y nacional, es decir no marxistas, tuvieron que replegarse y autodisolverse. Así sucedió con el Centro y con el Partido de Estado.

El dominio incontestable del Partido revolucionario alemán hizo sumamente fácil esta etapa. Alemania presenta, con Italia, un caso ejemplar en el proceso de conquista del Poder por un Partido revolucionario que se proclama único e impone un régimen totalitario de acuerdo con las normas que ha divulgado durante su propaganda. Esto hace que los problemas de unificación, graves en otros ambientes, desaparezcan y que los temas de Estado y Partido pierdan acritud; en parte, también, es verdad, por el concepto popularista que orienta la concepción alemana.

El Partido Nacionalsocialista, dice Schmitt, refiriéndose a este tema, está ligado de un modo indisoluble al Estado, a fuer de portador de la idea estatal. Sin embargo, nada más lejos de la hipótesis del Partido como órgano del Estado. El Partido es el cuerpo directivo que conduce al Estado y al Pueblo. La ley de 14 de julio lo configura en una posición única y exclusiva de prioridad frente a todos los intentos de hacer revivir el pluralismo anterior.

Según la ley de garantía de la Unidad de Par-

tido y Estado, de 1.º de diciembre de 1933, el Partido es una corporación de derecho público. No constituye, sin embargo, nada semejante a cualquiera de las muchas corporaciones de derecho público, y, desde luego, en grado diverso y superior. El Lugarteniente del Caudillo y el Jefe directo de la Milicia pasan a ser miembros del Gobierno del Reich, para garantizar así la más estrecha colaboración entre Partido y Estado. Por otra parte, toda la estructura estatal es una verdadera serie de enlaces personales y reales entre Estado y Partido, vinculando jefaturas y cargos estatales. El ejemplo del Caudillo, Presidente-Canciller, es imitado en la escala jerárquica.

El problema consigue una envergadura propia y se mueve dentro de un círculo auténtico, porque el poder del Partido y el poder del Estado arrancan de un mismo Poder, del Poder del Caudillo. De esta forma ha sido roto el monopolio del poder público, que hasta ahora poseía la organización burocrática estatal. Huber afirma que los titulares de cargos del Partido poseen "un poder propio que arranca del de soberanía del Caudillo".

No hay así cuestión a discutir entre Estado y Partido. Tampoco entre Partido y Ejército. Hitler mismo dijo el 20 de febrero de 1938 estas palabras decisivas: "En el III Reich es nacionalsocialista todo aquel que ocupa un puesto de responsabilidad... Todo el mundo ostenta el emblema del Nacionalsocialismo. Todas las instituciones del Reich están bajo las órdenes de la suprema dirección política. Todas están juramentadas y unidas en la voluntad y en la resolución de representar a esta Alemania Nacionalsocialista, y si fuere necesario a defenderla hasta el último aliento". En un país de tan recia tradición militar, las relaciones entre Ejército y Partido debieran ser fundamentales y podrían haber producido dentro de cualquier otra concepción un sin fin de cuestiones. Pues bien, en

Alemania un militar no puede ser miembro del Partido, y el Partido y el Ejército delimitan sus campos con las siguientes palabras del Caudillo: "El Partido asume la dirección política del Reich, y el Ejército garantiza su defensa militar... Y así como el Ejército alemán se ha entregado a este Estado nacionalsocialista con fidelidad y disciplina ciegas, de la misma manera este Estado nacionalsocialista y su Partido dirigente están orgullosos y contentos de su Ejército. En él vemos la cúspide de la educación nacionalsocialista del hombre alemán, al cual le atrae como una fuerza de encantamiento desde su juventud. La formación que adquiere en sus organizaciones políticas es completada por la instrucción y educación militares como soldado".

57. La unión nacional portuguesa.

Tras el golpe militar del Mariscal Da Costa, y una vez que el triunvirato declinó sus poderes en manos del General Carmona, Oliveira Salazar, ministro de Hacienda, empieza a influir decisivamente en la política. Su prestigio universitario y su labor al dirigir las finanzas, le colocan en primer término. Por lo pronto, actúa sobre una masa sin partido. La Dictadura declaró disueltos los partidos. Algunos políticos acudieron a colaborar con la Dictadura, otros se abstuvieron y bastantes conspiraron. Frente a ellos, Salazar, el 30 de julio de 1930, proclamó que tenía una doctrina y era una fuerza.

Nace entonces la Unión Nacional, como asociación diferente a cuanto se llama partido. Es un cuerpo organizado independiente del Estado, que tiene por objeto asegurar en el orden civil la realización y la defensa de los principios fundamentales del "Estado Novo". Estos principios son los

que incorpora a la Constitución la reforma de 1933 y que ya había anunciado Salazar en junio de 1928. El propio Salazar ha definido la Unión como reunión de los "portugueses de sano patriotismo en torno de ideas constitucionales razonables y justas". (Discurso del 30 julio 1930). Esta reunión, "no puede abandonar el campo meramente nacional y patriótico para convertirse en partido, porque eso sería criminal y, además de criminal, ridículo". No. La Unión nace por invitación del Gobierno para apoyar la Dictadura, "a fin de que ésta acabe de echar las grandes bases de reorganización nacional y prepare el futuro ejercicio normal de los poderes del Estado". Su primera manifestación tuvo lugar en 17 mayo 1931. Con ese motivo, dijo Salazar que agrupaba hombres de diversos credos y procedencias que habían encontrado en los principios de la Unión Nacional "aquel terreno común de colaboración de los portugueses, indispensable para la nueva política, la nueva administración y la nueva economía". El Decreto de 20 de agosto de 1932 reglamentó la Unión Nacional y señaló sus actividades. Salazar, el 23 de noviembre de ese mismo año, explicaba a los directivos de la Unión: "los que fundaron la Unión Nacional tenían el propósito de promover una gran reforma política, económica y social del país y con ella resolver los problemas más arduos o prepararse de cara a dificultades mayores".

Pero Unión Nacional no es un partido como el Fascista o el Nacionalsocialista, ni siquiera como el turco o el español. No puede ser totalitario, porque si lo fuese—dice Salazar (discurso 26 mayo 1934)—, tendría el significado de Partido y de Partido Unico, idea que me parece "contraria a la que representa la intervención nacional del Ejército en 1926 y todavía más a la procla-

mación de 30 julio 1930". "La Unión Nacional no es un partido—añade—, y si lo fuese no podría sin violencia ser único".

A la Unión Nacional ayuda la Juventud Portuguesa, creada por D. L. de 19 mayo 1936, y la Legión Portuguesa, milicia voluntaria de los camisas verdes, creada por D. L. de 30 septiembre de 1936.

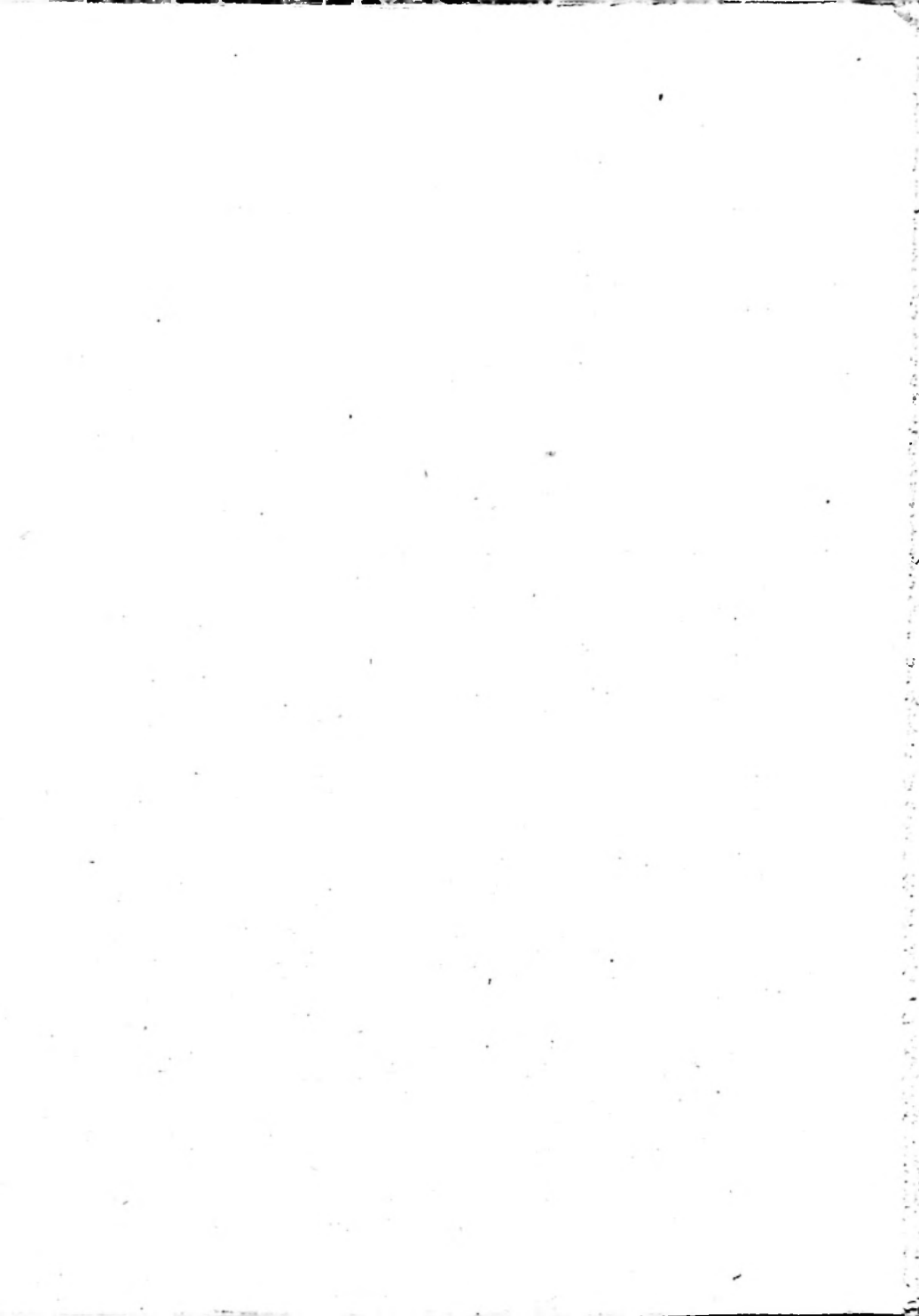
58. El partido republicano del pueblo.

Turquía vive en un régimen de Partido único. El partido Republicano del Pueblo, grupo revolucionario creado por Ataturk, adquiere ese carácter desde la declaración hecha por su Jefe en la Asamblea Nacional de 1923. La oposición encontró mal que se uniese la Jefatura del Estado a la del Partido, vinculando así al Estado mismo la tarea de la Revolución Nacional. Ataturk contestó entonces: "Sólo hay un Partido político en el Estado. Para mí es cuestión de honor, en cuanto jefe del Partido único, del Partido del Pueblo, ser también jefe del Estado".

La obra revolucionaria nacional avanza valiéndose del mismo Estado. La Constitución de 1933 adopta los principios del Partido. Estos principios tienen dos caracteres: la movilidad y el nacionalismo. No se establece una Constitución rígida. "Adoptando nuestros principios, no hemos creído que fuesen estáticos. No los hemos adoptado aplicando una fórmula determinada y para mantenerla eternamente, sino inspirándonos en las necesidades de la vida diaria. Ahí reside el verdadero espíritu del revolucionarismo". Por eso, estas palabras de Sukru Kaya dejan ver que la realización de la Revolución no anula el Partido, impulsor continuo de la vida política.

Esta construcción se inspira en el Fascismo prin-

cialmente. "Es natural que al ser planteado los diversos problemas—decía el mencionado Secretario general—se hayan tenido en cuenta las diversas teorías y los acontecimientos y experiencias de los demás países. Las características y los principios esenciales de nuestra República han sido concebidos en los campos de batalla. Han sido factores de la victoria, del mismo modo que son la obra de la victoria".



Sobre España, *García Oviedo*, Las directrices del Nuevo Estado (Sevilla, 1937); *J. A. Primo de Rivera*, Discursos, (Obras I); *Onésimo Redondo*, El Estado Nacional (1938); *A. Vallejo Nájera*, Política racial del Nuevo Estado (1937); *Sancho Izquierdo y Prieto Castro*, Ilustración popular al Fuero del Trabajo (1938); *L. Jordana de Pozas*, Política familiar del Nuevo Estado (1938); *L. Prieto Castro*, El momento revolucionario del Fuero y sus líneas ideológicas (Universidad, 1938); *M. Allué Salvador*, Ennoblecimiento de la vida del trabajador en el Fuero del Trabajo (Universidad, 1938).

Sobre Italia, *A. Lucchini*, Saggio di concezione fascista del diritto di proprietà (Florenia, 1925); *Mussolini*, Scritti e discorsi; *F. Battaglia*, Le carte dei diritti (Florenia, 1934); *F. Picoloni*, Sistema rappresentativo del Fascismo, (Nápoles, 1937); *M. T. Zanzucchi*, Istituzioni di diritto pubblico (1936); *Zangara*, Il Partito e lo Stato (Catania, 1935); *U. Spirito*, Individuo e Stato nella concezione corporativa. (Atti II, Convegno Ferrara, vol. I.) También *Del Vecchio*, El Nuevo Estado y sus bases jurídicas (Valladolid, 1939).

La literatura alemana es más amplia. Cf. principalmente *Busse*, Der Erbhof im Aufbau der Volksordnung (1936); *Burgdoerfer*, Bevoelkerungs Politik im Steuerrecht (Deutsches Recht, 1935); *Diener*, Wandlung des Eigentumsbegriffs (Deutsches Recht, 1935); *Dennewitz*, Die institutionelle Garantien (1932); *Klein*, Institutionelle Garantien und Instituts Garantien (1934); *Koellreutter*, Grundriss der allgemeine Staatslehre (1933); *E. R. Huber*, Die Rechtsstellung des Volksgenossen (Z. für der gesamte Staatswiss, 1936); *K. Larrenz*, Rechtsperson in subjettives Recht (1935); *F. Wieacker*, Wandlungen der Eigentumsverfassung (1935); *Lange*, Nationalsozialismus und Familienrecht (Deutsches Recht, 1935); *Ruttke*, Erb und Rassenpflege in gesetzgebung und Rechtsprechung des Dritten Reiches (Deutsches Recht, 1935).

Sobre Portugal. *L. Cabral de Moncada*, O dever da hora presente (Coimbra, 1937); *Salazar*, Discursos (Coimbra, 1935-37).

CÁPITULO DUODECIMO

LOS CIUDADANOS

59. La situación jurídica de los ciudadanos en el nuevo Estado español.

La reacción antiliberal ha destrozado el cuadro de los derechos fundamentales creados por la Revolución Francesa, pero esta reacción no ha podido llegar a la negación de todos aquellos derechos por cuanto el nuevo régimen cuenta con el hombre y mantiene criterios humanistas.

Onésimo Redondo escribió que era indispensable arrancar "esa superstición francesa de los Derechos del Hombre". Lo cual—añadía—"no quiere decir que hagamos tabla rasa de cuanto en ella plugo catalogar". "Nuestra originalidad y nuestra firme doctrina radica en esto: en que no oponemos a la moribunda ideología francesa falsamente llamada de libertad y democracia, una posición autocrítica en que el individuo se sienta absorbido por el Estado". E insistía: "Desahuciar, como hemos hecho en obsequio de la sinceridad mental, de las exigencias de la época y del pensamiento nacional, el mito francés de los Derechos del Hombre no quiere decir que para nosotros no existan derechos individuales: no se puede negar, sin caer en la negación del hombre como ser libre y responsable, que éste posee una zona de facultades propias que el Poder público no está llamado a invadir; un conjunto de prerrogativas civiles que son anejas a su dignidad natural, y un derecho solidario a ser gobernado en justicia. Si este de-

recho y estas prerrogativas y facultades se quieren llamar libertades o derechos individuales, concluyamos que nuestro ideario, abominando de la superstición funesta y mentirosa de los Derechos del Hombre, sabe no obstante que el individuo, como la familia, tienen derechos naturales no frente al Estado, pero sí ante el Poder del Estado".

Para el mismo iniciador del nacionalsindicalismo, estos derechos eran precisamente los que subrayaba el Tradicionalismo, los que en Donoso, en Aparisi y en Mella encontraban por cauce los torrentes de su oratoria impar. Para Onésimo los derechos y las libertades son aquéllos que están "en la tradición y costumbres civilizadas de nuestro pueblo". La prosperidad de las familias, la vida y la honra de los ciudadanos necesitan garantías que el Poder debe fomentar. Por otra parte, nada se opone a la igualdad moral y jurídica de los ciudadanos; y en cuanto a las libertades políticas es preciso subrayar que éstas no existen contra la unidad de nación, y en todo caso, habrán de subordinarse a la necesidad de reconstruir el país y a las exigencias de la Dictadura Nacional que ha de iniciar la instauración del Régimen.

En las normas programáticas de la Falange encontramos un reconocimiento de tutela jurídica del individuo en el Punto 7, para el cual "la dignidad humana, la integridad del hombre y su libertad son valores eternos e intangibles". Únicamente hay un criterio de jerarquía: el de la Patria una, grande y libre. Por eso, "sólo es de veras libre quien forma parte de una nación fuerte y libre" y "a nadie le será lícito usar su libertad contra la unión, la fortaleza y la libertad de la Patria". El Punto 8 alude a la autonomía individual en el terreno económico: "El Estado permitirá toda iniciativa privada compatible con el interés colectivo y aun estimulará las beneficiosas".

El Fuero del Trabajo contiene asimismo declaraciones de esta serie. En su pasaje XI, 6, reafirma

el reconocimiento de la iniciativa privada "como fuente fecunda de la vida económica de la Nación". Tutela al trabajo, y al señalar la retribución del mismo, dice que ésta ha de ser suficiente "para proporcionar al trabajador y a su familia una vida moral y digna". En este terreno no hay otras limitaciones que las exigidas por el mantenimiento de la normalidad de la producción. (Fuero, XI, 2).

La familia está configurada por las normas y por el Fuero como célula fundamental del Estado. A apoyar ese concepto se ha enderezado la acción legislativa del Gobierno. Así, la Ley de 12 de marzo de 1938 deroga la ley del divorcio (28 de junio de 1932) y restablece el régimen matrimonial de indisolubilidad del vínculo, mientras la Ley de 18 de julio de 1938 establece el Subsidio familiar, para proporcionar "un auxilio económico en relación con el número de hijos o asimilados a ellos que tengan a su cargo y vivan en su hogar". Para esa tarea hay una consigna rigurosa—dice el preámbulo a esta última ley—: nuestra Revolución tiende a elevar y fortalecer la familia "en su tradición cristiana".

Al apoyo a la familia ayuda poderosamente la nueva estructura del régimen laboral. Como decía José Antonio Primo de Rivera. "queremos que no se canten derechos individuales de los que no pueden cumplirse nunca en casa de los famélicos, sino que se dé a todo hombre, a todo miembro de la comunidad política, por el hecho de serlo, la manera de ganarse con su trabajo una vida justa y digna".

Por eso sobre el eje del trabajo giran las nuevas tablas de derechos, que llevan implícito el concepto del deber. Tal la proclamación del Punto 15: "Todos los españoles tienen derecho al trabajo. Las entidades públicas sostendrán necesariamente a quienes se hallen en paro forzoso". Punto que desarrolla el Fuero del Trabajo en sus pasajes I, 3 y I, 8: "El derecho de trabajar es consecuencia del

deber impuesto al hombre por Dios para cumplimiento de sus fines individuales, y la prosperidad y la grandeza de la Patria. Todos los españoles tienen derecho al trabajo. La satisfacción de este derecho es misión primordial del Estado". A esta declaración de derechos sigue una declaración de deberes. El Punto 16—inmediatamente después del 15, que proclama el derecho al trabajo—dice: "Todos los españoles no impedidos tienen el deber de trabajar. El Estado nacionalsindicalista no tributará la menor consideración a los que no cumplan función alguna y aspiran a vivir como convidados a costa del esfuerzo de los demás". Y el Fuero, en su pasaje I, 5: "El trabajo, como deber social, será exigido inexcusablemente, en cualquiera de sus formas, a todos los españoles no impedidos, estimándolo tributo obligado al patrimonio nacional".

Ya el Decreto de 7 de Octubre de 1937, estableciendo el Servicio social femenino, había aplicado este concepto. Manifestación destacada de los Puntos—dice su exposición de motivos—es "concebir el trabajo humano en su exacta función de derecho y deber, como facultad de todo hombre a asentar en el propio esfuerzo el destino, dignidad y holgura de su vida, y como exigencia permanente de la Patria a recabar, a cuantos formen parte de ella, actos de servicio para el mantenimiento firme de la existencia nacional y a la realización de su vocación de Imperio". El Decreto subraya que "hasta hoy, sólo el servicio militar obligatorio cumplía estos fines" y que "respecto de la mujer, nada había sido establecido". En su virtud, por el artículo 1.º "se declara deber nacional de todas las mujeres españolas comprendidas en edad de 17 a 35 años la prestación del Servicio Social". Este consiste "en el desempeño de las varias funciones mecánicas, administrativas o técnicas precisas para el funcionamiento y progresivo des-

arrollo de las instituciones sociales establecidas por la Delegación Nacional de Auxilio Social de Falange Española Tradicionalista y de las JONS o articulados en ella".

La igualdad ante la ley queda notoriamente encuadrada en un ambiente distinto del liberal, bien que se conserve porque ésta sea, en opinión de José Antonio, "conquista de la cual ya no se podrá volver atrás nunca".

Esta igualdad adquiere matices en el trabajo y en esfuerzo, así como en la capacidad. Los Puntos señalan que todos los que lo merezcan tendrán fácil acceso a los estudios, incluso a los establecimientos superiores (Punto 24 aplicado por el Decreto de 16 de Diciembre de 1938). Y el Fuero del Trabajo, en su pasaje II, 6, habla de los bienes de la cultura, la alegría, la milicia, la salud y el deporte como derechos a los cuales todos los trabajadores deben tener acceso; y, para conseguirlo, determina que se creen las instituciones necesarias.

El famoso derecho de libertad es el que sufre una transformación más absoluta. Onésimo Redondo, que escogió ese vocablo para título de su periódico de lucha, nos expone su concepto: "Nuestra libertad no es el cobarde deseo individual de estar suelto para esgrimir cada cual sus egoísmos contra los semejantes: "ésa es la libertad liberal", inmortal ruleta donde hacen fortuna los profesionales del arte de embaucar al pueblo". Esa es la libertad de los parlamentarios, la de los catalanistas contra España, la de los incendiarios y los delincuentes. Ante ésa, hemos de decir "muera la libertad". Pero hay otra libertad.

Es la aludida por José Antonio: "Queremos menos palabrería liberal y más respeto a la *libertad profunda del hombre*... Porque sólo se respeta la libertad del hombre cuando se le estima, como nosotros le estimamos, portador de valores eter-

nos; cuando se le estima envoltura corporal de un alma, que es capaz de condenarse y de salvarse. Sólo cuando al hombre se le considera así, se puede decir que se respeta de veras su libertad, y más todavía, si esa libertad se conjuga, como nosotros pretendemos, en un sistema de autoridad, de jerarquía y de orden".

Las aplicaciones de la libertad liberal eran la libre exposición de pensamiento y la libre reunión y asociación. La libertad de Prensa "entendida al estilo democrático", ha sido anulada por la Ley de 23 de Abril de 1938, que encauza la actividad periodística al servicio de los altos intereses de la Nación. Las libertades de propaganda han quedado anuladas también cuando van contra la unidad, la grandeza y la libertad de la Patria. En este aspecto deben ser encuadradas las normas relativas a censura de impresos (Ordenes de 29 Mayo 1937 y 29 Abril 1938), de cine (Ordenes de 21 Mayo 1937 y 10 Diciembre 1937), de plástica (Ordenes de 29 Octubre 1937 y 15 Abril 1939), y en general de vigilancia popular (O. 15 Julio 1939). Las libertades de reunión y asociación han quedado reguladas, en parte, por el Decreto de 2 de Marzo de 1938, en el cual se afirma que el Ministro del Interior está encargado de dar "unidad y disciplina a las manifestaciones públicas del pensamiento".

No hay todavía reglamentación de las actividades políticas. Existe, desde luego, ya un cauce en el Partido Unico; pero, ¿va a hacerse algo semejante a los plebiscitos de otros regímenes? El preámbulo del Decreto de Unificación parece referirse a la utilización de ese sistema para decidir la instauración de la Monarquía, régimen que nos dió, hace siglos, grandeza y gloria. En todo caso, algún escritor ha notado esa posible actividad. El profesor García Oviedo llega a decir que "en los tiempos que corren ha adquirido ya el individuo,

la personalidad humana, una conciencia demasiado viva de sí y de sus derechos y prerrogativas, para que se le pueda desdeñar y excluir de toda intervención en la vida pública".

60. Los "derechos fundamentales" en el fascismo.

Escribe F. Battaglia: "La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no puede ser capitidisminuída a la luz de los principios que el Fascismo consagra en su Carta del Lavoro". Y añade: en el Fascismo adquiere nueva significación la ideología de la Revolución francesa; el Estado fascista es vehículo de un progreso en el campo jurídico "aumentando con formas nuevas la tutela jurídica". ¿Hasta qué punto puede aceptarse esta interpretación?

Desde luego, Fascismo no es reacción. La reacción fascista es una simple actitud conectada al Alzamiento y constituye un acto viril de autodefensa nacional, pero no pasa más allá. No aumenta la Tabla de Derechos, pero les da eficacia. Derechos que sólo eran declarados, resultan ahora vividos.

Lo que ocurre es que se transforma la raíz de los principios fundamentales. El Fascismo está frente al principio individualista del que arranca el movimiento constitucional. El objeto del Estado ya no es, como pretendía la Declaración francesa de 1789 (art. 2), la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del individuo. Hoy la fórmula ha variado. El Estado tiene por objeto el fomento de los intereses de la comunidad y, por lo tanto, como nota Zangara, "los derechos de los individuos son reconocidos en función de los intereses del Estado".

El problema de la libertad ha sido enfocado de otro modo. Mussolini dijo, ya en 1923, que "la

libertad no es un fin, sino "un medio", y que "como tal, ha de ser controlado y dominado". El nuevo concepto lo expresa el Duce así: "Si por libertad se entiende suspender cada día el ritmo ordenado del trabajo de la nación, el derecho de escupir sobre los símbolos de la Religión, la Patria y el Estado, yo, Jefe del Gobierno y Caudillo del Fascismo, declaro que esa libertad no existirá nunca" (28 Octubre 1923).

Y puesto que la Constitución de 1848 estaba inspirada en el liberalismo, ¿qué transformaciones ha impuesto el nuevo régimen? El artículo 26 de la Constitución italiana afirma: "La libertad individual está garantizada". He aquí las modificaciones introducidas en cada una de las exteriorizaciones de esa libertad.

Libertad de residencia. Para los nacionales, cuanto decide la ley de Orden Público de 18 de Junio 1931. Para los extranjeros, la posibilidad de expulsión, según esa misma Ley; el interés de la defensa nacional puede conducir a la expulsión de una provincia por simple orden del Gobernador (Decreto 25 Enero 1923).

Libertad religiosa. La Religión católica está apoyada por el Concordato de 11 de Febrero de 1929, Ley del Reino desde 24 de Junio de 1929. Se admiten los demás cultos que no sean contrarios al Orden público y a las buenas costumbres (artículo 1). Se autoriza la discusión en materia religiosa (art. 5).

Libertad de Prensa. Es regla, según el artículo 23 de la Constitución, pero está limitada por los Decretos de 25 de Julio de 1923 y 10 de Julio de 1924, y por la Ley de 31 de Diciembre de 1925.

Libertades de reunión y asociación. La de reunión está limitada por la Ley de Orden Público. Hay que avisar anticipadamente a la Policía. Se exceptúan las reuniones electorales. En cuanto a la de asociación, existen asociaciones prohibidas

(delictivas, secretas, sindicales de ciertas categorías de funcionarios, las internacionales no autorizadas).

Libertad patrimonial. En los casos de penalidad que impone la pérdida de ciudadanía, se admite la confiscación de bienes por decreto (ley de 31 de Enero de 1926). Hay limitaciones que dan nuevo sentido a la propiedad. Tales, las señaladas en los siguientes textos: Carta del Lavoro, VII, Ley de 18 de Diciembre de 1927 (aguas públicas), Leyes de 18 de Mayo de 1924 y 29 de Noviembre de 1925 (transformación de fondos, mejoras agrarias), 30 de Diciembre de 1923 y 26 de Julio de 1929 (reforma agraria) y 22 de Julio de 1927 (minas).

Libertad intelectual. En la publicación de libros, la Ley de 26 de Mayo de 1932 hace intervenir al Fiscal, que ha de recibir tres ejemplares de cada libro antes de ser publicado, y que puede impedir la publicación, de acuerdo con la Ley de Orden Público, atendiendo, además, el informe del Ministerio de Cultura Popular. Con respecto a las publicaciones periódicas, la profesión de periodista aparece reglamentada (Decreto de 26 de Febrero de 1928). Existen diversas disposiciones sobre periódicos (Leyes de 10 de Julio de 1924 y 31 de Diciembre de 1925, Reglamento de 4 de Marzo de 1926).

En cuanto al liberal derecho de igualdad, proclamado por el artículo 24 de la Constitución italiana, algunos de sus desenvolvimientos (igualdad ante la Ley, igualdad de derechos civiles y políticos, igualdad tributaria) no han sufrido notoria modificación. Ni siquiera se ha transformado el concepto de la igualdad para admisión de cargos y empleos públicos, y solamente en cuanto a los requisitos de capacidad y condiciones legales exigidas, éstas han sido aumentadas. La Ley de 17 de Diciembre de 1932, exige la afiliación al Par-

tido para poder ingresar en cualquier cargo del Estado o de las Corporaciones públicas. Si bien la ley que aplica el Concordato afirma que la diferencia de cultos no es excepción para la igualdad jurídica y administrativa (art. 4), los clérigos y religiosos no pueden ocupar cargos ni empleos públicos sin el beneplácito del Ordinario, y los clérigos apóstatas o censurados no pueden ejercer la enseñanza ni desempeñar puesto que les ponga en contacto con el público (Concordato, artículos 3-5). Por último, la pertenencia a sociedades secretas, por parte de funcionarios o empleados públicos, lleva consigo la pena de destitución o remoción (Ley de 1925, artículo 2).

61. Los "derechos fundamentales" en el nacionalsocialismo.

La construcción ideológica nacionalsocialista se lanza contra la configuración liberal de los llamados "derechos fundamentales". Schmitt dice que aquella parte de la Constitución realmente no era tal Constitución en el sentido orgánico, sino precisamente la esfera no controlada. Por otro lado, frente a las declaraciones de libertad individual, están clamando las realidades de las diversas potencias políticas: Asociaciones no estatales que dominaban la voluntad estatal, entidades que manejaban el verdadero poder del Estado.

Tras el velo de la libertad liberaldemocrática, pudo surgir así—comenta Schmitt—el sistema pluralista de un Estado de muchos partidos, sindicatos, ligas económicas, entidades confesionales, etcétera, que se ponían de acuerdo bajo mano para el ejercicio del Poder. Estos conceptos deben desaparecer. El capítulo de los "derechos fundamentales" de la Constitución de Weimar,

contiene, en su segunda parte, una serie de los derechos liberales de libertad del individuo aislado, y al propio tiempo garantiza y fija de modo estable cosas contradictorias con esa libertad (artículos 127 a 137, 165, etcétera).

El nuevo sistema de derechos públicos subjetivos, vigente frente al Estado planteado en Weimar, debe ser objeto de estudio. Siguiendo a Schmitt en su trabajo "Derechos de libertad y garantías institucionales de la Constitución del Reich" (*Freiheitsgarantien und institutionelle Garantien der Reichsverfassung*, 1931), pueden distinguirse en aquél derechos de libertad, instituciones de garantía y garantías institucionales. Entre los primeros figuran los llamados "derechos fundamentales"; en los segundos, la propiedad, el matrimonio, etc.; entre los últimos, las garantías de los funcionarios, los municipios y las asociaciones religiosas. Bajo el influjo nacionalsocialista, quedan transformados los derechos fundamentales, especialmente los de libertad. Como nota Huber, en el sitio que ocupaba el individuo aparece hoy la comunidad, y "no hay ninguna esfera privada libre de la intervención del Estado que se pueda considerar invulnerable y sagrada por éste". Los más importantes derechos de libertad fueron suspendidos, según la interpretación judicial, por el Decreto presidencial del 28 de Febrero de 1933. En realidad, estos derechos quedaron arrumbados por el triunfo mismo del Nacionalsocialismo, dada la incompatibilidad de aquéllos con los del nuevo régimen.

Las instituciones de garantía aparecían impregnadas de espíritu liberal. El matrimonio era un contrato; la propiedad un derecho de disfrute con sentido burgués; la herencia una consecuencia de la libertad en el goce de los bienes (libertad testamentaria). Hoy el matrimonio es una institución fundamental, célula de la vida del pue-

blo; la propiedad ha de servir al interés común; la herencia corresponde a la familia y la libertad de testar ha de configurarse como excepción. (Así se ve, como subraya Huber, en el "Reichserbherbrecht" o derecho de patrimonio familiar hereditario).

En cuanto a las garantías institucionales, éstas no tienen sitio en la nueva organización. Hay garantías especiales para corporaciones diversas, pero no una construcción general. La burocracia no puede constituir un cuerpo frente al Estado, etcétera.

El derecho subjetivo liberal ha sido superado merced a la estructuración del ciudadano en la comunidad, que es un orden vivo. No existe comunidad real—dice Huber, recogiendo un concepto de Larenz—sin la vinculación jurídica concreta del ciudadano. En la comunidad ha de haber exigencia de deberes, y el incumplimiento de éstos puede ocasionar, en casos graves, la ruptura de la relación jurídica. En el régimen nacionalsocialista, el campesino desahuciado, el jefe de taller dimitido, el publicista expulsado, reflejan casos de vigencia de los deberes. Tales actitudes no son ataques a un derecho invisible, sino consecuencias del vínculo establecido para mantener la situación jurídica de la comunidad. Y este concepto está en vigor en el conjunto del derecho. No hay regímenes particulares para los propietarios, los obreros, los oficinistas, etc., sino un sólo régimen: el del miembro de la comunidad nacional. Sus ejes son la familia, la propiedad y el trabajo.

Rehabilitado y exaltado el matrimonio y convertida la familia en célula de la organización nacional, existe así un derecho a la vida familiar. En ese sentido, la Ley de 15 de Septiembre de 1935, para la protección de la sangre y el honor alemanes, prohíbe el matrimonio con judíos, tendencia que se exalta en el Decreto de 14 de Noviembre

de 1935. La familia es apoyada, por la Ley de 1.º de Junio de 1933, mediante préstamos a los nuevos matrimonios. La Ley de 16 de Octubre de 1934, sobre impuestos de la renta, excluye de esta tributación a las familias numerosas. La de 14 de Julio de 1933, contra enfermedades hereditarias, tiende a mejorar la raza.

En relación a la propiedad, ésta pasa a ser parte del régimen de la comunidad nacional. El sistema liberal no reconocía enlace entre la propiedad y la comunidad; el interés común se olvidaba al servicio de la renta; contra el artículo 903 del Código civil alemán, la concepción nacionalsocialista considera al propietario como responsable, frente al pueblo y al Estado, de la administración de sus bienes. La Ley de 29 de septiembre de 1933 sobre el fundo hereditario (patrimonio familiar) tiene como objetivo la vigorización de los grupos campesinos. Según ella, el campesino no es libre de administrar su finca de modo que el artículo 903 carece de vigencia. Otras limitaciones han sido impuestas por las Leyes de 13 de diciembre de 1933 y 14 de Enero de 1935, así como por las Leyes de autopistas (17 de junio de 1933), defensa nacional (29 de marzo de 1935) y obras especiales, como las del Canal de Wesser (8 de marzo de 1936).

El trabajo adquiere especial relieve. El Frente del Trabajo Alemán ha sustituido a los Sindicatos y apoya la eficacia del Programa nacionalsocialista en este punto. De este modo el derecho al trabajo encuentra configuración legal y práctica.

62. Los nuevos conceptos en el derecho portugués.

Salazar ha dicho en su famoso discurso del 30 de julio de 1930 que no es posible erigir un sistema político sobre el concepto de una libertad que permite defender las opresiones y los despotismos.

Es preciso imponer—dice—la jerarquía de los valores propia de la sociedad bien ordenada.

La nueva Constitución habla de los derechos fundamentales en sentido distinto del liberal. El artículo 8 señala “derechos y garantías individuales” y, entre ellas, la “libertad de expresión de pensamiento bajo cualquier forma” y la “libertad de reunión y asociación”. Basta mencionar estos términos para comprender que en las disposiciones complementarias no pueden concebirse tan amplios ni rotundos. La libertad de expresión de pensamiento está limitada en el campo de la propaganda, y la de reunión y asociación, frente a los partidos y a las sociedades secretas aparece prohibida por la Ley de 21 de mayo de 1935.

La actividad política tolerada es solamente la que se despliega mediante la participación en los plebiscitos; de los que la Constitución prevee dos, uno para la revisión de la Ley fundamental, y otro para la elección de jefe del Estado. Las elecciones políticas han sido suprimidas y para la designación de miembros de la Asamblea Nacional, hay lista única dada por la Unión Nacional. Se mantiene el sufragio directo (art. 89).

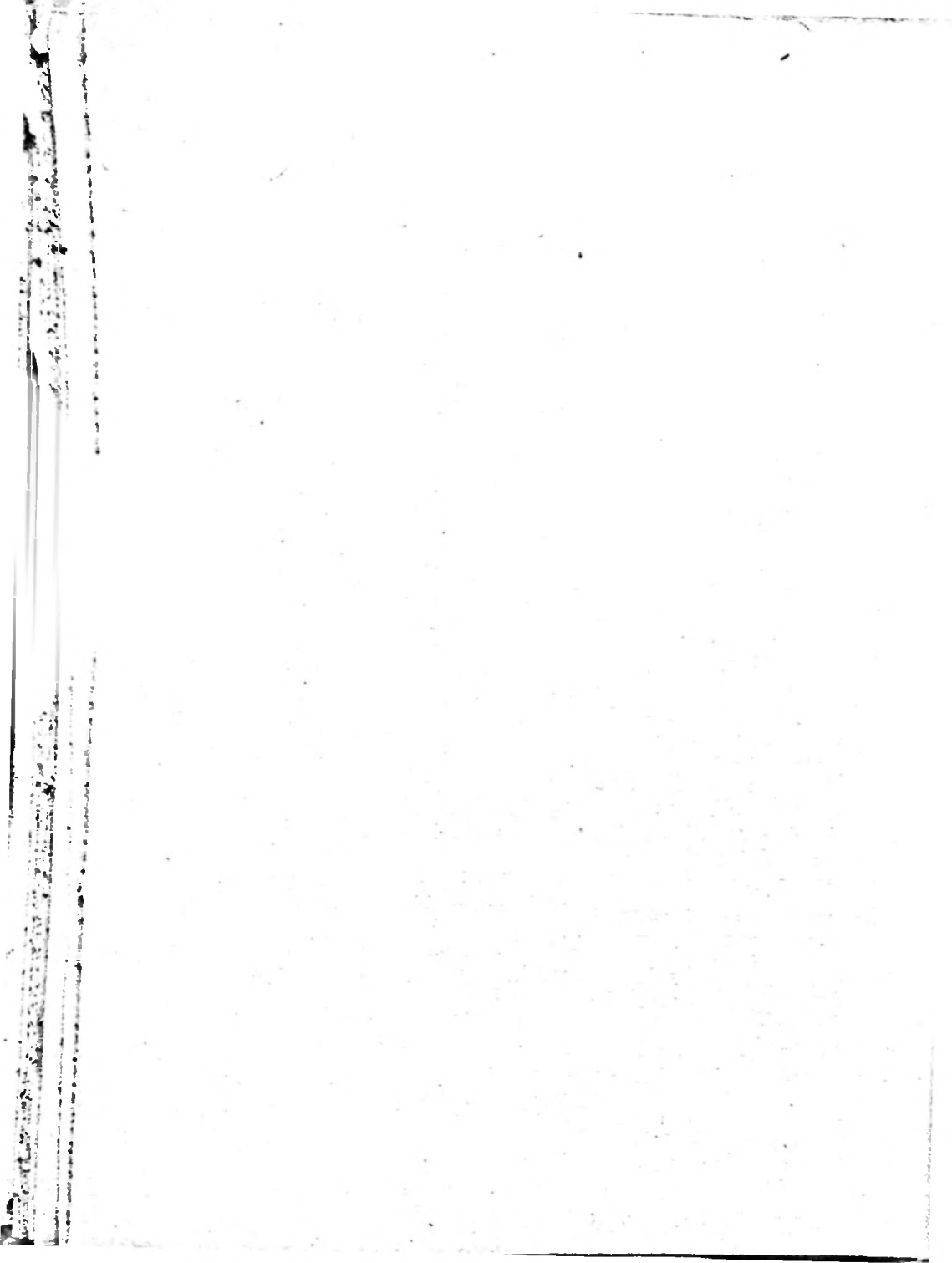
Los funcionarios tienen especialmente limitada esta actividad de expresión de pensamiento. La Ley de 13 de mayo de 1935 excluye del escalafón a los funcionarios o empleados que exterioricen “espíritu de oposición a los principios fundamentales de la Constitución política o que no den garantías al Estado”. Desde 1936 se exige a todos los dependientes del Estado la declaración anti-comunista.

El Estatuto de Trabajo Nacional atiende principalmente a la libertad de trabajo y a la de escoger profesión, libertad garantizada por el artículo 4.º párrafo 2. El trabajo resulta obligatorio para los portugueses como “deber de solidaridad social”, y el “derecho al trabajo y al salario huma-

namente suficiente, están garantizados sin perjuicio de orden económico, jurídico y moral de la sociedad" (art. 21). Se huye de una transformación revolucionaria y se parte de la evolución del régimen burgués. Así se advierte en los textos: El artículo 23 declara que "el derecho al trabajo se hace efectivo por contratos individuales o colectivos. No puede ser impuesto por el trabajador o por los organismos colectivos, ni por el Estado, salvo respecto a éste, el derecho de obligar por todos los medios legítimos, a trabajar en caso de suspensión concertada de actividades".

El propio Estatuto del Trabajo se refiere a la propiedad, que reconoce "como imposición racional de la naturaleza humana, corolario del mayor esfuerzo individual y colectivo en la familia y en la sociedad, y una de las bases esenciales de la conservación y el progreso sociales" (artículo 12). "El ejercicio de los poderes del propietario está garantizado—añade—cuando armoniza con la naturaleza de las cosas el interés individual y la utilidad social" (artículo 13).

Finalmente, la familia es atendida por la Constitución cual desarrollo de un derecho. El art. 12 declara: "El Estado asegura la constitución y defensa de la familia, como fuente de conservación y desarrollo de la raza, como base primera de la educación, de la disciplina y armonía social, y como fundamento del orden político y administrativo." El Estado portugués ha dictado normas en defensa de la familia. Tal, el D. L. de 12 de octubre de 1935. También es interesante la Obra Maternal para la Educación Nacional creada en 15 de agosto de 1936, por D. L.



A. Aunós, Principios de derecho corporativo (Barcelona, 1929);—Las Corporaciones del trabajo en el Estado moderno (Madrid, 1929);—El Fuero del Trabajo (Frontières, 1938); J. Aspiazu, Sentido cristiano del Fuero del Trabajo (1939); Bartolomé Aragón, Síntesis de economía corporativa (Salamanca, 1937);—Por una teoría económica del Nacionalsindicalismo (FE, 1938); Bartolomé Aragón y Luis Legaz, Cuatro estudios sobre sindicalismo vertical (Zaragoza, 1939); E. Luño Peña, La economía al servicio del hombre (Universidad, 1939); A. Díez Rodríguez, Justicia social del Nuevo Estado (Córdoba, 1938); M. Dávila Yagüe, El Sindicato vertical (Salamanca, 1939); E. G. Palma, Sindicatos y agitadores revolucionarios nacionalsindicalistas (Valladolid, 1938); Pedro González Bueno, Los Sindicatos y la economía (Santander, 1938); L. J. Pedregal, El Fuero del Trabajo (Cádiz, 1938); L. Vélez de Mendizábal, El Fuero del Trabajo y la doctrina social católica (Bilbao, 1938); L. Montemayor, Verso il nuovo Stato spagnuolo: la legge sulla stampa (Lo Stato, 1938); A. de Vega, Corporativismo y Nacionalsindicalismo (FE, 1937); Prieto y Castro, Ilustración popular al Fuero del Trabajo (Zaragoza, 1938); Ignacio Serrano, El Fuero del Trabajo (1939); H. Paris-Eguilaz, El Estado y la Economía (1938).

Sobre Italia, Ambrosini, Sulla posizione giuridicapolitica dei Sindacati nello Stato fascista (Roma, 1930); Anile, Lo Stato e la Scuola (Firenze, 1924); Amicucci, Il giornalismo nel regime fascista (Civiltà fascista, 1930); Bottai, Dalle Confederazioni alla Corporazione, (Diritto del Lavoro, 1924);—L'ordinamento corporativo (Milán, 1936);—Il Consiglio Nazionale delle Corporazioni (Roma, 1932); Balella, Lezioni di diritto corporativo (Roma, 1934); Barassi, Diritto sindacale e corporativo (Milán, 1934); B. Biagi, Faschistische Wirtschaftspolitik (Europäische Revue, 1932); G. Bortolotto, Lo Stato e la doctrina corporativa (Bologna, 1932); Carnellutti, Apologia delle Corporazioni, (Vita italiana, 1936); Chiarelli, Il Comitato Corporativo Centrale (Arch. di dir. pubbl. 1936);—Lo Stato corporativo (Padua, 1936); Costamagna, L'associazione professionale nell'ordinamento corporativo (Roma, 1930); A. Dresler, Die Presse im faschistischen Staat (Berlin, 1933); L. Federzoni, La riforma della legislazione sulla Stampa (Roma, 1925); Feroci, Diritto sindacale e corporativo (Milán, 1934); R. Del Giudice, El Consiglio Nazionale delle Corporazioni (Milán, 1938); Augusto Venturi, Prospettive Sindicali (Roma, 1938); Borsi y Pergolesi, Trattato di diritto del Lavoro (Padua, 1938); Redano, Sviluppo del principio cor-

porativo nell'ordinamento costituzionale dello Stato (Riv. inter. filos. dir. 1930); *Ranelletti*, Le associazioni professionali nel diritto pubblico italiano (Riv. dir. pubbl. 1929); *Panunzio*, Teoria generale dello Stato fascista (1937); *S. Ruinas*, Appunti sul problema della Stampa fascista (Roma, 1932); *L. M. Lachmann*, Faschistischer Staat und korporative Wirtschaft (Berlin, 1930); *Zangara*, I Sindacati nello Stato (Roma, 1931).

Sobre Alemania, *Buelow*, Der deutsche Staendestaar (1934); *Crone*, Das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit (1934); *Eckhardt*, Die Richtlinien zur Vereinheitlichung der Hochschulverwaltung (Deutsche Rechtswissenschaft, 1935); *Huber*, Die genossenschaftliche Berufsordnung (Blatt f. deutsche Philos., 1933);—Die Selbstverwaltung der Berufsstaende (Deutsche Verwaltungsrecht, 1936);—Staat un Wirtschaft (Der Verwaltungsakademie 1935);—Wirtschaftsverwaltungsrecht (Tubinga, 1932); *Herschel*, Neues Arbeitsrecht (Leipzig, 1937); *Merkel*, Nationalsozialistische Wirtschaftsgestaltung (1936); *Muench*, Wirtschaftliche Selbstverwaltung (1936); *Reischle*, Der Reichsnahrstand und seine Marktordnung, (Die Verwaltungsakademie 1937); *Ruts-Kriek*, Das nationalsozialistische Deutschland und die Wissenschaft (1936); *Ritterbusch*, Idee und Aufgabe der Reichsuniversitaet (1935);—Die Verfassungskompromiss von Weimar, das Experiment der Praesidialregierung und die nationalsozialistische Staatsidee (1932); *Siebert*, Dar Arbeitsverhaeltniss und der Ordnung der nationalen Arbeit (1935);—Arbeitsverhaeltnis und Vertrag (Zeitsch., der Akad. f. deutsche Recht, 1936); *Schrieber*, Die Reichskultukgmmer (1934); *Santoro*, Vie Jahre Hitler-Deutschland (1937); *Schmitt*, Staat, Bewegung, Volk (1934); *Tatarin-Tamheyden*, Das Reichskulturkammersgesetz und seine grundsatzliche Bedeutung (Jurist. Woche, 1933); *Weber*, Ueber die berufstaendische Idee in Deutschland. (Jahrbuch. f. Nationalaekonomie und Statistik, 1935); *R. Uria*, Del socialismo marxista al nuevo socialismo alemán del trabajo (FE, marzo-abril 1938).

Sobre Portugal, *S. Agostin de Oliveira*, A nova ordem economica (1936); *M. Caetano*, O sistema corporativo (Lisboa, 1938); *Augusto da Costa*, A Nação Corporativa (Lisboa, 1936); *R. da Cunha Gonsalvez*, Principios de direito corporativo (1935); *Pereira dos Santos*, La constitution sociale et politique portugaise (Paris, 1935); *L. Teixeira*, Perfil de Salazar (Lisboa, 1938); *Salazar*, Discursos (Coimbra, 1935-37); *G. de Reynold*, Portugal (Paris, 1936).

CAPITULO DECIMOTERCERO

LOS ESTAMENTOS

63. Economía y cultura en el nuevo Estado Español.

El régimen tradicional español hacía de la economía y de la cultura bases fundamentales reguladas mediante la constitución de gremios que revestían así carácter estamentario y representativo. No es lugar éste para historiar lo que fueron tales organizaciones, y ver en qué forma las intervenía el Estado. Importa recordar solamente que su abolición en 3 de junio de 1813—luego restablecidas en 1815, y definitivamente suprimidas en 1836—, dejó sin organismos profesionales adecuados a campos económicos inmensos e impidió que el Poder público ejerciese en esta materia la actividad que hubiera rebajado el impulso industrialista y proletarizador. Frente a su falta, siguió una decadencia del poder estatal, y pudo quedar éste a merced de las sociedades de resistencia y los trusts. Contra la realidad se levanta la concepción nacionalsindicalista.

Onésimo Redondo la pedía al fundar las JONS, buscando en el predominio sindicalista una resurrección gran industrialista de los gremios", e imponiendo un sindicalismo antiburgués, "ordenación forzosa de las fuerzas productoras en un sistema corporativo fuertemente vigilado por el Estado".

Los Puntos de la Falange, hoy norma estatal,

plantean la cuestión en un terreno sindical y estamentario. El Punto 9, declara: "Concebimos a España en lo económico como un gigantesco Sindicato de productores. Organizaremos corporativamente a la sociedad española mediante un sistema de sindicatos verticales, por ramas de producción, al servicio de la integridad económica nacional". El párrafo 2 del Punto 10, dice: "Nuestro sentido espiritual y nacional repudia también el marxismo. Orientaremos el ímpetu de las clases laboriosas, hoy derribadas por el marxismo, en el sentido de exigir su participación directa en la gran tarea del Estado Nacional". Y añade el 11: "El Estado nacionalsindicalista no se inhibirá cruelmente de las luchas económicas entre los hombres, ni asistirá impasible a la dominación de la clase más débil por la más fuerte. Nuestro régimen hará radicalmente imposible la lucha de clases". Todavía insiste el 12: "La riqueza tiene como primer destino—y así lo afirmará nuestro Estado—mejorar las condiciones de vida de cuantos integran el pueblo. No es tolerable que masas enormes vivan miserablemente, mientras unos cuantos disfrutan de todos los lujos".

El Fuero del Trabajo, aplicando estas concepciones al terreno puramente laboral, afirma la intervención del Estado que fijará las bases para la regulación del trabajo, con sujeción a las cuales se establecerán las relaciones entre los trabajadores y las Empresas. El contenido primordial de dichas relaciones será, tanto la prestación de trabajo y su remuneración, como el recíproco deber de lealtad, la asistencia y protección de los empresarios y la fidelidad y subordinación en el personal". (Fuero, II, 4, aplicado por el D. de 5 enero 1939). Labor que en gran parte encarga al Sindicato. Así se declara en el pasaje III, 5: "A través del Sindicato, el Estado cuidará de conocer si las condiciones económicas y de todo orden en

que se realiza el trabajo, son las que en justicia corresponde al trabajador". En el terreno agrario, "el Estado asegurará a los arrendatarios la estabilidad en el cultivo de la tierra por medio de contratos a largo plazo que les garanticen contra el desahucio injustificado y les aseguren la amortización de las mejoras que hubieren realizado en el predio. Es aspiración del Estado arbitrar los medios conducentes para que la tierra, en condiciones justas, pase a ser de quienes directamente la explotan". Y para que el Estado mantenga en todo momento el control sobre la materia laboral cesan los organismos paritarios, representativos de la lucha y la clase, y se crea por Ley de 13 de mayo de 1938, la Magistratura del Trabajo, proclamada en el Fuero VII, 1, "con sujeción al principio de que esta función de justicia corresponde al Estado".

Pero el trabajo no es en el nuevo Estado español una circunstancia cualificativa de clase. Son trabajadores todos, y sólo los productores tienen derecho a considerarse ciudadanos. De ahí la razón del Servicio de Trabajo, ya anunciado en el Punto 20, cuando, refiriéndose a la campaña de repoblación ganadera y forestal, habla de acudir "a la forzosa movilización temporal de toda la juventud española para esta histórica tarea de reconstruir la riqueza patria". Y según ha declarado para las mujeres, el Decreto de 7 de octubre de 1937, que establece el Servicio Social Femenino.

El nuevo Estado se constituye en forma sindical, es decir, con constitución estamentaria. El Fuero del Trabajo, XIII, 2, afirma en este sentido: "Todos los factores de la economía serán encuadrados por ramas de producción o servicios en Sindicatos verticales. Las profesiones liberales y técnicas se organizarán de modo similar, conforme determinen las leyes".

El Sindicato nació en el siglo XIX, como medio

de defensa proletaria frente a los empresarios (1824-1840), hasta convertirse en organismo revolucionario merced a la actividad comunista, (1848, Manifiesto comunista; 1864, 1.^a Internacional). En España, en 1888, se fundó la UGT, frente a la cual se asociaron los patronos en 1914. Con otro sentido y de cara a la UGT y a la CNT, nacieron en 1919 los Sindicatos libres. La lucha sigue entre dos bandos, y la cúspide puede situarse en 1935, con la fundación del Partido económico patronal español (PEPE), que pretendía ser grupo político al servicio de las entidades patronales.

Antes de la Falange nadie había concebido en España el Sindicato como instrumento económico del Estado, en situación equivalente a la de los antiguos gremios y con la modernidad que caracteriza al sindicalismo fascista. Las primeras Centrales Nacional-sindicalistas de la Falange, acogieron este matiz, a la vez tradicional y actual, que culmina en la definición dada por el Fuero del Trabajo: Sindicato es "instrumento al servicio del Estado". Lo que en forma alguna quiere decir que sea su órgano, porque ello conduciría a concebir un Estado puramente económico. El Sindicato no puede, sin embargo, dejar de ser político, en cuanto este carácter se impone en todo Estado totalitario para dar vida a las ideas que nutren al Estado mismo.

El Fuero del Trabajo expresa así la nueva concepción: "El Sindicato vertical es una corporación de derecho público que se constituye por la integración en un organismo unitario de todos los elementos que consagran sus actividades al cumplimiento del proceso económico dentro de un determinado servicio o rama de la producción, ordenado jerárquicamente bajo la dirección del Estado". (Fuero, XIII, 3). "Las jerarquías del Sindicato recaerán necesariamente en militantes de Falange Española Tradicionalista y de las JONS". (XIII,

4). "El Sindicato vertical es instrumento al servicio del Estado, a través del cual realizará principalmente su política económica. Al Sindicato corresponde conocer los problemas de la producción y proponer sus soluciones, subordinándolas al interés nacional". (XIII, 5). Y en relación con la Empresa, el nuevo Estado plantea su situación con estos textos: "La Empresa, como unidad productora, ordenará los elementos que la integran en una jerarquía que subordine los de orden instrumental a los de categoría humana, y todos ellos al bien común". (Fuero, VIII, 2). "El jefe de la Empresa asumirá por sí la dirección de la misma, siendo responsable ante el Estado". (VIII, 3).

Afirmando el enlace, profundo, entre lo sindical y lo político, pero dándole un carácter social de manera predominante frente al estatal que anteriormente se mantenía, la Ley de 8 de agosto de 1939 ha estimado que aquellas funciones relacionadas con la actividad sindical deben radicar en la línea jerárquica del Partido, quedando ligadas al Ministerio de Trabajo las relativas a trabajo, jurisdicción, previsión y estadística. (Ley citada, artículo 6). De este modo los Sindicatos no sólo reciben toda la savia política que caracteriza al Movimiento, sino que ganan en agilidad y flexibilidad.

Este mismo criterio impera en orden a la Cultura. Ya los Puntos subrayan este carácter nacional y este espíritu de servicio. El 23 declara: "Es misión esencial del Estado, mediante una disciplina rigurosa de la educación, conseguir un espíritu nacional fuerte y unido e instalar en el alma de las futuras generaciones la alegría y el orgullo de la Patria". A tal fin se dirigen las medidas que impiden la producción y comercio de literatura pornográfica y disolvente (O. 23 de diciembre de 1936). Por lo demás, aunque no existe todavía una reglamentación de estas actividades en su conjun-

to, faltando Cámaras y Asociaciones Corporativas que recojan a los grupos y a las preocupaciones culturales, ya se han iniciado ideas y organismos relacionados con tal esfuerzo.

La tarea encomendada al Instituto de España roza ciertos aspectos, pero desde el cine y el teatro a la literatura y la escuela, se advierte la necesidad de dar cumplimiento a cuanto los Puntos y el Fuero del Trabajo dejan sugerir.

El mencionado Instituto, constituido por D. de 8 diciembre 1937, como "senado de la cultura patria", ha sido considerado por el D. de 19 mayo 1938, "órgano a través del cual el Estado orientará y dirigirá la alta cultura y la investigación superior en España", funciones que se perfilan en el D. de 26 abril 1939. El cine ha sido sometido a la vigilancia de una Junta Superior (Orden de 2 de noviembre 1938), en tanto que el Estado ha establecido un Departamento de Cinematografía en su Dirección General de Propaganda, y se ha constituido una Junta Nacional de Teatros y Conciertos (Orden de 5 de noviembre 1938).

La profesión de periodista ha quedado encuadrada, señalando un índice de lo que esta materia promete (L. de 2 abril 1938, O. de 2 abril 1939). El de Prensa era, dice la ley de 23 de abril de 1938, "uno de los viejos conceptos que el nuevo Estado había de someter más urgentemente a revisión". A la Prensa corresponde ahora la función esencial de "transmitir al Estado las voces de la Nación y comunicar a ésta las órdenes y directrices del Estado y de su Gobierno, siendo así, por consiguiente, "órgano decisivo en la formación de la cultura popular, y sobre todo en la creación de la conciencia colectiva", por lo que no podía seguir viviendo al margen del Estado. El periódico ha de quedar "en servicio permanente del interés nacional", y en su consecuencia pasa a ser tarea del Estado "la organización, vigilancia y control de la institución

nacional de la Prensa periódica" (Ley cit. art. 1). El Estado dispone así, por un lado, de una intervención olvidada, y da cauce estamentario a quienes trabajan en la Prensa. A este último fin, crea el Registro de Periodistas, y se propone organizar centros de selección.

En cuanto al Libro, la Orden de 23 de mayo de 1939 establece el Instituto Nacional del Libro como órgano corporativo y director al servicio de la tendencia que abandona la simple visión comercial para hacer del libro un instrumento de educación y de la labor editora una obra enlazada a la cultura popular. Al propio tiempo que se dota al Estado de una organización capaz para llevar adelante la disciplina de la política del libro, reúne a los libreros y los editores, antes acogidos a las Cámaras del Libro, con los publicistas, a los que habrá de encuadrar en forma análoga a cuanto ha hecho con los periodistas la Ley de Prensa.

El ulterior desarrollo de estas tendencias generales en la vida económica y cultural, podrá probablemente dar base a una Cámara Corporativa que apoye y recoja las fuerzas productoras, materiales y espirituales. Así lo anunció el Caudillo en declaraciones hechas el 7 de agosto de 1937.

64. La organización corporativa italiana.

Desde el punto de vista estático, dice Panunzio, el Estado fascista "puede ser llamado Estado sindical, en cuanto está compuesto de Sindicatos", y desde el punto de vista dinámico, puede llamarse corporativo, "en cuanto no sufre a los Sindicatos; no es respecto a éstos pasivo ejecutor, sino que actúa sobre ellos, enlazándolos, armonizándolos, llevándolos a la unidad, lo que constituye en sentido técnico la Corporación; esto es la función

corporativa, la nueva cuarta función que corresponde al nuevo cuarto elemento del Estado”.

En Italia se habla de Corporaciones desde 1921, pero no fueron instituídas hasta que surgió la Ley de 5 de febrero de 1934. Esta ley se relaciona con la de 3 de abril de 1926, sobre Sindicatos, la de 1928, sobre representación política, y la de 20 de marzo de 1930, sobre el Consejo Nacional de las Corporaciones. La Ley de 3 de abril de 1926 introduce en el ordenamiento del Estado a las fuerzas económicas y a las organizaciones profesionales correspondientes, ley que no hubiera sido posible sin la precedente revolución política.

Elemento doctrinal esencial en este juego de leyes, es la Carta del Trabajo, de 21 de abril de 1927. Con élla se reafirma la empresa de realizar íntegramente la unidad moral, política y económica como tarea propia del Estado, que extiende así su soberanía a todas las fuerzas de la nación. Mussolini pudo decir en su discurso ante el Consejo Nacional de las Corporaciones al constituirse éstas, que si el 13 de enero de 1923, al crearse el Gran Consejo, “se sepultó el liberalismo político”, con el Consejo Nacional se sepultaba el liberalismo económico.

El Comité ejecutivo central de Corporaciones, en la sesión de 10 de mayo de 1934, decidió la constitución de veintidós Corporaciones. Estas quedaron repartidas en tres grupos fundamentales, de acuerdo con el ciclo de producción, ya sea agrícola, industrial y comercial, ya solamente industrial y comercial o bien exclusivamente productivo de servicios. Entre las primeras figuran, las de cereales, hortofrutifloricultura, vitivinicultura, aceite, remolacha y azúcar, zootecnia y pesca, madera, productos textiles. Al segundo grupo pertenecen las de metalurgia y mecánica, química, vestido, papel e imprenta, construcciones urbanas, agua, gas y electricidad, industrias extractivas,

y vidrio y cerámica. Al tercer ciclo las de previsión y crédito, profesiones y artes, mar, aire, comunicaciones interiores, espectáculos y hospedajes.

Las Corporaciones italianas son órganos del Estado, con estructura sindical, sometidos a la influencia de los elementos políticos del Partido y del Gobierno. Estas dos representaciones, tan vivas en la Ley de 24 de septiembre de 1936, quedan introducidas a la Corporación, asumiendo la presidencia de cada una de ellas el Jefe del Gobierno o el Ministro de Corporaciones, y la Vicepresidencia uno de los tres miembros del Partido que figuran en cada Corporación, escogido mediante Decreto del Jefe del Gobierno. De este modo, las Corporaciones son "el instrumento que, bajo la égida del Estado, lleva a cabo la disciplina integral, orgánica y unitaria de las fuerzas productivas, al servicio del desarrollo de la riqueza, la potencia política y el bienestar del pueblo italiano". Como el centro jurídico y lógico de las Corporaciones es el Jefe del Gobierno, con ellas se refuerza el principio de la preeminencia del Primer Ministro.

Con su organización corporativa ha tendido a dos objetos: servir al Estado y ayudar a los productores. Cuando se creaba el Consejo de Corporaciones, dijo el Duce: "lo que debe preocupar nuestro espíritu es la miseria de los hombres sanos y físicamente capaces que buscan afanosa e inútilmente trabajo. Debemos querer que los obreros italianos, que nos interesan en su triple carácter de italianos, de obreros y de fascistas, reconozcan que nosotros no creamos instituciones solamente para dar forma a nuestros esquemas doctrinarios, sino que lo hacemos para que surjan en un determinado momento resultados positivos, concretos, prácticos y tangibles."

El Estado domina de este modo toda la esfera económica, consiguiendo así hacer posible obra

como la que demostró la resistencia a las sanciones decretadas por la SDN. Ya no puede discutirse la competencia estatal en estos puntos. Cuanto menos es, como ha dicho Mussolini, absurdo e ineficaz. "Ninguna esfera de la vida individual y colectiva puede ser sustraída al Estado: todo penetra en el Estado y vive en tanto que está en el Estado". Y en materia económica, el Estado fascista es el que ha entrado más directamente en esta esfera, "creando una disciplina en los conflictos de los intereses colectivos, reconociendo jurídicamente los grupos profesionales, confirmando a ellos la representación de todas las categorías". (Discurso de 19 de agosto 1931).

En el campo de la cultura la intervención del Estado configura también la forma estamentaria a grandes grupos sociales, concretamente a los periodistas, los artistas, los dedicados a profesiones liberales, etc.

El Fascismo constituyó en 1926 la Academia de Italia, dándole la tarea de encauzar la vida cultural del País.

La materia artística ha sido jerarquizada dentro del Estado, señalándose la diversa importancia de las Exposiciones y enderezándose en sentido nacional las manifestaciones culturales y artísticas.

El Teatro ha sido renovado gracias a la obra acometida en 1935 por la Inspección de Teatro del Ministerio de Cultura Popular. Esta Inspección ha conseguido regular la constitución de compañías, repertorios, etc., de modo que se sirva al interés nacional.

En materia de Cine, la Ley de 13 de junio de 1935 protege la producción del país.

La Radio ha quedado encuadrada en el Ente autónomo de las emisiones (EIAR).

La Prensa ha dejado de ser una industria "como la del hierro o de los curtidos", según palabras de Mussolini, para ser misión, al servicio de una

Causa y un Régimen. Hay un registro de periodistas y un control estatal que endereza al buen fin este estamento, pasada presa de todos los saltimbanquis.

65. Integración económica y cultural en el Estado nacionalsocialista.

El Nuevo Estado Alemán supone la superación del pluralismo corporativista. Municipios, congregaciones, universidades, compañías, trusts, tan influyentes en la época weimariana hicieron de aquel Estado constitucionalista y demócrata no sólo un Estado de partidos, sino de estamentos y grupos diversos. Esto cae abajo por la Revolución Nacionalsocialista. Todo adquiere un nuevo carácter y un sentido nuevo.

Las nuevas corporaciones están encuadradas en la comunidad nacional y la sirven. Son las siguientes: a) las corporaciones cerradas dependientes del Partido; b) aquellas a las que han dotado de autonomía el Movimiento o el Estado; c) las de configuración obrerista, al servicio de intereses corporativos, como los Seguros sociales, por ejemplo; d) aquéllas que se refieren al cultivo o a la tierra, tales los Sindicatos agrarios o de riegos; e) las que recogen las profesiones para configurar la vida económica y cultural, y f) finalmente las organizaciones religiosas reconocidas.

Las corporaciones alemanas poseen una autonomía sometida a la inspección del Reich, que da la dirección política, orientando la obra en su conjunto. (Huber). Por otro lado, el propio Hitler ha señalado a la enseñanza primaria, la Organización Juvenil, el Servicio de Trabajo, el Partido y el Ejército, como medios educativos que han cumplido determinados objetivos, marcados por la

Revolución Nacionalsocialista, en el terreno de la educación.

Es interesante notar que precisamente el Nacionalsocialismo ha dado solución a los viejos intentos de incorporar la economía a la política. Todos los proyectos de introducir de manera definitiva un Consejo económico del Reich fracasaron, después del Decreto de 4 de mayo de 1929, por culpa del pluralismo dominante. Una constitución social o económica es sólo posible en un Estado moderno con estructura trimembre, como nota Schmitt.

El Nuevo Estado Alemán empezó colocando el derecho laboral sobre nuevas bases, gracias a la Ley de 20 de enero de 1934. A partir de ese momento, el derecho laboral deja de ser un derecho de clase, para pasar a servir a la comunidad nacional, y sometién dose a las virtudes de fidelidad, camaradería y honor. La idea de contrato es sepultada y sustituida. Se ha acabado con la concepción liberal, según la cual el trabajo era una mercancía y la relación de trabajo un contrato de derecho civil. No basta la colectivización. El sistema de contratos colectivos (Tariffvertrag), como dice Huber, "no significa modificación alguna en la antigua concepción"; para superar ésta hay que partir del concepto de comunidad.

El trabajo no es cosa cuyo goce pueda dejarse a los particulares, sino propiamente un bien de la comunidad nacional en su conjunto. Todo trabajo sirve al conjunto del pueblo y la relación laboral no es individual, sino que afecta a toda la nación. De ahí arranca el deber y el derecho del trabajo, así como su honor. La Ley de 20 de enero de 1934 ha protegido ese honor judicial y procesalmente, estableciendo tribunales y penas. La ley resulta completada por el reglamento del taller, el contrato colectivo, las normas de los hombres de confianza (Vertrauensmann), y la restante legislación

sobre la materia. El reglamento del taller lo da el jefe del mismo, en cuanto órgano de esa comunidad de fábrica. El contrato lo dicta el *fiel* (*Treuhänder*) para un grupo de talleres y en cuanto órgano de la nación, de forma que el contrato tiene carácter de decreto.

Trabajadores, campesinos, empresarios, etcétera, cada uno ocupa el lugar debido en la comunidad del pueblo. De esta forma la vida económica de los campesinos, los trabajadores y los empresarios queda estructurada en un sistema de estamentos, y da base a una economía dirigida, especialmente a partir del Plan Cuadrienal presentado al Congreso de 1936. La tarea del conjunto de la economía alemana constituye una unidad, y tiende a asegurar al pueblo la existencia y las posibilidades de independencia, según deja ver el Decreto de 18 de octubre de 1936, para la aplicación del Plan Cuadrienal.

El titular de la relación laboral ya no es el individuo, sino el Frente de Trabajo Alemán (DAF), superándose así el antiguo sistema sindical sancionado por la Constitución weimariana. Tal nueva concepción arranca del Decreto de 2 de mayo de 1933, y queda sistematizada por el Decreto presidencial de 24 de octubre de 1934, que encomienda al DAF la empresa de constituir la comunidad real de todos los alemanes y conseguir que cada uno ocupe en la vida su lugar correspondiente, desarrollando una obra educadora y vigilando la armonía del trabajo. El DAF, según el reglamento de 29 de marzo de 1935, constituye una formación cerrada del Partido, con autonomía de organización, pero dependiente de aquél en cuanto a la dirección y a cuanto suponga decisiones fundamentales.

De manera análoga a como ha quedado constituido el estamento de los trabajadores industriales y urbanos, se establece el sistema gremial de los campesinos. El titular no es el DAF., sino

el Gremio nacional de abastecimientos (Reichsnährstand), creado por la Ley de 13 de septiembre y el Decreto de 8 de diciembre de 1933. Es la organización representativa y unitaria de los campesinos en su conjunto y de la economía agrícola, incluso de las cooperativas agrícolas, los comerciantes en terrenos y los obreros de industrias derivadas. A la cabeza del Gremio figura el Jefe nacional de los campesinos, designado por el Caudillo Nacionalsocialista. Este cargo se ha enlazado actualmente con el de Ministro de Abastecimientos, señalando una vez más la unión entre la Sociedad, encuadrada en el Partido, y el Estado. La tarea encomendada al Gremio es la incorporación de los campesinos y de la agricultura al nuevo régimen, vivo y orgánico, haciéndoles sentir su responsabilidad frente al pueblo. El Gremio nacional de abastecimientos es una corporación de derecho público dotada de soberanía interior estatutaria, administrativa y judicial.

Otra corporación reúne a los empresarios. Su titular está constituido por las organizaciones de la economía industrial y comercial. Sus textos fundamentales son la Ley de 27 de Septiembre de 1934, y el Decreto de 27 de Noviembre de 1934. Su constitución definitiva ha sido dada por Decreto del Ministerio de Economía, fecha 7 de Julio de 1936. Los empresarios alemanes quedan distribuidos en seis grupos: Industria, Artesanía, Comercio, Banca, Seguros y Energía, que a su vez se subdividen con criterio puramente técnico.

El comercio alemán empezó a ser reorganizado en 1934 por la Ley de 27 de Febrero, la que comprendía diversas divisiones por grupos técnicos.

La industria y el comercio, así estructurados, se incorporan a las Cámaras de Economía, constituidas con el carácter de representantes oficia-

les por Decreto de 25 de Septiembre de 1935. Las dirige el Ministro de Economía.

* * *

En cuanto a la organización estamentaria de la Cultura, ella representa una reacción orgánica contra los criterios liberales. El nuevo sistema permite la formación de una cultura popular con sentido unitario. A este fin, la cultura popular queda distribuida en tres grandes secciones: Prensa (incluso libros y revistas), Teatro y Cine.

Con respecto a la Prensa, la Ley de 4 de Octubre de 1933 se ocupa de los periodistas, y señala las responsabilidades de los redactores-jefes y la profesionalización del trabajo en la Prensa, atiendo el registro oficial de periodistas, etc. La Prensa es, así, una corporación unitaria, dirigida por el Ministro de Propaganda y Cultura Popular.

La Ley de 15 de Mayo de 1934 regula cuanto se refiere al Teatro. Todos los teatros están sometidos a la vigilancia del Ministerio. La gestión, la dirección, etcétera, exigen autorización ministerial. Los nombramientos de jefes de escena, gerentes, directores artísticos y de orquesta, etcétera, quedan sometidos a informe previo del Ministerio. Determinadas obras pueden ser prohibidas, en tanto que otras son apoyadas si tienen caracteres culturales dignos de protección. De esta forma el control de teatros deja de ser materia policiaca, como en la época liberal, para entrar de lleno en la tarea de educación y de cultura característica del Nacionalsocialismo.

La vigilancia del Cine se hace sobre la base de la Ley de 16 de Febrero de 1934, enderezada a la protección de la tarea cultural que corresponde al Cine, bien que sometida a la dirección política. A ello responden las diversas medidas de protección de cintas valiosas, censura oficial de negativos con criterios políticos y artísticos, etcé-

tera. El Ministro puede prohibir films, y todo el problema queda en manos del Estado.

Finalmente, las Cámaras nacionales de cultura, establecidas por la Ley de 22 de Septiembre de 1933, recogen el impulso conjunto de la vida espiritual alemana. Constituyen una corporación de derecho público, bajo la vigilancia del Ministro de Propaganda y Cultura Popular, que las preside. Hay Cámaras de escritores, prensa, radio, teatro, música, artes plásticas y cine. Tienen el doble carácter de representación estamentaria y de supremos responsables de su propia tarea ante el País, al servicio de la comunidad nacional.

66. El corporatismo portugués.

Luis Teixeira recuerda en su *Perfil de Salazar*, un pasaje de la conferencia dada por el gran político portugués, en 1922, en el Centro Católico. Dice así: "Toda fuerza política que pretenda desarrollarse por la representación efectiva de los verdaderos intereses, se ha de apoyar sobre una organización no exclusivamente política, sino social, de profesiones y de clases". De ahí arranca la tesis estamentaria característica de este "Estado Novo", creado por un Conductor sin poderes de Caudillo. Uno de sus expositores más sagaces, Marcelo Caetano, ha señalado como característica de este régimen, el sentido de la autonomía jurídica de las entidades estamentarias, fiscalizadas y tuteladas por el Gobierno.

La Constitución portuguesa habla en su título IV de los organismos corporativos. El artículo 16 declara que: "Incumbe al Estado autorizar, salvo disposición de ley en contrario, todos los organismos corporativos, morales, culturales y económicos y promover y auxiliar su formación". En materia económica, la misma Constitución, en su

título VIII, da ciertas normas y señala métodos y tareas. El artículo 29, dice: "La organización económica de la Nación deberá realizar el máximo de la producción y riqueza socialmente útil y establecer una vida colectiva, de la que resulte poderío para el Estado y justicia para los ciudadanos". El artículo 31, añade: "El Estado tiene el derecho y la obligación de coordinar y regular superiormente la vida económica y social con los siguientes objetivos: 1.° Establecer el equilibrio de la población, de las profesiones, de los empleos, del capital y del trabajo; 2.° Defender la economía nacional de las explotaciones agrícolas, industriales y comerciales de carácter parasitario o incompatibles con los intereses superiores de vida humana; 3.° Conseguir el menor precio y el mayor salario compatibles con la justa remuneración de los otros factores de la producción mediante el perfeccionamiento de la técnica, de los servicios y del crédito; 4.° Desarrollar la población de los territorios nacionales, proteger a los emigrantes y disciplinar la emigración."

Portugal ha instaurado un corporativismo de asociación, dirigido por la Subsecretaría adjunta a la Presidencia y por el Instituto Nacional del Trabajo, creado por Ley de 23 de Septiembre de 1933. La organización portuguesa está compuesta sobre gremios patronales, sindicatos nacionales obreros (dotados de representación unitaria, de acuerdo con el principio de la unicidad sindical), cooperativas liberales y corporaciones morales. El sistema aparece coronado por la Cámara Corporativa, que recoge los intereses profesionales y morales, en un sentido estamentario muy notorio. Sus bases legales son, además del Estatuto del Trabajo Nacional (Ley de 23 de Septiembre de 1933), los Decreto-leyes de esa misma fecha y de 3 de Diciembre de 1934, sobre organizaciones patronales; el Decreto-ley de 23 de Septiem-

bre de 1933, sobre sindicatos nacionales obreros; el de esa misma fecha sobre las "Casas do Povo", el de esa misma fecha, también, sobre el Instituto Nacional de Trabajo y Previsión. El Decreto-ley de 14 de Agosto de 1934, crea el Consejo Corporativo; el de 24 de Febrero de 1936, el Consejo Técnico Corporativo de Comercio e Industria, y el Decreto de 13 de Junio de 1935, la Fundación para la alegría en el trabajo.

En su discurso de 16 de Marzo de 1933, expuso Salazar los conceptos económicos de la nueva Constitución, que son los de riqueza, trabajo y familia. La peculiaridad portuguesa arranca de ahí. Aparte del "bien familiar" de los campesinos alemanes, no hay nada análogo. Se concibe—y bueno será que lo subrayemos, porque el Punto 6 del nuevo Estado español puede apoyar desarrollos semejantes—, teniendo en cuenta que la Constitución, en el título III, relativo a la familia, estima que élla es "fundamento del orden político y administrativo" (artículo 12), y, en efecto, los jefes de familia eligen juntas de feligresía, que luego participan en la Cámara Corporativa, "compuesta de representantes de municipios y de intereses sociales, considerados éstos en sus ramas fundamentales de orden administrativo, moral, cultural y económico" (artículo 102).

* * *

La parte cultural es justamente la que parece menos avanzada. La Constitución portuguesa hace de la opinión pública "elemento fundamental de la política y la administración del país" (artículo 22), con lo que se invalida ciertamente en parte la aplicación de los nuevos conceptos de educación y orientación popular. Ello se advierte principalmente en materia de Prensa, a la cual se le reconoce el ejercicio de una función de carácter público, pero sin que se la someta al servicio del

espíritu de la Revolución Nacional. La Constitución no saca más consecuencia de ese carácter público que la obligación de no recusar la publicación de "notas oficiosas de dimensiones ordinarias que le sean enviadas por el Gobierno... en asuntos de interés nacional" (artículo 23). El Servicio de Propaganda envía artículos a la Prensa, sin carácter de inserción obligatoria, y de ese modo ejerce cierta benévola influencia. Según datos oficiales, en Diciembre de 1933, de 251 periódicos políticos, 40 eran gubernamentales y 81 de oposición. Gracias a la labor del Servicio, un año más tarde los gubernamentales subían a 62 y los de oposición bajaban a 56.

Beneyto, Vázquez de Mella, Antología y prólogo (Barcelona, 1939); *Justo Garran y Moso*, El sistema foral de Navarra y Provincias Vascongadas (Pamplona, 1935); *Echave-Sustaeta*, El partido carlista y los fueros (1915); *García Oviedo*, Las directrices del Nuevo Estado (Sevilla, 1937); *FET y de las JONS* de Valencia, Gobierno Municipal (Zaragoza, 1938); *Aurelio Joaniquet*, Calvo Sotelo (Santander, 1939); *L. Jordana de Pozas*, El Municipio en los Estados totalitarios (Conferencia en Oviedo, "Voz de Asturias", 18-5-39); *Onésimo Redondo*, El Estado Nacional (1938); *J. Vázquez de Mella*, Obras (1932); *R. Serrano Suñer*, Declaraciones a FE de Sevilla (FE, 1.º septiembre 1938);—Siete discursos (Bilbao, 1938); *José A. Primo de Rivera*, Siete editoriales de "Arriba" y su comentario (Servicio Nacional de Propaganda, 1938).

Sobre Italia, *Ambrosini*, Der unitarische Charakter des Faschistischen Staates und die lokalen Koerperschaften (Europäische Revue, 1932); *A. Cirrneni*, Stato Fascista e comune autarchico. (Rassegna di legis. per i comuni, abril 1939); *G. Ortolani*, Autonomia e autarchia nello Stato Fascista (Rinnovamento amministrativo, noviembre 1938); *A. Guerra*, Il Podestà, Commento alla legge 4 febbraio 1926 (Napoles, 1926); *G. Zanobini*, L'amministrazione locale (Padua, 1935).

Sobre Alemania: *Bilfinger*, Das Reichstatthaltergesetz (Archiv f. oerden. Recht, N. F. 24); *K. Fiehler*, Nationalsozialistische Gemeindepolitik (1932); *Dr. Frick*, Discurso 14 septiembre 1936 (Dokumente der deutsche Politik, vol. IV); *Goerdeler*, Die deutsche Gemeindeordnung (Deutsche Verwaltungsblaetter, 1935); *Hitler*, Mi lucha; *Huber*, das Reichstatthaltergesetz vom. 30 Januar 1935 (Deutsche Juris. Zeitung 1935);—Neue Grundbegriffe des hoheitlichen Rechts (1935); *Jeserich*, Die kommunale Selbstverwaltung im nationalsozialistische Staat (Der Gemeindetag, 1934); *Krueger*, Die Aufgaben der Gemeinden im nationalsozialistische Staat (Zeitsch. f das gesam. Staatswiss, 1936); *Koellreutter*, Das Verwaltungsrecht im nationalsozialistisches Staat (Deutsche Jurist Zeitung, 1934); *Maunz*, Der Fuchrergedanke in der Verwaltung (Deutsches Recht 1935); *Schmitt*, Staat, Bewegung, Volk (1934).

CAPITULO DECIMOCUARTO

LAS ADMINISTRACIONES

67. Sentido unitario del nuevo régimen español.

Los Puntos de la Falange, norma programática del Estado creado por el Alzamiento Nacional, subrayan reiteradamente la idea de unidad. Sus antecedentes doctrinales muestran en este punto la mayor tozudez.

Ya cuando Onésimo Redondo creó las JONS, se encaró vigorosamente contra todo conato de disgregación, pero sin llegar, sin embargo, y frente a lo que podría achacarse, a un unitarismo rabioso. "Unidad político-territorial—dijo Onésimo perfilando el Estado futuro—. Extirpación de todo separatismo, sin perjuicio de las antonomías jurídico-administrativas que la realidad imponga, y no perjudiquen ni a España ni a los españoles". Se enfrentaba Onésimo así contra los llamados nacionalismos regionales y contra los conciertos económicos.

Contra el federalismo de los viejos republicanos y el sentido federalizable de los nuevos, el Estado creado por la reacción nacional, es entidad unitaria y Estado de integración. Como nota el profesor García Oviedo, si el Estado no es una mera yuxtaposición de individuos, un mero agregado de seres humanos, sino una realidad orgánica, como la Nación, dotado de conciencia y de voluntad unitarias, "no es posible tampoco considerarlo, en lo que respecta a su constitución

política, como una yuxtaposición de regiones unidas por el lazo frío de un pacto expreso o tácito.

En una editorial de "Arriba", escribía José Antonio: "España es para nosotros una unidad orgánica superior, tan diversa de la uniformidad centralista del siglo pasado, como de la uniformidad autonomista que escinde las mismas facultades en diversos compartimientos. Ni autonomismo viejo ni viejo centralismo".

Y en ese aspecto resulta clara la actitud del nuevo Estado a la luz de los textos legales vigentes.

La Ley de 5 de Abril de 1938, que se refiere al Estatuto catalán, restablece "un régimen de derecho público que, de acuerdo con el principio de unidad de la Patria, devuelve a aquellas provincias el honor de ser gobernadas en pie de igualdad con sus hermanas del resto de España", mientras que, con respecto a los conciertos económicos, el Decreto-ley de 23 de Junio de 1937, afirmaba ya, terminantemente, que "el sistema concertado, que en materia económica rige en las provincias vascongadas, entraña un notorio privilegio con relación al resto del territorio nacional sujeto al régimen común, no sólo por la amplísima autonomía de que gozan en este respecto las Diputaciones de dichas provincias, sino por el menor sacrificio con que el contribuyente atiende en ellas al levantamiento de las cargas públicas".

Faltan todavía en el nuevo Estado normas definitivas para encuadrar las actividades provinciales y municipales. Provincias y municipios surgirán vigorosas. Desde luego el Municipio tiene en su apoyo el Punto 6 de las normas programáticas, que le estima elemento funcional fundamental, de acuerdo en esto, como en tantos otros puntos, con el más auténtico tradicionalismo.

El nuevo Estado ha dictado normas para orga-

nizar las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos. Tal la Orden de 30 de Octubre de 1937, enderezada a revisar los nombramientos de gestores, con el fin de que quienes regenten la administración provincial y la municipal, sean personas que sientan hondamente el espíritu del Movimiento. Se establece en ello que las propuestas de gestores sean informadas por los jefes locales de la Guardia Civil y de la Falange, y las de gestores provinciales también por el jefe provincial del Partido (art. 1), mientras otra Orden, la de 22 de Junio 1939, atribuye provisionalmente al Gobierno la designación de concejales en los Municipios de población superior a tres mil habitantes.

El Ministro de Gobernación, señor Serrano Súñer, pergeñó, en unas declaraciones periodísticas, las consecuencias que llevará a la administración el nuevo concepto de lo municipal. Ha asegurado que "no podrá prevalecer un sistema de autonomía administrativa en pugna manifiesta con el concepto de Estado totalitario". Y ha añadido: "Este, que significa una reacción frente al dogma de la autonomía de la voluntad del individuo, no podría adoptar distinto criterio ante el problema de la administración local. Pero sería absurdo deducir de aquí la consecuencia de que la personalidad de los municipios haya de debilitarse, y mucho menos perderse. Sólo la ignorancia y la torpe comprensión, no siempre desinteresada, que algunos tienen del Estado totalitario, puede inducir a este error. De la misma manera que el Estado Nacionalsindicalista respeta la personalidad individual (en la concepción española es un concepto indeclinable el destino individual de la persona), para la personalidad municipal ha de tener también la máxima consideración. La confusión procede de identificar la personalidad con la libertad absoluta y de atribuir al Estado totalitario la absorción de todos los fines humanos supraindi-

viduales. Por eso, no podemos admitir la alternativa "autonomía administrativa o centralización estatal", como un "tercio excluso", que cierre la puerta a otros sistemas. Autonomía no, pero tampoco centralización. Las funciones que el Estado ha de ejercer para los Municipios, ampliadas, desde luego, en su contenido—control, tutela, protección—, y orientadas en un sentido objetivo (no en el sentido subjetivo de simple garantía del administrador individual y aisladamente considerado), no ha de tener como único soporte el centro, el Ministerio. Una prudente descentralización que descongestione hacia la periferia los problemas, para cuya solución es aconsejable la proximidad, en la fórmula más aceptable. Acaso en ella pueda encontrarse la reivindicación y el mejoramiento de lo provincial como enlace entre el Estado y el Municipio".

Por la Orden de 4 de noviembre de 1938, se designó una Comisión para preparar un proyecto de Ley de Gobierno y Administración Local que resuelva los problemas del Municipio y de la Provincia. Entretanto, el D. de 26 enero 1939, sobre régimen transitorio de Cataluña, vino a ensayar un sistema de coordinación de servicios en el mando único de un Jefe de alta jerarquía, que recogía ciertas tendencias viejo-virreinales de un alto interés.

68. La reforma administrativa fascista.

La primera actividad del Gobierno fascista, con respecto a las administraciones, está reflejada por el Real decreto de 30 de diciembre de 1923, al cual sigue la Ley de 8 de febrero de 1925. El texto único de 3 de marzo de 1934, recoge cuanto rige actualmente en materia municipal y provincial.

La reforma provincial se ha orientado en el sentido de vigorizar los poderes del Gobernador.

Este es, según la ley, "la más alta autoridad del Estado en la provincia", actuando como "representante directo del Poder ejecutivo." El Real decreto de 15 de diciembre de 1927, apoyando esta tendencia, elevó al Gobernador al grado de Gran Oficial del Reino, dándole título de Excelencia. El Gobernador es designado por el Gobierno y dispone de un Consejo y de una Asamblea provincial, compuesta de miembros nombrados por él mismo.

En lo local, los Alcaldes (Podestá) son nombrados por el Poder ejecutivo, sustituyéndose así el antiguo procedimiento electoral. Se han suprimido los órganos deliberantes, y en su lugar funcionan ciertos organismos asesores de tipo consultivo. Las características de la reforma, son: concentración del poder municipal y control central sobre el Municipio. El Alcalde es nombrado por cuatro años, mediante Real decreto, entre personas que posean título de enseñanza secundaria o hayan desempeñado funciones municipales. El organismo asesor (Consulta), es designado por el Gobernador, que nombra para constituirlo a personas propuestas por las organizaciones sindicales. El Alcalde no puede tomar acuerdos decisivos sin la aprobación del Gobernador.

La administración de Roma queda unificada mediante la fusión de los órganos provinciales y los locales. El "Governatorato" es, a la vez, representación del Gobernador y de la Alcaldía.

Según ha dicho el Subsecretario Buffarini-Guidi, colaborador del Duce en la política del interior, el Fascismo se dirige en esta materia a afirmar y subordinar, cada vez más, las administraciones municipales y provinciales a la administración central; lo que no entraña la destrucción, sino un nuevo concepto de la institución autárquica. Ello se ha llevado a cabo en Italia no sólo por simples actitudes gubernativas, sino también en otros te-

renos, como en el de Hacienda, donde se ha establecido una vigilancia financiera sobre las administraciones locales y se ha conseguido la unidad tributaria.

69. Del federalismo Weimariano a la unidad hitlerista.

El estudio del problema de las administraciones en la nueva Alemania presenta el mayor interés por arrancar de un país fundamentalmente federal. Las instituciones federales han sido derribadas por la Revolución Nacionalsocialista, y la clave del federalismo, el instituto de la "Reichsaufsicht", ha caído totalmente. Bajo Bismark y bajo la Constitución de Weimar, se distinguen lo nacional y lo regional, incluso en la legislación. En los casos de conflicto o roce de competencias, el Reich no tenía la soberanía, sino un tribunal que actuaba arbitrariamente. Hoy la institución del Caudillo, fuente de toda ley, ha invadido aquella controversia. No existe un derecho territorial y mucho menos un régimen propio de la región, por primera vez en la historia alemana.

La unidad del Reich triunfa sobre las regiones, como ha triunfado sobre los partidos. La última batalla se riñó, judicialmente, el 20 de julio de 1932, con el asunto del Gobierno Braun-Severing. El triunfo hitlerista afirmaba la victoria histórica, apoyada ya sobre el sentimiento de la comunidad nacional, vivificado por la doctrina nacionalsocialista. Apenas llegado al Poder, el Nacionalsocialismo acometió la unificación de las administraciones. La primera ley lleva fecha de 31 de marzo de 1933, y se refiere a la representación parlamentaria regional y a la legislación de las regiones. Por esta disposición se disuelven las Dietas territoriales. La segunda es del 7 de abril, y establece

un enlace institucional entre Regiones y Reich, mediante los Gobernadores o Lugartenientes del Reich, a los que encomienda la tarea de asegurar la ejecución de aquellas líneas fundamentales de la política general, dadas por el Canciller. Esta ley es superada el 30 de enero de 1934, por la de reorganización nacional promulgada en esa fecha, en virtud de la cual, los Gobernadores pierden el carácter de delegados del Canciller, para depender directamente del Ministerio del Interior, como funcionarios del mismo. A esta ley sigue otra, el 14 de febrero de 1934, que disuelve al Consejo del Reich, la institución más importante del viejo federalismo.

Otro gran paso lo da la Ley de 30 de enero de 1935, relativa a los Gobernadores territoriales, que adquieren la representación permanente del Gobierno del Reich en el territorio regional, y orientan y dirigen toda la política de su demarcación. Han terminado así las antiguas actitudes particularistas, y el Reich viene a ser un Estado unitario, no ya burocrática y técnicamente, sino en forma orgánica y funcional. El último golpe lo dió el Decreto de 17 de junio de 1936, estableciendo la Jefatura de la policía alemana.

De cuanto se ha reseñado haciendo un índice de la labor legislativa, lo más importante arranca de la Ley de 7 de abril de 1933. Según la sugestión de Schmitt, después de esta ley, ya no era posible designar a las "Laender" como Estados, a menos de transformar el concepto de éstos. Los Gobernadores o Lugartenientes proceden del instituto de los Comisarios, propio de la época de transición. No son órganos regionales o territoriales, sino nacionales, representando al Estado alemán. Su designación compete al Caudillo, como Jefe del Estado. La tarea encomendada a los Gobernadores es tendencialmente unificadora. Solamente los Tribunales, el Ejército y el Partido. constituyen

materia exenta de su intervención. Por lo demás, toda la vida regional está vigilada por ellos, ya que intervienen en designar los gobiernos regionales y las distintas autoridades, elevando propuestas al Caudillo.

En lo municipal, la actividad del Nacionalsozialismo ha tendido a objetivos semejantes. El Estado alemán del siglo XIX, exteriormente tan poderoso, cometió el grave error político de dejar surgir en la administración municipal autónoma, un principio informativo diverso del del "poder ejecutivo" estatal. La representación municipal elegida, fué estimada titular auténtica y fiel representante del Municipio, precisamente por surgir de elección, con lo que se reconocía en el municipio un principio formal que contradecía al Estado monárquico. De esta forma, la autonomía municipal fué convirtiéndose en punto de invasión del principio parlamentario liberaldemocrático en un Estado de funcionarios monárquicoautoritario. Ya en 1810 comprendió el Barón von Stein, que no había considerado con suficiente atención la diferencia entre Constitución y Administración. Subraya Schmitt: "Bajo el típico pretexto de que se tratase de cuestiones apolíticas de administración autónoma, la ciudadanía liberal se creó una esfera de derecho público, sustraída al Estado, en la cual tenían validez ideales políticos y principios formales e informativos, distintos de los del Estado. Bajo barnices de derecho alemán, como "idea cooperativa", "libertad de administración", "asuntos propios", etc., una doctrina jurídica consciente sacudió el principio de jefatura jerarquizada de la construcción estatal prusiana." Se forjaron teorías y prácticas, que hicieron posibles demostraciones de protesta, como la que revela la resolución del Ayuntamiento de Berlín, en 1898, de colocar una corona sobre las tumbas de los revolucionarios rojos de marzo de 1848, o bien como el

llamado conflicto de banderas en Potsdam, entre Estado y Municipio, resuelto por sentencia del Tribunal Supremo, fecha 9 de julio de 1928.

El Nacionalsocialismo inició su ataque a la estructura anterior mediante el envío de comisarios a las ciudades. Así estuvo hasta la Ley prusiana de 15 de diciembre de 1933, que es base de la de 30 de enero de 1934, para toda Alemania. Aquí se modifica y se transforma totalmente la concepción liberal. El Municipio pasa a ser "célula del Estado". Ha caducado, definitivamente, la idea de que constituye parte exenta. Los municipios dependen de la dirección política nacional, y aun en su vida interior aparecen sometidos al sistema de jefatura jerarquizada, siendo su Jefe el Burgomaestre. Este deja de ser elegido, y es designado por la autoridad superior del Estado. A él se une el Consejo, órgano consultivo, designado de acuerdo con el consiliario del Partido, que es a quien incumbe la dirección política local. El Consejo asesora al Burgomaestre en una larga serie de ocasiones. El Partido no interviene directamente, pero se exige su beneplácito en numerosos actos, y el mismo puede hacer convocar, de acuerdo con el Burgomaestre, al Consejo municipal. La ciudadanía honoraria y sus distintivos, tampoco pueden concederse sin aprobación del Partido.

Berlín tiene un régimen local peculiar. Una Ley, la de 1.º de diciembre de 1936, regula especialmente la constitución y la administración de la capital del Reich.

F. Alonso Bárcena, La Compañía de Jesús, restablecida (Razón y Fe, septiembre 1938); J. Beneyto, Vázquez de Me-
lla (Barcelona 1939); Franco, Palabras del Caudillo (Ed. Pren-
sa y Propaganda de FET y de las JONS, 1938); S. Mingui-
jón. La cuestión española (Orientación española, julio, 1938);
J. Garrán Moso, Sofismas y razones; Del ateísmo legal a la
unidad católica (1939); F. Yzurdiaga, Discurso al silencio y
voz de la Falange (Pamplona, 1938); J. A. Primo de Rivera,
Discursos;—Siete editoriales de "Arriba" y su comentario
(Servicio Nacional de Propaganda 1938).

Sobre Italia, A. Dempf, Die Stellung des Katholizismus
Europäische Revue, 1932); A. C. Jemolo, La classifica dei
rapporti fra Stato e chiesa (Archivio Giuridico 1938); Del
Giudice, Le nuove basi dell diritto ecclesiastico italiano
(Milán, 1929); F. Ercole, Der Faschistische Staat und die
Katholische Kirche (Europäische Revue, 1939); M. Missi-
roli, Date a Cesare: La política religiosa di Mussolini (Ro-
ma, 1929); B. Mussolini, Scritti e discorsi (1934); A. Piola,
La questione romana nella storia e nel diritto da Cavour al
Tratado de Latterano (1931). En general, M. T. Zanzucchi,
Istituzioni di diritto pubblico (Milán, 1936).

Sobre Alemania, bibl. reseñada en Beneyto, Nacionalso-
cialismo (Barcelona, 1934), y especialmente Huber, Verfas-
sung (193r). Sobre los nuevos conceptos, A. W. Machholz,
Die lebendige Kirche (Die Tat, julio 1933). Un resumen en
Santoro, Vier Jahre Hitler-Deutschland (1937).

Sobre Portugal, G. de Reynold, Portugal (Paris, 1936);
Salazar, Discursos (Coimbra, 1935-37).

CAPITULO DECIMOQUINTO

IGLESIA Y ESTADO

70. Catolicidad del movimiento español.

La catolicidad de España, vulnerada cien veces por la República del 14 de abril, constituye medula del Estado Nacional sindicalista. Uno de los Puntos programáticos, el 25, lo declara de modo terminante: "Nuestro movimiento incorpora el sentido católico, de gloriosa tradición y predominante en España, a la reconstrucción nacional".

En el pensamiento de la Falange, estas ideas son reiteradamente conocidas. Salvador Minguijón ha comentado que "abundan sobremanera los testimonios que certifican el carácter espiritualista y religioso del movimiento, y esto no solamente por parte del viejo tradicionalismo español..." En efecto, la doctrina inicial de la Falange era ya doctrina de plena afirmación católica, no en la palabrería, a veces vana, sino en lo hondo de su fundamentación filosófica. En su Discurso del 29 de octubre, dijo José Antonio textualmente: "Sólo se respeta la libertad del hombre cuando se le estima como nosotros le estimamos, portador de valores eternos; cuando se le estima envoltura corporal de un alma, que es capaz de salvarse y de condenarse". E Yzurdiaga comentó en su Discurso de Vigo (28 de noviembre de 1937): "¡Qué afirmación tan escueta, tan clara y tan católica!" "Definir al hombre--añadió--como envoltura corporal de un alma es mirar al "hombre total..." El hombre "to-

tal" de la Falange es el mismo hombre "total" del Catolicismo, unión de dos elementos, cuerpo y alma, materia y espíritu. Y para ajustar el hombre su conducta a la Ley Divina, poniendo en juego su libertad y el auxilio de la gracia, pasa por el mundo movido por las palancas gigantescas del Bien y del Mal". Ahí reside la interpretación espiritualista de la Historia que declara Falange al asegurar que "lo espiritual ha sido y es el resorte decisivo en la vida de los hombres y de los pueblos", y destacar que "aspecto preeminente de lo espiritual es lo religioso".

En su Esquema de una política de aldea ("Arriba", 25 de abril de 1935), escribía José Antonio: "Es necesario que el centro espiritual de la aldea sea la parroquia, como órgano supremo de su moralidad... Nada como la libertad y la fortaleza de la Iglesia, en la esfera que le es propia, evita su mezcla deplorable con la política".

Estas afirmaciones completan la del Punto 25, y demuestran que la catolización del País es tarea propia del Movimiento.

En cuanto a las relaciones con la Iglesia romana, el propio Punto 25 señala el camino del Concordato. "La Iglesia y el Estado—dice—concordarán sus facultades respectivas, sin que se admita intromisión o actividad alguna que menoscabe la dignidad del Estado o la integridad nacional". Podrían darse por supuestas estas normas para el Concordato, visto que la Nueva España quiere volver a ser la España Eterna, con Unidad, Grandeza y Libertad, pero Falange estimó necesario decirlo porque, cuando se publicaban los Puntos, algunos jerarcas y ministros de la Iglesia olvidaban que eran españoles, y ayudaban paladinamente a la secesión política y territorial de España.

El Alzamiento del 18 de julio supuso una derogación implícita de cuanto se había hecho contra la tradición católica española. Antes de que

ley alguna lo apoyase, "ipso jure", por virtud de Alzamiento, recabó España la catolicidad de su Estado. Se impuso de nuevo la enseñanza religiosa primaria (Orden de 21 de septiembre de 1936), y se intensificó la misma, con digno sentido penitencial, durante la Cuaresma (Orden 1.º de marzo de 1937). Llevóse el Santo Crucifijo a los Institutos y Universidades (O. 30 marzo 1939). Las fiestas religiosas tradicionales volvieron a tener esplendor civil. Resurgieron las festividades populares de la Inmaculada, San José y Corpus Christi, y la devoción nacional a la Virgen Purísima fué suscitada con entusiasmo (Circular de 1.ª Enseñanza de 9 de abril de 1937). La Orden del 14 de noviembre de 1938 restableció los Patronos de las distintas Armas del Ejército. La L. de 2 marzo 1939 restableció la exención de la contribución territorial aplicable a los bienes de la Iglesia. El Fuero del Trabajo hizo la afirmación de que "las leyes obligarán a que sean respetadas las festividades religiosas que las tradiciones imponen" (Fuero II, 3), y, en fin, se empezó a actuar de acuerdo con las declaraciones del Caudillo: "Nuestro Estado ha de ser un Estado católico en lo esencial y en lo espiritual..." (noviembre de 1937). Se envió un Embajador al Vaticano, y antes que la Iglesia romana hiciese una proclamación pareja, el Estado español, por el Decreto del Ministerio de Justicia de 3 de mayo de 1938, que restablece la Compañía de Jesús—de tradición española por su Capitán y por su Misión—, reconoció y afirmó la existencia de la Iglesia católica "como sociedad perfecta en la plenitud de sus derechos".

Comentando el decreto de 3 de mayo, afirmó el P. Alonso Bárcena, que quiere decir esto. "Que la Iglesia puede, dentro del territorio español, con la aprobación y reconocimiento del Estado, cumplir la misión salvadora que Jesucristo le encomendó y utilizar para ello todos los medios que

de Él recibió y usar de toda la potestad soberana que para salvar y santificar a los hombres le fué concedida; que puede urgir el cumplimiento de sus leyes; que puede trabajar por elevar la vida en el orden moral; que puede llevar la alteza de sus pensamientos evangélicos a todas las inteligencias y la pureza de las costumbres cristianas a todos los corazones hasta transformar, cuanto lo permita la flaqueza humana, nuestros hombres, nuestras familias y nuestra sociedad completa en aquel ideal de virtud que nos describe el Evangelio. No son otros los fines de la Iglesia, ni es otra la raíz de sus derechos, ni pueden ser otras sus supremas aspiraciones”.

El problema vino a ser actualizado de nuevo por la Ley de 2 de febrero de 1939, derogatoria de la de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 2 junio 1933. Esta derogación, que significa un tributo a la concepción legalitaria, no era precisa desde el momento en que el Alzamiento es una Revolución nacional que hace tabla rasa con cuanto está en contradicción con sus principios, y éste del catolicismo exigía la fulminante anulación, “ipso facto”, de aquella Ley persecutoria. La propia Ley del 2 de febrero reconoce que la del 2 de junio iba directamente contra la realidad de ser en España única religión la católica, “inspiradora de su genio y tradición”. Evidentemente, la disposición transitoria de la Ley que comentamos—“las Ordenes religiosas recobran la situación jurídica que tenían en España con anterioridad a la Constitución de 9 diciembre 1931”—, ha regido plenamente antes de que lo proclamase así una disposición del Estado.

En otro aspecto, esa misma Ley de 2 de febrero viene a enfrentarse con la Constitución de 1931, al afirmar que la de 2 de junio fué dictada “en ejecución de los artículos 26 y 27 de la Constitución de 9 diciembre 1931”. Esa Ley—dice—iba contra

la tradición española y contra la justicia; pero además—e importa subrayarlo aquí—violentaba e incumplía “la santidad de un pacto bilateral que el nuevo Estado respeta, por obligar igualmente a las altas partes contratantes”.

Todo esto es así porque la Falange es católica, y porque, siendo católica nuestra tradición, no podía dejar de serlo el nuevo Estado. Pero lo es, además, por culto a la Unidad, porque el catolicismo es factor importante de la nuestra Unidad, y ha de seguir vivificándola junto al amor a la Patria española.

71. El catolicismo del Estado fascista.

También Italia tiene tradición católica y su Partido lo proclama por boca del Duce. Mussolini dijo, en el discurso de 14 de mayo de 1929: “El Estado fascista reivindica plenamente su carácter ético: es católico, pero ante todo es fascista... El catolicismo constituye parte integrante del Estado y lo declaramos abiertamente, pero que nadie vaya a embrollar su desarrollo por sutilezas filosóficas o metafísicas.” ¿A qué vienen estas suspicacias, detrás de tan vibrante afirmación? Vienen a que Italia ha tenido con el Pontificado sesenta años de malas relaciones. Vienen a que frente al Fascismo había un partido católico populista...

A pesar del antecedente de 1870, y a pesar del Abate Sturzo, el Fascismo trabajó vigorosamente por la paz religiosa, por la unidad católica de la vida espiritual italiana. Recuérdese con M. T. Zanzucchi, que la ley de Garantías, “en vez de resolver un conflicto entre el Estado liberal y la Santa Sede, lo exasperó en cierta forma”. Solamente con la subida al Poder de Mussolini, mejoró la

situación, y esta mejora adquirió—sigue diciendo el Profesor del Sacro Cuore—ritmo acelerado y decidido. Se empezó con la lista de los días festivos, lista en la que se incluyó lo que pedía la tradición católica nacional (Ley 30 de diciembre de 1923). Vigilóse la actividad de la Prensa en los ataques a la religión (Decreto de 15 de julio de 1923). Se introdujo la enseñanza religiosa (Decreto de 1 de octubre de 1923), etc. De este modo se hizo cambiar la atmósfera y resultó posible pensar en un acuerdo. Al fin, el Fascismo firmó con la Santa Sede el Tratado de Letrán, que termina con los sesenta años de discordia, creando la Ciudad Vaticana.

Por el Concordato de 11 de febrero de 1929, anexo al Tratado de Letrán, se regula el aspecto político nacional de la relación entre Iglesia y Estado. El artículo 1.º del Tratado declara que Italia "reconoce y reafirma el principio consignado en el artículo 1.º de la Constitución del Reino, del 4 de marzo de 1848, según el cual, la religión católica, apostólica romana, es la única religión del Estado". Se fijan luego ciertas materias que deben someterse a normas concordadas, y por eso el Concordato mantiene vivo enlace con el Tratado. Según aquél, la Iglesia tiene en Italia libertad de ejercicio de culto y jurisdicción eclesiástica, y el Estado conserva íntegra su soberanía en el campo civil y político.

Concretamente, la Iglesia católica posee el libre ejercicio de su poder espiritual con reconocimiento explícito del Estado. Ella provee los beneficios y el Poder público reconoce los entes eclesiásticos. Principalmente es interesante cuanto deriva en el régimen civil y administrativo.

Aparte del católico, existen en Italia cultos admitidos. Son precisamente los que figuran como tales en la Ley de 24 de junio de 1929, que aplica

el Concordato, y en el Decreto de 28 de febrero de 1930, que viene a ser su reglamento.

72. El cristianismo nacionalsocialista.

(Con más vigor que en Italia, el populismo se había enfrentado con el nuevo Partido alemán. Es preciso que esto se tenga en cuenta, como ha sabido subrayar el propio Caudillo español. (Declaraciones a "Candide", agosto de 1938.) Alemania vió la intromisión de la Iglesia católica, con sus jerarcas y ministros, contra Hitler. En los días de elección, se daban consignas desde los púlpitos, y se negaba a Hitler la calidad de católico, para hacer votar a los fieles con los protestantes y los marxistas.

Por otro lado, el sistema político weimariano era una coalición de socialistas, liberales y católicos. Así, los tres influjos pasaron a la Constitución, y en ella, el artículo 137, párrafo 8, protegía a la Iglesia, pero protegía, al propio tiempo, a las asociaciones de librepensadores; es decir a los "sin-Dios", que son los mayores enemigos de la Iglesia.

A pesar de la campaña eclesiástica y política anti-hitlerista, y a pesar de los antecedentes weimarianos, el Partido Nacionalsocialista mantuvo su Punto 24, con afirmación de libertad para todas las confesiones que no contradijesen la moral y las costumbres, y con la aceptación de un cristianismo positivo. Esta era la única fórmula posible para mantener la Unidad en un país de dos grandes confesiones cristianas.

El 23 de marzo de 1933, Hitler afirma que "el Gobierno nacional considera a las dos confesiones cristianas como a los más importantes factores..." Con esta declaración, se colocó en la posi-

ción de campeón de la cristiandad contra el ateísmo. ¿Qué se ha hecho luego? Por lo pronto, las leyes de julio de 1933. Ante todo, el Concordato con la Iglesia católica (20 de julio de 1933), que señaló la paz con la Iglesia y permitió sentar un obispo católico en el Consejo de Prusia. El Concordato reconoce la autonomía administrativa de la Iglesia, bien que se admita en él la inspección estatal. Figura también en el Concordato la exigencia de fidelidad al Caudillo por parte de los Obispos.

Problema distinto es de la marcha posterior de estas relaciones. En todo caso no son ajenos a ella ciertos aspectos políticos de los que es muestra ejemplar la incorporación de Austria.

En cuanto a la Iglesia luterana, que es la otra confesión, el primer problema era el de unificar. El luteranismo tenía veintidós iglesias territoriales autónomas. El Nacionalsocialismo proveyó inmediatamente a la creación de una Iglesia luterana nacional, con su obispo primado y su sínodo. La Ley de 11 de julio de 1933, aprobó el Estatuto de la Iglesia luterana, y la de 14 de julio de 1933 la unificó como corporación de derecho público. Nuevas disposiciones posteriores son las leyes de 11 de marzo de 1935 y 26 de junio de 1933, sobre administración de bienes y procedimiento judicial, respectivamente.

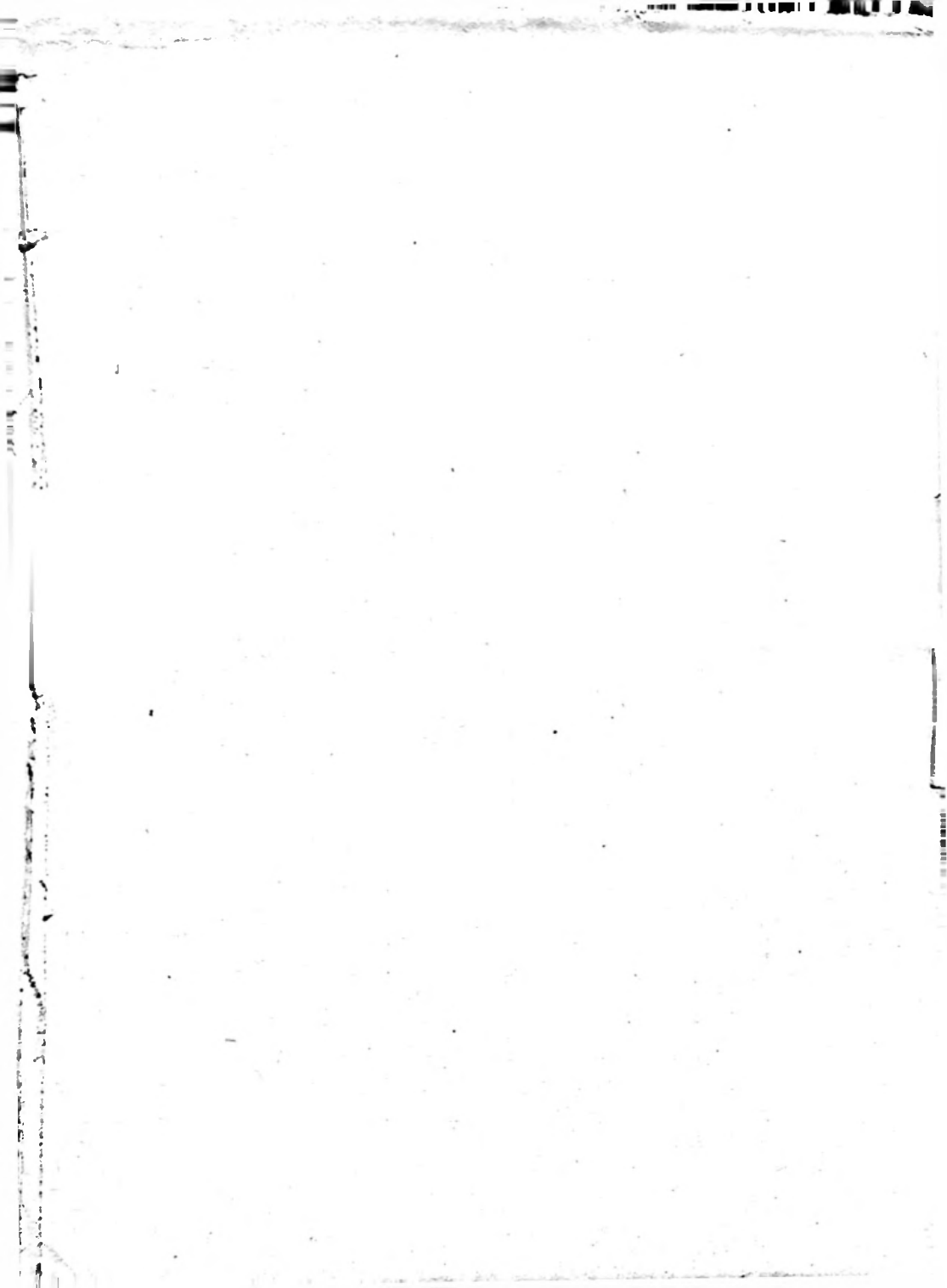
73. La Iglesia en el Estado nuevo portugués.

De Reynold, en su libro sobre Portugal, escribe: "Estoy extrañado de que el Nuevo Estado portugués haya hecho relativamente poco por la Iglesia". Y, con De Reynold, son muchos los extrañados. Precisamente porque olvidan que el "Estado Novo" no es un Estado totalitario, y tiene ciertos

resabios liberales. El Estado portugués de Carmona y Salazar no persigue a la religión, como hacía la República, pero continúa siendo laico. Y esto se explica, porque Salazar atiende al ambiente, a la opinión del país, que manteniendo una cierta tradición católica, no puede decirse que la practique. Y se explica también por la anterior actitud populista, que—como en Italia, como en Alemania—hizo de la religión una plataforma electoral.

En su discurso de 23 de noviembre de 1923, expuso Salazar notables afirmaciones a este respecto. Tras confesar que él fué en 1922 uno de los fundadores del Centro Católico, para hacer política aceptando el régimen, dijo: "La entidad denominada Centro Católico, o sea la organización independiente de los católicos para actuar en el terreno político, se reveló inconveniente para la marcha de la Dictadura..." Añadía: "He observado que no es conveniente al desenvolvimiento y a la pureza de la vida religiosa, la intromisión de la política en la religión, la confusión de los intereses espirituales con los intereses materiales de los pueblos, de la Iglesia con cualquier organismo que, actuando en el terreno político, pueda ser tomado como un partido, aspire o no al gobierno..."

Así Portugal—a pesar de la viva amistad entre Salazar y el Primado, compañero suyo de trabajos y estudios—, no tiene un Concordato con la Iglesia más que a los efectos de mantener su Patronato en Oriente. Existen relaciones diplomáticas entre Portugal y la Santa Sede, pero no se ha reparado lo que hizo la República en 1911, por estimarse que la Iglesia ha debido considerar aceptados aquellos hechos a raíz del restablecimiento de relaciones operado bajo Sidonio Pais.



INDICE

Páginas

Prólogo	7
---------------	---

PRIMERA PARTE

CRISIS DEL ESTADO Y NUEVA LEGALIDAD

Capítulo I.—Civilización, Estado y Orden Nuevo

1. Crisis de la Civilización y del Estado	13
2. Causas de la crisis	16
3. Tendencias esenciales del Estado Nuevo.	21

Capítulo II.—La instauración revolucionaria

4. El Alzamiento y la Revolución	27
5. La Dictadura y la legalidad	30
6. Los ejemplos de Italia, Turquía y Portugal	33
7. La instauración del Nacionalsocialismo	35
8. La vigencia de la legalidad superada	36

Capítulo III.—El Régimen

9. El concepto de régimen	41
10. El derrumbamiento de la legalidad anterior al 18 de julio	43
11. La primera piedra del nuevo Estado español ..	46
12. El decreto 255 y la Constitución del Gobierno regular	48
13. El régimen fascista	50
14. La Revolución hitlerista	53
15. El Kemalismo	54
16. El nuevo régimen portugués	55
17. Nuevo régimen y "vuelta al pasado"	56

SEGUNDA PARTE

TRADICION Y ORDEN NUEVO

Capítulo IV.—Nuestro orden político nacional y su deformación

18. La originalidad encubierta	61
19. La sinfonía interrumpida	65
20. Desjerarquización frente a la Jefatura	67
21. Igualitarismo contra igualdad	69
22. Renta contra interés común	70

Capítulo V.—Decadencia y resurrección del elemento tradicional

23. Los judíos	75
24. Los afrancesados	76
25. Los masones	77
26. Voltaire, Rousseau, Smith	78
27. El 18 de julio, grito de reconquista	79

Capítulo VI.—El concepto de comunidad nacional

28. El concepto de pueblo	83
29. La tradición española de la "unidad de pueblo" ..	87
30. La "unidad de pueblo" en la doctrina nacional- sindicalista	90
31. La idea de comunidad nacional en el fascismo ..	92
32. La "unidad de pueblo" en el Nacionalsocialismo ..	93
33. El "populismo" Kemalista	95

Capítulo VII.—La unidad de mando

34. La unidad de mando en el nuevo Estado español.	99
35. La tradición española en la unidad de mando ..	102
36. La división de poderes y la unidad de mando ..	107
37. La unidad de mando en el Estado fascista	110
38. La unidad de mando en el nacionalsocialismo: sus fundamentos y realizaciones	112
39. La unidad de mando en Turquía y en Portugal .	114

Capítulo VIII.—El servicio (interés común)

40. Presencia y tradición española a el concepto de interés común	117
41. La idea de servicio en el Estado fascista	122
42. Funcionarios y soldados en la Alemania nacional-socialista	123
43. La idea de servicio en Portugal y Turquía	124

TERCERA PARTE

LA ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL

Capítulo IX.—La Doctrina

44. Elementos teóricos del Nacionalsindicalismo ..	129
45. Los fundamentos del derecho vigente en el Estado español	133
46. La doctrina fascista	137
47. La doctrina nacionalsocialista	139
48. La doctrina de Salazar	140
49. La lección austriaca y el contraejemplo chino ..	142

Capítulo X.—El Jefe y el Consejo

50. El Caudillo y el Consejo en el Estado nacional-sindicalista	145
51. Duce y Gran Consejo en el fascismo	151
52. Caudillo y séquito en el nacionalsocialismo	154
53. Los caudillos de Portugal y Turquía	158

Capítulo XI.—El Partido

54. La Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.	163
55. El partido nacional fascista	169
56. El partido nacionalsocialista obrero alemán	172
57. La unión nacional portuguesa	175
58. El partido republicano de pueblo	177

Capítulo XII.—Los Ciudadanos

59. La situación jurídica de los ciudadanos en el nuevo Estado español	181
--	-----

	<u>Páginas</u>
60. Los "derechos fundamentales" en el fascismo ..	187
61. Los "derechos fundamentales" en el nacional-socialismo	190
62. Los nuevos conceptos en el derecho portugués ..	193

Capítulo XIII.—Los Estamentos ¹

63. Economía y cultura en el nuevo Estado español ..	199
64. La organización corporativa italiana	205
65. Integración económica y cultural en el Estado nacionalsocialista	209
66. El corporatismo portugués	214

Capítulo XIV.—Las Administraciones

67. Sentido unitario del nuevo régimen español	219
68. La reforma administrativa fascista	222
69. Del federalismo Weimariano a la unidad hitlerista.	224

Capítulo XV.—Iglesia y Estado

70. Catolicidad del Movimiento español	229
71. El catolicismo del Estado fascista	233
72. El cristianismo nacionalsocialista	235
73. La Iglesia en el Estado nuevo portugués	236

OTRAS PUBLICACIONES DEL MISMO AUTOR

- Antonio Sardinha y la cuestión peninsular.—Madrid, 1927.
- Los medios de cultura y la centralización bajo Felipe II.—Madrid, 1927.
- El valor jurídico de la Ley.—Madrid, 1929.
- Instituciones de derecho histórico español.—Barcelona, 1931-32.
- Fuentes de derecho histórico español.—Barcelona, 1932.
- Regulación del Trabajo en la Valencia del 500.—Madrid, 1932.
- Sobre la territorialización del Código de Valencia.—Castellón, 1933.
- Notas sobre el origen de los "usos comunales".—Madrid, 1933.
- Nacionalsocialismo.—Barcelona, 1934.
- Vázquez de Mella.—Barcelona, 1939.
- El Partido.—Zaragoza, 1939 (en colaboración con José María Costa).
- I problemi del lavoro nella storia del diritto spagnolo.—Bologna, 1929.
- Contributo allo studio degli ademprivia.—Città del Castello, 1932.
- Il diritto catalano in Italia.—Roma, 1933.
- Diritto romano e diritto popolare nel Medioevo spagnolo.—Padua, 1934.
- Per un index d'escriptors "super foris regni valentiae".—Valencia, 1935.

CINCO JUICIOS SOBRE LA PRIMERA EDICION

LIBRO DE AUTENTICA ESTIRPE

No es tanto un libro de introspección como de perspectivas; más que de consignas de derecho. Juan Beneyto—uno de nuestros más firmes valores en el estudio del Derecho público—, se sitúa como espectador ante el nuevo orden de cosas y contempla el problema político español, primero como una derivación substancial de nuestro propio pueblo, después como una forma de vanguardia en la renovación política del Mundo actual.

Es obra de estudio detallado, minucioso y profundo, cual corresponde a un técnico experto, a un profesional de estas disciplinas; obra digna de ser llevada a las aulas y estudiada con cariño; bastante tiempo hemos errado por las Universidades desconociendo científicamente la existencia de la Italia fascista y creyendo que la última novedad política del tiempo presente era Carlos Marx.

Juan Beneyto abre con su libro una huella en el campo universitario, aún virgen de nuestras propias doctrinas políticas. Congratulémonos de que esta primera huella se haya trazado según nuestro más destilado concepto nacionalsindicalista del Estado.

(A. Abad Ojuel, en "Unidad" de San Sebastián).

TENDRA MAS VALOR CON LOS AÑOS

Juan Beneyto Pérez ha trazado con mano segura y buen conocimiento del tema, un estudio extenso y perfecto de la doctrina que preside el nuevo Estado español con su arranque en la tradición, su evolución con arreglo a las necesidades de épocas sucesivas hasta "la presencia vigente en el Nuevo Derecho Público".

El indiscutible valor que en estos momentos tiene el

libro, se irá acreciendo con los años, y pasará al clasicismo como una de las primeras y más estimables aportaciones hechas en la nueva Era de España al estudio de los conceptos fundamentales de la organización y del derecho público actual.

(N. Sanz y Ruiz de la Peña, en "El Norte de Castilla", de Valladolid).

OBRA INDISPENSABLE

Jugoso y hondo es el libro del señor Beneyto Pérez. En él se dolinean y burilan los perfiles de este Estado que ha alunbrado la luz de las Victorias en la piel totémica de España.

Hontanares de Historia de los que fluyen las aguas que muelen el trigo espigado en los campos españoles bajo las caricias de los soles triunfadores. Pasado y presente con albas de radiante porvenir. Todas estas perspectivas, trazadas de mano maestra por el señor Beneyto Pérez, se ofrecen a la vista de quienes se adentren en la lectura del volumen.

En suma: que se trata de un libro cuya lectura se hace necesaria para cuantos quieran hallarse al cabo de lo que el Glorioso Movimiento significa. La cultura del autor y su brillante estilo son otros tantos méritos que realzan los valores de la obra.

("La Gaceta del Norte", de Bilbao).

AL SERVICIO DE LA NUEVA ESPAÑA

Tenemos en este libro un laudable intento de organizar el cuerpo de doctrina nacionalsindicalista, no ya en cuanto doctrina polémica, sino ya en cuanto teoría del Estado. Es la primera vez que el intento se emprende, y debemos reconocer que Beneyto ha conseguido un éxito.

En estos momentos de creación de un Estado y de un régimen, una ordenación sistemática de la doctrina nacionalsindicalista ya creada, y una orientación para continuar su lincaamiento de acuerdo con sus fundadores y con las necesidades actuales de la victoria de Franco, es altamente conveniente. Beneyto ha cumplido ampliamente este cometido,

y ha puesto sus conocimientos de jurista al servicio de Franco, con lo cual cumple como buen soldado.

(Radio Nacional de España, de Burgos).

"He aquí un libro interesantísimo, de gran utilidad en los momentos presentes."

Ha dicho el Prof. Sancho Izquierdo desde la Revista de la Universidad de Zaragoza.

LA ESPAÑA IMPERIAL

MAGNÍFICA COLECCIÓN DE BIOGRAFÍAS DE LAS
PRINCIPALES FIGURAS DEL IMPERIO

(VOLÚMENES DE 250 A 300 PÁGINAS)

PUBLICADAS

ISABEL LA CATÓLICA

POR

EL BARÓN DE NERVO

FELIPE II

(Rey de España y Monarca de Universo)

POR

MARIANO TOMÁS

CISNEROS

POR

J. GARCÍA MERCADAL

EL GRAN CARDENAL DE ESPAÑA

(DON PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA)

POR

EL MARQUÉS DE LACADENA

DOÑA JUANA LA LOCA

POR

N. SANZ Y RUIZ DE LA PEÑA

DON JUAN DE AUSTRIA

(PALADÍN DE LA CRISTIANDAD)

POR

MANUEL FERRÁNDIS

HERNÁN CORTÉS

(CONQUISTADOR DE MÉJICO)

POR

LUIS TORRES

ALEJANDRO FARNESIO

(DUQUE DE PARMA)

POR

JULIÁN MARÍA RUBIK.

EN PRENSA

EL GRAN CAPITÁN

POR

JUAN MONEVA Y PUYOL

DON FERNANDO EL CATÓLICO

(POLÍTICO GENIAL)

POR

M. FERNÁNDEZ ALMAGRO

PIZARRO

(CONQUISTADOR DEL PERÚ)

POR

M. BALLESTEROS GAIBROIS

LOPE DE VEGA

POR

JOAQUÍN DE ENTRAMBASAGUAS

CARLOS V

POR

FRANCISCO DE COSSÍO

CALDERÓN DE LA BARCA

POR

N. ALONSO CORTÉS

A CONTINUACIÓN APARECERÁN OTRAS BIOGRAFÍAS
DEBIDAS A LOS MAS ILUSTRES AUTORES

PÍDANSE EN TODAS LAS LIBRERÍAS DE ESPAÑA Y AMÉRICA

SEIS PÉSETAS CADA TOMO

PRECIO: 7 PESETAS



MORENO DE MORA, 4
CADIZ